



contrapunto

3

uruguay

- > la dialéctica entre lo posible y lo necesario. *benjamín nahoum*
- > cambios y disputas territoriales: el caso de la región metropolitana noreste de montevideo. *alfredo falero, marcelo pérez, mauricio ceroni, aline da fonseca y alicia rodríguez*

américa latina

- > acapatzingo: construyendo comunidad urbana. *césar enrique pineda*
- > horizontes de transformación del movimiento urbano popular. *alexandra martínez*

debates en la coyuntura

- > una nueva clase trabajadora. *marilena chauí*

los movimientos debaten

- > federación uruguaya de cooperativas de vivienda por ayuda mutua (fucvam) uruguay
- > movimiento de pobladores en lucha (mpl) chile
- > movimiento popular la dignidad (mpld) argentina



3 noviembre
debates en movimiento

contrapunto

territorios urbanos en disputa.

contrapunto | territorios urbanos en disputa | debates en movimiento

3

En América Latina, en especial en el sur, un contrapunto es una payada a dúo, que toma forma de duelo cantado, en el cual cada payador improvisa y canta en base a un tema o a las preguntas del otro. Así, como un contrapunto que se construye en el dialogo entre payadores, esta publicación nace desde la inquietud por los desafíos a los que se enfrentan los movimientos sociales o de las preocupaciones por mejorar el trabajo conjunto de la universidad con los mismos y se propone mostrar los debates actuales respecto a los movimientos sociales latinoamericanos.

Del mismo modo que un contrapunto puede durar varias horas o varios días y finaliza sólo cuando uno de los payadores no responde de forma inmediata a la pregunta del otro, Revista Contrapunto compone de debates que se han iniciado varias décadas atrás, y se propone continuar la construcción dialógica desde la producción teórica de nuestros intelectuales y militantes actuales. Esta iniciativa nace de ese dialogo, entre el Centro de Formación Popular Oeste de Montevideo (CFPOM) y las organizaciones populares -sindicatos, cooperativas de vivienda, colectivos territoriales-. El CFPOM es uno de los programas del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República y su actividad central es la construcción de actividades y planes de formación popular como parte de la práctica de extensión universitaria con mirada integral. Es desde ese contrapunto, a partir de los problemas y desafíos de las organizaciones populares, que hemos iniciado procesos de investigación; y son esos mismos problemas y desafíos los que nos llevan al esfuerzo colectivo para que esta publicación nazca, permanezca y se convierta en herramienta para los debates urgentes y necesarios.

contrapunto



Contrapunto

Territorios urbanos en disputa.

Revista Contrapunto es una publicación del
Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo.
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio.
Universidad de la República. Uruguay
Brandzen 1956, P2. Montevideo Uruguay
+559824090286
contrapunto@extension.edu.uy

**La revista está abierta para recibir nuevos contrapuntos
que enriquezcan los debates.**



ISSN: 2301-0282

Editores:

Diego Castro

Lucía Elizalde

Mariana Menéndez

Carlos Santos

María Noel Sosa

Humberto Tommasino

Raúl Zibechi

Corrección: María Inés Dorado y Rossana Lemme

La corrección de estilo de los textos fue realizada por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con la supervisión de la Prof.a Adj. (int.) Raquel Conde.

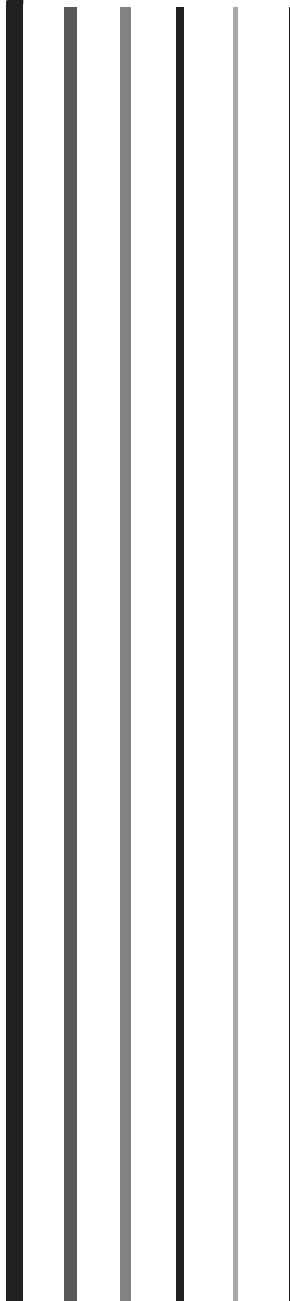
Diseño: Nicolás Medina y Sebastián Carreño

Una nueva clase trabajadora y Ciudades brasileñas, junio de 2013: lo(s) sentido(s) de las revueltas, fueron traducidos por Matilde López Rivero.

Noviembre 2013

contrapunto

**Territorios urbanos en
disputa.**



INDICE

I Uruguay

Cien meses de política de vivienda del Frente Amplio. La dialéctica entre lo posible y lo necesario. *Benjamín Nahoum.* 13

Apuntes del pasado para la vida digna. *Diego Castro, Mariana Menéndez, María Noel Sosa, Raúl Zibechi.* 23

Cambios y disputas territoriales: el caso de la región metropolitana noreste de Montevideo. *Alfredo Falero, Marcelo Pérez, Mauricio Ceroni, Aline da Fonseca y Alicia Rodríguez.* 33

II América Latina

Acapatzingo: construyendo comunidad urbana. *César Enrique Pineda* 49

Horizontes de transformación del movimiento urbano popular. *Alexandra Martínez.* 63

(In)versiones de ciudad. *María Mercedes Ferrero, Ayelén Gallego.* 77

III Debates en la Coyuntura

Una nueva clase trabajadora. *Marilena Chauí.* 91

Ciudades brasileñas, junio de 2013: lo(s) sentido(s) de las revueltas. *Marcelo Lopes de Souza.* 105

IV Los movimientos debaten

La vivienda: ¿Derecho Humano o Mercancía? *Pablo Caballero y Fernando Zerboni.* 127

Territorio, comunidad y autonomías en movimiento. Movimiento de Pobladores en Lucha. *Henry Renna.* 141

Poder popular, prefiguración y militancia integral en los territorios urbanos. *Movimiento Popular La Dignidad.* 153

Editorial

Las ciudades son espacios de interacciones múltiples, donde confluyen y coliden, convergen y rivalizan –abigarradas en el inevitable mestizaje urbano– las principales tendencias y corrientes que laten en nuestras sociedades. Los flujos del capital las convierten en las áreas idóneas para la inversión inmobiliaria, capaces de modelar y remodelar vastas superficies, creando dilatados espacios para el flujo de mercancías y el movimiento incesante de bienes. Los gobiernos locales buscan planificar la ciudad introduciendo cierto orden, evitando extremos de caos inevitables si la lógica mercantil fuera dejada de la mano invisible del mercado. Los sectores populares pugnan por hacerse un lugar entre ambas intervenciones, como forma de afianzar sobrevivencia y dignidad, aspectos que no suelen caminar de la mano en el estrecho pretil de la lógica dominante.

La ciudad ha sido a lo largo del último siglo el espacio privilegiado del conflicto social, al que debieron apelar los trabajadores y las trabajadoras para conquistar o hacer valer derechos y, más recientemente, para construir formas de vida heterogéneas inspiradas en sus valores y sueños. Las ciudades latinoamericanas, las de la región y las de nuestro país, han sido escenarios y palcos, las más de las veces, de un conflicto social implícito y tangencial; frontal y explícito en contadas ocasiones.

Desde el Caracazo de 1989 hasta las recientes manifestaciones del mes de junio en Brasil, parques y avenidas, plazas y calles, ferias populares y shoppings son –y serán– territorios en disputa material y simbólica, de creación de sentidos y subjetividades. En ellos coagulan formas de vivir y habitar el mundo, culturas y códigos que encarnan el imaginario colectivo de los actores, incluyendo los diversos y contradictorios intereses que anidan en los sectores populares.

Desde comienzos del siglo XX las ciudades uruguayas son también escenarios de las múltiples disputas que atraviesan la sociedad. Desde las huelgas de los obreros frigoríficos del Cerro, quienes marcaron el arroyo Pantanoso como límite de la proyección de la otra clase (el “paralelo 38”), hasta las ocupaciones de tierras de la Fucvam en 1989, destrabando la construcción de nuevos barrios cooperativos. En ese afán por seguir-siendo como sector social, para no caer subsumidos en la lógica del capital, los trabajadores y las trabajadoras dejaron su huella, una verdadera geo-grafía urbana que el tiempo ha normalizado pero que, en su momento, fueron irrupciones que subvirtieron el orden de la dominación.

Este tercer número de Contrapunto, cuarto si tomamos en cuenta el “especial digital” dedicado a las manifestaciones de junio en Brasil, intenta reflejar una mínima parte de las acciones y construcciones que los movimientos urbanos están realizando en América Latina. Buscamos comprender cómo la acción colectiva abre grietas de esperanza en el espacio liso de la especulación inmobiliaria, creando nuevas ciudades en la ciudad, barrios y espacios de socialización donde las relaciones hegemónicas son contestadas por modos y formas otras, por hebras que están tejiendo lienzos en base a la solidaridad, la autogestión y la ayuda mutua.

Llamamos territorios a esos espacios marcados, o rediseñados, por la acción colectiva organizada y estructurada, en cuyas entrañas actores nacidos en la resistencia al modelo hegemónico intentan –no siempre exitosamente– crear algo nuevo y diferente. Este número está dedicado a esos territorios múltiples, diversos, inabarcables con una sola mirada o un método único. Abiertos, por ello, a un debate que anhelamos, a réplicas, comentarios e impugnaciones que deben poblar estas páginas con la misma frecuencia que las diferencias habitan, y enriquecen, los territorios en resistencia.

En la sección **Uruguay** presentamos en primer lugar un artículo de Benjamín Nahoum sobre las políticas de vivienda en los dos períodos de gobierno del Frente Amplio, “La dialéctica entre lo posible y lo necesario”. En “Apuntes del pasado para la vida digna” se proponen dos crónicas sobre experiencias de autogestión y ayuda mutua en cooperativas de Fucvam dignas de recordar, realizadas por Diego Castro, Mariana Menéndez, María Noel Sosa y Raúl Zibechi. En el tercer contrapunto de esta sección Alfredo Falero, Marcelo Pérez, Mauricio Ceroni, Aline da Fonseca y Alicia Rodríguez analizan el territorio y los nuevos barrios privados en las afueras de la ciudad de Montevideo y en los departamentos aledaños.

Los territorios en disputa en la sección **América Latina** son México DF, Caracas y Córdoba. En el primer caso César Enrique Pineda nos cuenta la experiencia de resistencia de La Polvorilla en “Acapatzingo: construyendo comunidad urbana”. Luego en “Horizontes de transformación del movimiento urbano popular” Alexandra Martínez analiza el papel que ha jugado los movimientos en Caracas. Finalmente María Mercedes Ferrero y Ayelén Gallego analizan algunos rasgos de funcionamiento del mercado inmobiliario cordobés en “(In)versiones de ciudad”.

La sección **Debates en la coyuntura** se detiene en lo acontecido este año en el país vecino y sus manifestaciones populares. Proponemos dos artículos, uno de la filósofa brasileña Marilena Chauí donde analiza la nueva clase trabaja-

dora, y otro del geógrafo Marcelo Lopes de Souza sobre las revueltas de junio, buscando explicaciones más minuciosas de lo ocurrido.

En **Los movimientos debaten**, tres movimientos sociales de la región relatan su experiencia de lucha y construcción, a la vez que nos presentan sus propuestas de educación, en el caso del Movimiento Popular La Dignidad de Argentina, y el Movimiento de Pobladores en Lucha de Chile, y sobre los recursos para la vivienda desde una perspectiva de los derechos humanos en el caso de Fucvam.

Los invitamos a la lectura de estos artículos donde se evidencia que la ciudad que habitamos y recorremos todos los días encierra, detrás de lo aparente, muchas otras cosas.



uruguay

contrapunto

TIERRA PARA

Cien meses de política de vivienda del Frente Amplio.

La dialéctica entre lo posible y lo necesario

Benjamín Nahoum

¿Qué ha cambiado en la situación y la política de vivienda en el Uruguay en cien meses de gobierno del Frente Amplio? Transcurridos un gobierno completo y más de la mitad de otro, de la fuerza política que en los últimos diez años ha nucleado a la mayoría de la población uruguaya, es útil hacer un balance de lo que ha pasado, de lo que aún puede pasar en los casi veinte meses que faltan para la culminación de este mandato y qué se puede esperar de un tercer período del Frente Amplio... o de una rotación de partidos en el gobierno, que seguramente sería en favor de una coalición de los dos partidos tradicionales.

La herencia

Al asumir el gobierno en 2005, el Frente Amplio encontró una situación por demás compleja. Si bien los efectos de la crisis financiera de 2002 ya habían comenzado a revertirse el año anterior, subsistían muchas circunstancias preocupantes: una fortísima caída del salario real, resultado de la dispar evolución de precios y salarios, que había agudizado la pobreza y la indigencia (el salario real cayó entre 2001 y 2003 un 26%, mientras que la población en condición de pobreza casi se duplicó y la indigente se multiplicó por tres); un descenso del producto bruto interno de más del 10% en 2002, culminación de cuatro años de caídas consecutivas; desocupación que trepaba al 17%; alza en la cotización del dólar, cuyo valor se duplicó en pesos uruguayos en 2002; consecuentemente, aumento de la inflación, que pasó del 4% en 2001 a casi el 20% en 2003.

En materia de vivienda la situación no era mejor: quince años de gobiernos marcadamente neoliberales, luego de uno de transición al finalizar la dictadura, habían reducido la inversión pública en ese rubro a los menores valores desde la aprobación, en 1968, de la Ley de Vivienda: de las 5.700 viviendas anuales promedio con financiamiento público del período

1985-1990, y las casi 11.000 del cuatrienio 1979-1982, se había pasado a 2.800 en 1994-1997, 4.300 en 1998-2001 y poco más de 2.000 en 2002-2005. La marginación del sistema cooperativo, comenzada durante la dictadura, donde se intentó suprimirlo y pasar a todas las cooperativas de propiedad colectiva al sistema de propiedad horizontal individual, continuó en este lapso: de más del 50% de los préstamos tramitados en 1973 y 1974 (cinco mil viviendas o más), se pasó a cero en 1987, menos de 700 en 1998-2001 y menos de 400 en el cuatrienio siguiente, hasta 2005.

Lo que reemplazó a las cooperativas fueron los programas de construcción de viviendas mínimas –los llamados Núcleos Básicos Evolutivos (NBE)–, construidos por empresas por el procedimiento llave en mano, que a partir de su creación en 1992, con la modificación de la Ley Plan Nacional de Vivienda (que admitió a partir de allí que se construyeran unidades con requerimientos por debajo del mínimo habitacional) fueron la opción casi exclusiva de los planes de vivienda.

El panorama se completaba con la prácticamente desaparición del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), cuya caída comenzó durante la dictadura, como resultado de muy malos negocios y aún más clientelismo, y continuó en los años siguientes, hasta hacer en los hechos que el BHU dejara de ser un actor en el mercado de los créditos para vivienda.

Del lado de las necesidades, los estudios consistentes realizados con base en las cifras del censo de 1996 reflejaban un déficit cuantitativo (viviendas nuevas que se requiere construir) del orden de las sesenta mil unidades, mientras que el cualitativo (carencias habitacionales en viviendas que no es necesario reponer, como falta de servicio sanitario o área insuficiente) afectaban a aproximadamente la mitad del parque habitacional de vivienda permanente del país. Sin embargo, el conteo de hogares y viviendas del Censo Fase I 2004 reflejaba que la situación del déficit cuantitativo era aún más grave, como consecuencia de la permanente disminución del número de personas por hogar. Esto hace aumentar la cantidad de hogares bastante más que la población y ahonda la brecha entre las necesidades y el parque habitacional en condiciones de ocupación, acercando los valores del déficit cuantitativo a los guarismos de comienzos de la década del sesenta, cuando los estudios de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) abrieron el camino para la posterior aprobación de la Ley de Vivienda de 1968.

Esta situación se reflejaba claramente en la proliferación de asentamientos irregulares, que según un relevamiento del Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), realizado para el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) ya contabilizaba, en 2006, 676 asentamientos en todo el país (tres de cada cuatro en Montevideo), habitados por casi doscientas mil personas: uno de cada quince uruguayos. Estas cifras mostraban un aumento constante del problema, y los datos de las ciudades de menos de diez mil habitantes, no incluidos en el relevamiento anterior (1998-2000) daban idea de la dimensión del problema, no solo circunscrito al área metropolitana y las ciudades capitales, sino extendido a todo el territorio nacional.

El primer gobierno frenteamplista

A pesar de estos datos (que indicaban una fuerte desinversión en el tema de la vivienda y la falta de estrategias globales para encarar el problema) y acuciado por otras cuestiones que se entendían más urgentes, la administración encabezada por Tabaré Vázquez decidió que la vivienda no podía ser una prioridad de su gobierno y que el período se dedicaría a reconstruir el aparato institucional para poner la casa en orden, a efectos de, en un segundo período de gobierno, atacar el problema de fondo.

Se elaboró entonces un Plan Quinquenal 2006-2010 que ponía metas que ni siquiera llegaban a cubrir en el quinquenio la demanda primaria anual calculada (o sea la generada por la formación de nuevos hogares y la necesidad de reposición de las viviendas que llegaban al final de su vida útil), como reconoció la propia Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi). Esto se agravó por la aplicación de recortes a las partidas aprobadas por el parlamento, destinados a reducir el gasto público pero que volvían aún más menguados los recursos disponibles.

El esfuerzo principal estaba destinado, en cambio, a la remodelación institucional. Así fue que se reforzó el papel conductor del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma); se creó la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), como organismo ejecutor de las políticas de aquel (aunque, curiosamente, también para sanear las carteras morosas del BHU, función bastante lejana de la primera); se redimensionó el BHU, transformándolo en un banco saneado pero con un papel marginal en el sector vivienda; se fortalecieron el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), en el primer caso diversificando su actuación, y en el segundo adscribiéndolo al Mvotma; se abandonó la construcción de

NBE, cuya reproducción casi patológica había sido la tónica hasta entonces, y se aprobaron nuevos reglamentos de actuación: para el otorgamiento de créditos y subsidios; para definir las características de los productos habitacionales y para el financiamiento de programas cooperativos.

Un aspecto muy importante de estos reglamentos fue la eliminación del ingreso mínimo como uno de los requisitos para acceder al financiamiento para vivienda (requisito que justamente excluía a los sectores que más necesitan el apoyo estatal), complementado con la aprobación de un sistema de subsidios diferenciales largamente reclamado, que ajusta los mismos a la capacidad económica y las necesidades de los destinatarios, protegiendo más a aquellas familias que tienen mayores dificultades.

También significó un paso adelante imprescindible la creación de la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social (Civis), por disposición legal del año 2008, que dio el necesario marco jurídico a una herramienta que ya existía en los años setenta, abandonada durante la dictadura y luego retomada con fuerza en 1990 a nivel de la capital con la primera administración frenteamplista, pero que necesitaba la escala nacional. Esa herramienta, sin embargo, aún no ha dado demasiados frutos: de vuelta la cuestión de los recursos, aunque en este caso ni siquiera se trata de dinero, sino de transferir a la Civis los numerosos inmuebles que ya son del estado y que no se usan.

Otro hecho de gran significación del período fue la reestructuración de las obligaciones con el BHU de los deudores individuales morosos (con base en quitas importantes) y acuerdos en el mismo sentido con las federaciones de cooperativas de propietarios y de ahorro previo. No pudo llegarse en cambio a un acuerdo con Fucvam, al mantener el Ministerio de Economía su intención de cobrar los colgamentos, refinanciaciones unilaterales aplicadas en lugar de los subsidios correspondientes, comenzadas en dictadura y continuadas luego en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y en cuyo carácter ilegal el Frente Amplio había coincidido reiteradamente con Fucvam, al punto de presentar su bancada de diputados un proyecto de ley para derogar dichos colgamentos, a fines de 2001.

El Mvotma sí llegó, por el contrario, a firmar un acuerdo con Fucvam para la aplicación de subsidios en las cuotas de las cooperativas que habían recibido préstamos del propio Ministerio a partir de 1993, mecanismo admitido pero nunca reglamentado ni puesto en práctica por los gobiernos anteriores. Este acuerdo, al que se llegó a fines de 2008, luego de un cambio de ministro y de la intervención personal del presidente, descomprimió una

situación que había llegado a ser sumamente ríspida.

Para Fucvam, en efecto, había sido muy difícil asimilar que los acuerdos con la administración Batlle para anular el efecto de los colgamentos, que ponían fin en 2005 a un conflicto de más de cinco años, pero que habían quedado para refrendar por el gobierno siguiente; se frustraran porque quienes habían sido sus aliados en la lucha contra los colgamentos, ahora se pusieran del otro lado. Esto, unido a la demora en fijar las reglas que habilitarían la continuación del trámite de las nuevas cooperativas, creó elementos de tensión que radicalizaron una relación que había empezado como idílica y que rápidamente se tornó problemática.

También se evidenció la dificultad de la fuerza política para asimilar a su vez que, lo mismo que en el caso del PITCNT, aun cuando una amplia mayoría de los cooperativistas y los trabajadores fueran votantes y aun militantes del Frente Amplio, no se debía esperar de ellos un apoyo genérico e incondicionado, sino que el mismo estaría sujeto en cada circunstancia a la forma en que las políticas que el gobierno adoptara repercutieran sobre esos sectores.

La puesta en marcha, bajo otro nombre –Comisión Asesora de Vivienda (Coavi)–, del grupo asesor multiactoral previsto en la Ley N.º 13.728 de 1968, hasta entonces nunca concretada, creó la expectativa de un intercambio mayor con la sociedad: la presencia en el mismo de, además de los representantes de los organismos públicos relacionados con la vivienda y de la Universidad, de empresarios, sindicalistas y cooperativistas permitía esperar que la existencia de ese ámbito ayudara a debatir y resolver entre todas cuestiones que exigían el diálogo y la multiplicidad de visiones y conjugación de intereses. Sin embargo, la Coavi se transformó más que en un ámbito de discusión de políticas y programas, en un espacio de información de decisiones ya tomadas, y sus recomendaciones, cuando las hubo, no tuvieron reflejo en las resoluciones posteriores más que en aspectos muy genéricos.

Los problemas de sintonía no impidieron que el movimiento social valorara otros cambios que implicaron importantes avances, como las políticas de combate a la pobreza; la reimplantación de los Consejos de Salarios, que dio un nuevo impulso al movimiento sindical, y una mirada nueva sobre el tema de los derechos humanos, que escondido detrás de la cortina durante casi veinte años ahora volvía a escena con la voluntad del gobierno por esclarecer causas que la «Ley de Impunidad» había puesto en el congelador.

Fue así que frente a los propósitos restauradores de la derecha (sobre

todo a partir del crecimiento de la figura del ex presidente Luis Alberto Lacalle como su representante y contendor en la disputa por la presidencia, quien amenazaba venir “con la motosierra” para desandar todo lo avanzado en esos cinco años), Fucvam emprendió junto al PIT-CNT una marcha por todo el país para reivindicar que nuestra sociedad no debía volver a las políticas neoliberales de los noventa y años siguientes, sino reafirmar las conquistas conseguidas por el movimiento popular en el quinquenio que terminaba.

Cuánto influyó eso para que el Frente Amplio conquistara un segundo gobierno, quizá esté aún por estudiarse, pero es indudable que, sobre todo en algunas localidades del interior, la movida ayudó a poner las cosas en su lugar y separar el agua del aceite.

El segundo gobierno frenteamplista

El gobierno de José Mujica comenzó con un talante muy especial respecto al tema de la vivienda, que en algún momento llegó a decirse que sería su “buque insignia”: el nuevo presidente prometió desembarcar en sus primeros quince días de gobierno en los asentamientos precarios, al frente de un ejército de voluntarios y apoyado por diferentes organismos públicos, entre los que se destacaba, por infrecuente, la participación de las Fuerzas Armadas. Pese a que pasaron muchas veces quince días antes que los programas se pusieran en marcha y a que hubo demasiada confusión en ese comienzo, la creación del Plan Nacional de Integración SocioHabitacional Juntos y sus primeras acciones comenzaron a dar razón a la convicción que el tema se asumía con una prioridad distinta a la del período anterior.

El primer obstáculo fue, sin embargo, el presupuesto asignado, que en el caso de Juntos era casi simbólico (cinco millones de dólares por año) apostándose poco menos que exclusivamente a los recursos que pudieran provenir de donaciones y aportes de empresas. Sin embargo, pese a los esfuerzos personales del presidente, acudiendo aquí y allá para pedir ayuda a los empresarios, y una posterior disposición legal por la cual esas ayudas pueden descontarse de los impuestos a pagar, un informe periodístico reveló tiempo después que el principal aportante era el propio presidente, una buena parte de cuyo sueldo sustenta la acción de Juntos.

En lo referente a los programas tradicionales, canalizados por medio del Mvotma, la situación, si bien distinta, no era mucho mejor. El presupuesto

quinquenal asignado en la planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaba muy lejano del que la entonces ministra había solicitado, y si bien duplicaba en dólares el del período anterior, por el enflaquecimiento de la moneda estadounidense, en términos reales significaba más o menos lo mismo y, en capacidad de compra, aún menos que el de los cinco años pasados, ya que el costo de construcción había subido en ese período más que el promedio del costo de vida.

La estrategia propuesta por el MEF ante esa debilidad de los recursos fue captarlos en el mercado, recurriendo a las inversiones privadas a cambio de exoneraciones impositivas casi totales. Habría una fuerte renuncia fiscal, pero eso atraería capitales que de otro modo no se interesarían en la vivienda social y así se robustecería la inversión.

Esta propuesta fue recogida con calor por los empresarios: las gremiales de los promotores privados de la construcción y las inmobiliarias no solo apoyaron pública y fervorosamente la idea, que alguno de sus voceros llegó a calificar de “revolucionaria”, sino que representantes notorios de las mismas colaboraron directamente en la estructuración del nuevo sistema.

Finalmente, en 2011 el parlamento aprobó una ley que formaliza los sacrificios de las finanzas del estado para conseguir las esperadas inversiones, buscando cubrir de esa forma las necesidades de la franja de población que está en el límite superior (o algo por arriba) de la que atiende el Mvotma, esto es, la de ingresos familiares mensuales menores a las sesenta unidades reajustables (alrededor de los cuarenta mil pesos uruguayos).

Para atraer las inversiones, la estrategia fue no poner demasiadas condiciones, incluso dejando que el precio de venta de lo producido quedara al arbitrio del mercado. Pese a que desde muchos sectores (entre ellos, actores representativos del movimiento social) se señaló que eso no aseguraba que los beneficios impositivos se trasladaran a rebajar el precio final, facilitando así el acceso de la población definida como sujeto, se entendió que para que las inversiones aparecieran, el negocio debía ser muy atractivo, y eso requería no condicionar los precios.

Casi dos años después, las inversiones efectivamente han aparecido, y en buena cantidad, aunque parecen provenir, más que de las empresas constructoras y las inmobiliarias, del capital financiero y del exterior. Y los precios, sin control, están descontrolados.

Los valores de venta publicitados por las empresas, en efecto, son del orden del doble que los de otros programas financiados por el ministerio (y más aún, en el caso de las cooperativas). Y las cuotas mensuales requeridas

para pagarlos se acercan a los quince mil pesos, con lo cual deberían afectar casi la mitad de los ingresos de los supuestos destinatarios: o estos tener un ingreso dos veces mayor, con lo cual ya no serían los mismos.

Una de las soluciones que se ha manejado para salvar esta brecha (que el Ministerio subsidie parte de las cuotas) parece peor que el soneto, porque eso deberá hacerse con los menguados recursos del Fondo Nacional de Vivienda, con lo cual las inversiones soñadas en vez de sumar recursos a ese fondo, se los restarán. Parece momento de revisar esta estrategia, porque las dudas esbozadas en la discusión de la iniciativa, se están confirmando puntualmente.

Casi simultáneamente con la puesta en marcha del sistema de renuncia fiscal para atraer inversiones (Más Oportunidades), el Mvotma elaboró y echó a andar una nueva línea de financiamiento para cooperativas, que complementa a la anterior, pero apostando a una sensible reducción de los costos por la vía de la tecnología y la mejora de la gestión. Es en esta línea que se ha inscrito el Plan de Vivienda Sindical (PVS), una iniciativa novedosa lanzada anteriormente por el PITCNT, no exenta sin embargo de dudas (las tecnologías a emplear; la existencia de un único instituto asesor para decenas de cooperativas; el privilegiar el sistema de propiedad individual frente a la colectiva, que parece tan lejos de las ideas igualitarias propias del sindicalismo).

Aunque estas dudas no han sido despejadas aún, resulta auspicioso el fuerte involucramiento del movimiento sindical en el problema de la vivienda, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de los demandantes son sus afiliados. Quizá el desarrollo de las primeras experiencias permita ver si la instrumentación dada al programa efectivamente colma las expectativas generadas o si hay que realizar los ajustes necesarios a su diseño apoyándose en la vasta experiencia que el movimiento cooperativo de vivienda tiene en nuestro país.

Tampoco ha sido saldada la posibilidad de trabajar en este sistema (y en general, en la nueva reglamentación de precios más acotados) con la llamada construcción tradicional, como lo reclama Fucvam, de lo cual también hay una amplia experiencia en los años noventa y dos mil (la de las cooperativas Franja 1), pero que hasta ahora no ha obtenido la aprobación de los técnicos estatales encargados de dar el visto bueno a los programas. Esto también constituye una asignatura pendiente y está limitando el desarrollo del nuevo programa.

La evaluación de lo realizado en los poco más de cuarenta meses trans-

curridos del período, permite destacar positivamente la utilización de un conjunto de instrumentos diferentes y especializados (que no es posible detallar aquí) para atender problemas que también son diferentes; la prioridad dada en la utilización de los fondos públicos a los productores autogestionarios (autoconstructores y cooperativas), y el esfuerzo por encarar los programas de inclusión sociohabitacional, con concurrencia de múltiples actores y enfoque integral, así como el establecimiento de un sistema de evaluación, aprobación y control para la utilización de nuevos sistemas constructivos y de gestión. Un lugar no menor en lo alcanzado, por sus implicancias sociales, lo ocupa el acuerdo logrado en 2011 con Fucvam para la reestructura de las deudas de las cooperativas con el BHU, que permitió poner fin a la “batalla de los colgamentos”.

El problema sigue siendo el mismo: los recursos. Con recursos se puede actuar bien, mal o regular; sin ellos, aun las políticas mejor diseñadas carecen de impacto. Tener los recursos necesarios no es suficiente. Pero es imprescindible.

El futuro de la vivienda con o sin Frente Amplio

A más de un año de las elecciones nacionales, el panorama vuelve a ser de gran paridad entre el Frente Amplio y la suma de los partidos tradicionales, por ahora con ventaja para el primero. Por lo tanto, ninguno de los dos escenarios posibles es por ahora descartable: un tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio, quizá incluso nuevamente con mayoría parlamentaria propia, o una vuelta al gobierno de una coalición de blancos y colorados, probablemente con un presidente blanco y eventualmente sin mayoría parlamentaria aun sumando sus votos.

Sin duda, en el campo de la vivienda, los dos escenarios se corresponden con propuestas y prioridades diferentes, pero de todos modos ambos tendrán algunos aspectos comunes. El primero es que será difícil volver atrás con relación al protagonismo que han tomado los productores autogestionarios. La demanda individual, y sobre todo la gran cantidad de cooperativas creadas, sobre todo a partir de Fucvam y del movimiento sindical por medio del PVS, aseguran una demanda que no podrá ser ignorada y que incidirá fuertemente en el próximo plan de vivienda.

Del mismo modo, el sistema de subsidios implantado será muy difícil que vuelva atrás, aunque el problema puede estar en su generalización fu-

tura, y para todo eso ayudaría mucho que tuviera fuerza de ley. Asimismo, si el proyecto de declaración de vacancia de los inmuebles abandonados (y consiguientemente, su pasaje a propiedad del estado) es aprobado en este período, constituirá igualmente un hecho trascendente, de difícil reversión.

Habrà, por lo tanto, también en este caso una herencia, por cierto más positiva que la de 2005, y esa herencia pesará cualquiera sea el escenario.

De cualquier manera, para seguir avanzando, también cualquiera sea el escenario, será necesario plantear de manera diferente el tema de los recursos. La vivienda social no es una cuestión de mercado, y esto ya está probado en el mundo. Por consiguiente se irá tanto más lejos, o nos quedaremos tanto más cerca de la orilla, según la prioridad social, pero también económica, que se dé al tema. Ese es el eje de la cuestión.

Después se tratará (y no es empresa sencilla) de usar con sabiduría esos recursos. Tenemos ejemplos muy claros del mal uso de muchos recursos, y en eso el comienzo de los años ochenta, con el boom de la construcción, fue paradigmático.

Habrà que compatibilizar lo posible con lo necesario. Es una dialéctica: por supuesto que lo que se puede hacer está condicionado por cuánto se puede disponer, pero también para definir cuánto se puede disponer hay que tener en cuenta cuánto se necesita hacer.

Hay también información suficiente para demostrar que el espacio fiscal no está tan limitado como a veces se pretende. Tomás Moro, que fue santo, filósofo, poeta y canciller del reino, decía en su Utopía que "nada se puede dar a un hombre si no es quitándoselo a otro." Quizá suene un poco radical, pero Moro era un hombre muy sabio.

No hay políticas sociales sin asignación de recursos importantes, y los recursos importantes solo pueden obtenerse de quienes los tienen. Y sin recursos, solo hay discursos.

Apuntes del pasado para la vida digna

Diego Castro, Mariana Menéndez, María Noel Sosa, Raúl Zibechi

El funcionamiento de las sociedades modernas tiene para los trabajadores un camino pretendidamente claro y sencillo para la satisfacción de sus necesidades básicas. Vender su fuerza de trabajo, obtener un salario y por este medio adquirir los bienes y servicios para una vida digna. Vivienda, salud, vestimenta, comida y un largo etcétera completan la lista. Ahora bien, el funcionamiento de estas sociedades hace que un número importante de personas no logre este objetivo, por carecer de trabajo, por tener uno precario o porque “sobra mes al final del sueldo”.

Es conocida la lucha de los sindicatos para regular el mercado de trabajo y aumentar los salarios, pero menos conocida son las experiencias por medio de las cuales los trabajadores pasan colectivamente a resolver dichas necesidades. Ejemplo de ello son las policlínicas autogestionadas (décadas de los ochenta y noventa) y la conformación de cooperativas de vivienda a partir del desalojo de los hotelitos de la ciudad vieja, en particular la Cooperativa de Vivienda Ituzaingó-Covitu 78 (década del noventa), ambas germinadas al calor de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).

Las dos crónicas que presentamos a continuación pretenden recuperarlas del olvido, sacarlas del gris de la historia e identificar sus rasgos principales. No es un pasado que se añora melancólico, transitan en él contradicciones profundas, verdes y maduras. Son experiencias gestadas en tiempos difíciles para las organizaciones populares, por un lado los últimos pasos de la dictadura y la reapertura democrática, y por otro los años noventa, epicentro del proyecto cultural del neoliberalismo, fortalecimiento de los impulsos individuales y voracidad consumista.

Las dos experiencias y muchas más que han tenido a los trabajadores y trabajadoras uruguayas como protagonistas tienen el sello de la creatividad popular, de una imaginación radical. A la vez que se movilizan y satisfacen una necesidad, en su forma de organizar dicha tarea instalan un nuevo sentido, contrario al del funcionamiento “normal” de la sociedad, son experiencias contrahegemónicas, que prefiguran la sociedad deseada, aquí y ahora. Instalan una batalla cultural.

Las formas organizativas y los valores que emergen tienen la huella del autogobierno, la autogestión, la democracia directa y la ayuda mutua. Son promo-

toras de una conciencia y una inteligencia colectiva portada, en algunos casos, por los sectores de la “infrapolítica”, los “lúmpenes”, los desclasados. Aquellos a los cuales algunas teorizaciones les han quitado todo carácter instituyente, transformador. En estos casos, con la paciente compañía de organizaciones de trabajadores, que nunca vuelven a ser iguales luego de estas experiencias.

Sin la experiencia de Covitu 78, las organizaciones populares no hubieran podido oponerle alternativa a los Núcleos Básicos Evolutivos (NBE), propuesta de los gobiernos neoliberales de una opción de vivienda pobre para los pobres que no pueden comprar algo mejor. Con las policlínicas autogestionadas se brinda asistencia y se despliegan experiencias de autogobierno, de poder popular en el ámbito de la salud, aunque luego tienen enormes dificultades para sobreponerse a la presencia de los servicios del estado que en la mayoría de los casos no las toma como parte de su propuesta sino que compite con ellas.

Estas experiencias se desarrollan sin recetas, con el impulso creativo de sobreponerse colectivamente a una necesidad que no pueden satisfacer por otro medio. Cada experiencia escapa a toda pretensión homogeneizadora. Allá, donde la participación y la construcción desde abajo se abre lugar, el ejercicio es diverso, heterogéneo, y lo nuevo toma forma.

De las pensiones a la reforma urbana: un viraje estratégico

Entre los años 1989 y 1990 se produjo un importante viraje político y social del movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua, agrupado en Fucvam. Miles de personas estaban siendo desalojadas, en particular familias que ocupaban hoteles abandonados en la Ciudad Vieja, en una situación de creciente precarización del empleo y la aparición masiva de trabajadores informales. Desde la aprobación de la Ley de Emergencia de Alquileres, en enero de 1986, hasta diciembre de 1988 la Suprema Corte de Justicia había contabilizado 35.072 desalojos, más de mil por mes, totalizando hacia mediados de 1989 alrededor de 40 mil desalojos que afectaban a más de 120 mil personas (Brecha, 1989).

Una de las consecuencias de la política económica neoliberal implantada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) fue el crecimiento exponencial de los asentamientos irregulares, cuya población aumentó 90,3% entre 1984 y 1990. El 70% de esa población no tenía empleo permanente y el 60% provenía de los barrios consolidados de Montevideo (González, 2006: 33).

Sólo una mínima parte de esa enorme cantidad de desalojados pudieron

resistir y encontrar nuevos rumbos. En setiembre de 1990 se produjo el desalojo de once familias de la pensión situada en Itzaingó 1178. Durante un mes acamparon en la vereda protegidas con maderas y cartones. El 12 de octubre realizaron una asamblea con el apoyo de Fucvam y decidieron nombrarse Covitu 78 (Rodríguez, 1999: 119). Nuevas familias se integraron a la cooperativa hasta totalizar veinte núcleos familiares.

La Intendencia de Montevideo (IM), que desde febrero de 1990 comenzó a ser administrada por el Frente Amplio, decidió otorgarles un terreno en Bella Italia. Las familias se trasladaron al terreno y construyeron ranchos precarios ya que no tenían dónde vivir. El Banco de Materiales de la IM les concedió 32 Unidades Reajustables (unos 500 dólares) a cada familia pero decidieron volcar ese dinero a la construcción del salón comunal, que será "un refugio seguro para la comunidad, con cocina y baños para todos" (Rodríguez, 1999: 120).

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) les propuso la construcción de NBE pero los miembros de Covitu 78 con el apoyo de Fucvam optaron por construir viviendas por ayuda mutua con el mismo costo que el ministerio destinaba para los NBE pero con un 125% más de espacio habitable por vivienda. La construcción comenzó en enero de 1992 y las nuevas viviendas fueron ocupadas en marzo de 1993, casi tres años después de que fueran desalojados de la pensión.

Para la federación fue una experiencia completamente nueva y un desafío mayor. Hasta ese momento, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua habían estado siempre ligada a "sectores de situación económica media o medio-baja, muchas veces de extracción sindical, con pautas culturales acordes a un país que supo tener uno de los más altos niveles de alfabetización, y generalmente con experiencias organizativas previas" (Rodríguez, 1999: 121).

En efecto, las familias que integraron Covitu 78 mostraban un perfil bien diferente al de las familias tradicionales de las cooperativas que se aglutinaban en Fucvam: la cuarta parte no tenían inserción laboral, el promedio de personas por familias se elevaba a 4,5, la mitad de la población era menor de 15 años y la cuarta parte de las familias estaban encabezadas por mujeres solas con sus hijos.

La integración de sectores de extrema pobreza al movimiento cooperativo supuso un cimbronazo, que comenzó el mismo año (1989) en que la federación había iniciado la toma de tierras para forzar al gobierno nacional a destrabar la concesión de personerías jurídicas. Un viraje a partir del cual la Fucvam dejará de ser un movimiento focalizado en la construcción de viviendas ya que "traspasará largamente las fronteras corporativas de su espacio para enfrentarse

frontalmente las supuestas políticas habitacionales impulsadas desde los organismos multilaterales" (González, 2006: 34).

Según Gustavo González, entonces presidente de la federación, una parte de la dirección consideraba que "los sectores más empobrecidos no tenían cabida en Fucvam" (González, 2006: 44). En una situación en que la organización enfrentaba la ofensiva neoliberal que incluía la propuesta de NBE para los más pobres, la dirección decide la creación de la Comisión de Vivienda Alternativa que se propone diseñar un plan piloto a raíz de la experiencia de Covitu 78 y comienza a abordar la cuestión de la reforma urbana, poniendo en discusión no sólo la vivienda sino el hábitat y la desigualdad en el acceso a la ciudad.

Desde el punto de vista ideológico, la comisión encara un debate interno que apunta a cuestionar cierto sentido común que considera que existe una oposición entre la "cultura marginal", propia de los habitantes de los asentamientos, y la "cultura obrera"; ésta se expresa en los sindicatos y en las cooperativas y aquella era calificada como "lúmpenes" o "desclasados" sin conciencia política ni capacidad organizativa (Fucvam, 1991).

En su apuesta por organizar a "todos los sin techo", se propone que la federación comience a perfilar "una nueva estrategia de lucha por la vivienda", con la apertura a promover otras formas de autogestión que no sean necesariamente las que se venían practicando hasta ese momento. Influenciados por la experiencia del Movimiento de Moradía Popular de Sao Paulo, el movimiento cooperativo agrupado en Fucvam apunta a ir más allá de la construcción de viviendas. "Todo se inició con Covitu 78", señala un documento de la Comisión de Vivienda Alternativa, que indica cómo la experiencia con nuevos sectores sociales los llevó a plantearse la necesidad de superar la ciudad excluyente para construir una "ciudad alternativa".

En cuanto al trabajo concreto con los grupos de trabajadores informales como los que se agruparon en Covitu 78, los militantes de Fucvam detectaron algunas dificultades: inconstancia en el cumplimiento de los compromisos en la participación cooperativa, problemas para trabajar organizadamente, escasa autovaloración, "el trabajo en malón, todos juntos detrás de las urgencias", dificultad para establecer un funcionamiento institucional (comisiones, órganos colectivos) y tendencia a seguir liderazgos individuales (Rodríguez, 1999: 124). A todas esas dificultades, propias de una cultura de trabajo en el sector informal o de largos períodos de desocupación, debe sumarse el rechazo que provocó en los vecinos de Bella Italia la llegada de esta población expulsada de los hotelitos y pensiones de Ciudad Vieja.

La evaluación posterior de la experiencia de Covitu 78 por parte de la direc-

ción de Fucvam permitió profundizar algunos desafíos que se convertirán en una constante en el trabajo con sectores populares pobres. El primero es constatar que la urgencia de vivienda llevó a modificar la tradicional forma de ocupación de las viviendas cuando todas están terminadas, por la ocupación precaria del terreno con ranchos en los que viven y a la vez construyen las viviendas.

El segundo desafío fue encontrar institutos de asistencia técnica capaces de trabajar con la nueva población, lo que implicaba un compromiso diferente al que estaban acostumbrados los técnicos ya que el trabajo social pasó a ser la dimensión principal y decisiva para el éxito de la cooperativa.

El tercer desafío fue “el proceso educativo que tuvieron que vivir las familias para asumir la vida comunitaria, la organización cooperativa, la autogestión y la ayuda mutua” (González, 2006: 46). Eso implicó cambios profundos en la identidad del cooperativismo tradicional.

La cuarta cuestión se relaciona con el papel de las mujeres. Hubo etapas en la obra de Covitu 78 en las que fueron las únicas que trabajaron, aunque su participación en las asambleas era muy baja. Por lo tanto, había una gran cantidad de niños en la obra que fueron un desafío, ya que las reglamentaciones estipulan que no deben estar en el área de construcción. “Se terminó, con los mayorcitos, organizando el trabajo, que al final fue un aporte invaluable de mano de obra. Jugaron, como niños que eran, pero sobre todo se comprometieron con sus viviendas” (Rodríguez, 1999: 124).

Por último, destacar las diferencias con la cultura organizativa hegemónica hasta ese momento en el movimiento popular, ya que se pudieron apreciar “diferencias en las pautas de organización y gestión cooperativa, sus asambleas son menos ritualizadas y de menor duración, la manifestación explícita del disenso y menor profundidad en el debate de los conflictos internos, fuertes peleas en la asamblea, grandes amigos una hora después” (González, 2006: 46).

Este conjunto de rasgos diferenciales modificaron no sólo el accionar del movimiento cooperativo por ayuda mutua sino que el contacto con un nuevo sector social abrió las puertas a una mayor comprensión de la exclusión urbana y, por lo tanto, modificó algunas de las propuestas estratégicas de la organización.

Salud colectiva por ayuda mutua

Hace algunos años que acompañamos las experiencias cooperativas de Fucvam. Hemos visto guarderías, bibliotecas, salones comunales, el laboratorio colectivo de construir barrios por autogestión y ayuda mutua. Las expe-

riencias que por abajo, con sus dificultades y vaivenes, forjan otra ciudad. Ese abajo que a veces se pierde de vista y se nos pierde de vista. Un fragmento de la creatividad, la imaginación radical y la potencia del hacer juntos fueron las experiencias de policlínicas autogestionadas. Esta crónica intenta recoger ese pasado para que nos interpele el presente, para seguir recreando encuentros. Nace del intercambio con los cooperativistas de Tebelpa y una de sus protagonistas, Stella, que nos recibió como siempre con su ternura y sus ganas de seguir creando.

En los años ochenta todavía vivíamos en dictadura y los grandes centros de asistencia de nuestro país estaban fuertemente centralizados, no existían la cantidad de policlínicas que existen en la actualidad ni las emergencias móviles. Las dificultades de traslado y los elevados costos hacían que la salud fuera un tema relegado para los/as cooperativistas, al igual que para los/as trabajadores en general.

Desde finales de los setenta se conformó una comisión de salud de Fucvam, bajo la premisa de que una comunidad organizada debe tener una buena atención a la salud, que incluya buena calidad, fácil acceso y en especial una atención capaz de generar “un nuevo tipo de medicina, más solidaria y humana” (Fucvam, 1984).

En la Asamblea Nacional de Fucvam, en 1984, la Comisión de Salud informa el esquema organizativo de policlínicas en cooperativas de vivienda, y se da cuenta del estado de situación: se estaban estudiando y gestionando los primeros centros asistenciales primarios en las cooperativas. En palabras de Stella, una de las integrantes de la comisión desde los inicios, en esos tiempos la comisión era una “auténtica coordinación de todo lo que pasaba en la periferia” (Ramponi, 2013).

La propuesta incluía que la comunidad junto a los técnicos planificaran y dirigieran la policlínica, incluyendo estudiantes, profesionales de las cooperativas para formarse, conocer su comunidad y “desterrar el concepto de clase profesional” por encima del resto de los trabajadores. Incluía además la línea programática de generar una farmacia cooperativista que ahorre el 30 o 40% de intermediación (Fucvam, 1984).

A inicios de los años ochenta, en Mesa 2 (Peñarol), falleció una niña en el complejo por falta de asistencia médica. Este triste acontecimiento resultó determinante para que la cooperativa crease su policlínica, constituyéndose en uno de los primeros centros asistenciales del movimiento cooperativo de vivienda.

Este hecho, daba cuenta de que muchas necesidades sanitarias de los/as

cooperativistas no estaban resueltas, por lo que los proyectos de policlínicas eran vistos como proyectos “valederos, viables, a los que la gente le metió mucho entusiasmo” (Ramponi, 2013).

No sólo permitían resolver esta necesidad de atender a urgencias relativas, de ayudar a resolver problemas cotidianos y dar respuesta a situación concretas, sino que en especial las policlínicas se constituían en gérmenes de resistencia a la dictadura. Eran un espacio más de autogobierno, de creación de conciencia e inteligencia colectiva, que germinaba en lo territorial y en el marco de las diversas acciones de resistencia que se llevaban adelante en las cooperativas: ensayos de murgas, reuniones de organizaciones de estudiantes y trabajadores/as.

Con el tiempo, la organización sanitaria mínima en diferentes barrios cooperativos se fue forjando un nucleamiento de policlínicas cooperativas y barriales, favoreciendo el permanente intercambio de recursos entre cooperativas tanto de saberes técnicos como de medicamentos. Cada cooperativa tenía un funcionamiento particular y brindaba diferentes servicios, definía qué y cómo pagar a los médicos y personal sanitario que trabajaba allí. En algunos casos se pagaban viáticos, en otros se pagaban salarios, y para muchos/as el trabajo en las policlínicas se hacía de forma voluntaria.

En este marco, en junio de 1985, en la recientemente habitada cooperativa Tebelpa comenzó a funcionar una nueva policlínica. En las diversas asambleas previas existieron otras propuestas que permitirían resolver otras necesidades, como una guardería, pero el colectivo entendió que la policlínica tenía la prioridad. Con mucha participación de los vecinos y vecinas de la zona y con la herramienta de la ayuda mutua característica del movimiento cooperativista se comienza la construcción del local. Desde el inicio la autogestión estuvo presente, marcando todas las etapas para llegar a tener la policlínica en funcionamiento: se la imaginó, se la diseñó, se la organizó, se contrataron los técnicos y se coordinó su participación desde la gestión colectiva.

La policlínica de Tebelpa tenía una particularidad: fue la única policlínica de anclaje territorial más extenso, y en su gestión participaban siete cooperativas de vivienda por ayuda mutua y vecinos y vecinas del barrio, integrados en igualdad de condiciones que los cooperativistas. Si bien con el tiempo se registró que la participación del barrio fue decayendo, desde Tebelpa se hizo una fuerte apuesta a trabajar desde esta perspectiva territorial, aunque esta forma de trabajo fuera a veces resistida o discutida en otras cooperativas. Durante los años de funcionamiento de la policlínica se realizaban reuniones quincenales con el barrio y las siete cooperativas para definir la estrategia de la policlínica y se

resolvían orientaciones para que los técnicos las llevaran a cabo.

En esta policlínica se brindaba atención diurna, y se contaba con atención en medicina general, pediatría, ginecología, psicología. En la noche, cuando la atención de la policlínica terminaba atendían las médicas o enfermeras que vivían en la cooperativa. Se coordinaban además campañas de prevención y promoción de salud, talleres de primeros auxilios en cooperativas en obra.

La afiliación era mediante un bono de colaboración mensual, con un aporte económico mínimo que contribuía al funcionamiento de la policlínica. Sin embargo, existían dificultades para el cobro puerta a puerta desde el trabajo militante. En otras cooperativas se hacía afiliación colectiva desde asamblea, pero en este caso era inviable, por gestionarse desde un conjunto de cooperativas y el barrio.

Tebelpa tuvo además otra característica peculiar. A finales de los ochenta, se comenzó una coordinación más amplia que la red de policlínicas de Fucvam y se inició una coordinación con el Centro Comunal Zonal 14 y a través de éste con la red de policlínicas comunitarias de la zona. En este marco, la policlínica de Tebelpa se hermanó con la historia de lucha de varias policlínicas comunitarias: Cadorna, 19 de abril, Ponce de León, La Tierrita, La Huerta, Arbolito, La Cachimba del Piojo, Monserrat, La Teja Barrial.

Este vínculo se fue consolidando desde 1983, en el marco de los conflictos de la zona, ya que la policlínica cooperativa y barrial se sumaba a las ollas populares de los conflictos de los trabajadores/as textiles (Fibratex, Nusa) del barrio. En el medio de los conflictos, desde la organización de la policlínica se hacía la sanidad en los campamentos donde estaban resistiendo los/as trabajadores/as y sus familias, coordinando desde la comisión de salud del Centro Comunal Zonal 14 la asistencia permanente.

Desde la comisión zonal se realizaban actividades de autoformación colectiva en atención primaria a la salud, desde la perspectiva de la educación popular. Se coordinaban acciones de prevención y promoción de salud en la zona de forma muy creativa: se editaba un boletín de difusión, se hacían talleres en las escuelas y en los asentamientos de la zona, se realizaban actividades culturales que permitían la comunicación de acciones de prevención y promoción de salud: películas, obras de teatro y murgas. Lo que nunca faltaba era la imaginación.

Sin embargo, luego de un “largo y doloroso proceso” y en decisión de asamblea se decide cerrar la policlínica en 1996. Según sus protagonistas el cierre comenzó mucho antes, desde los comienzos de la década con la institucionalización de la atención sanitaria a través de tres nuevas policlínicas municipales

en la zona. Para quienes llevaban adelante el proyecto era una "situación frustrante" ver cómo el funcionamiento de la policlínica empezó a declinar dado que la gente comenzó a atenderse mucho menos en la policlínica.

Algunas de las explicaciones que se encontraron fueron la cobertura más amplia en personal, horarios y en recursos de las nuevas policlínicas y el aumento de emergencias móviles, que venían rápido y resolvían muchas de las afecciones. Así, "la comunidad empieza a perder pie" y con el tiempo al caer la asistencia directa, cae también la tarea de prevención y promoción, porque se va debilitando el vínculo. En la actualidad, algunas policlínicas siguen funcionando, pero no tienen la impronta de autogestión de aquellos tiempos, sino que se visualiza que en el proceso de los últimos años "cada vez fue menos el ámbito de decisión de los vecinos".

Como otras, estas experiencias concretas de autogestión y de salud colectiva cumplieron un ciclo. Muchas policlínicas cerraron, pero la memoria de ese período efervescente y fértil está viva en quienes crearon y sostuvieron las propuestas. La huella de experiencias de salud colectiva sostenidas por más de una década evidencia una vez más la capacidad de la federación de constituirse no sólo como movimiento focalizado en la construcción de viviendas, sino como movimiento capaz de disputar la vida. Demuestra además la potencia del encuentro de las cooperativas con otras organizaciones sociales y en especial la potencialidad de que los sectores más empobrecidos tengan cabida en una organización social estructurada desde el reconocimiento de su capacidad política y organizativa.

En tiempos donde el acceso a la salud y a la vivienda siguen siendo un problema vigente, recordar puede ser un primer paso para recobrar la capacidad imaginativa.

Referencias

Brecha (1989) "Un solo desalojo", Montevideo, 2 de junio.

FUCVAM (1991) "La reforma urbana. Una ciudad para vivir", Montevideo, FUCVAM.

FUCVAM (1984) Hacia un plan nacional de vivienda popular. Asamblea Nacional del Movimiento Cooperativo, Montevideo, FUCVAM.

González, Gustavo (2006) Génesis. Análisis sobre el protagonismo social y político de FUCVAM, Montevideo, FUCVAM.

Ramoni, Stella (2013) comunicación personal, Montevideo, 15 de agosto.

Rodríguez Filippini, Hugo (1999) "Las nuevas modalidades en la experiencia cooperativa por ayuda mutua", en Nahoum, Benjamín (comp.) Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas, Sevilla, Junta de Andalucía, pp. 119-135.

Cambios y disputas territoriales: el caso de la región metropolitana noreste de Montevideo

Alfredo Falero, Marcelo Pérez Sánchez, Mauricio Ceroni,
Aline da Fonseca y Alicia Rodríguez

Introducción

Los procesos de urbanización latinoamericanos presentan características similares en muchos casos. Una de ellas es la expansión urbana sobre zonas que antes fueron rurales y hoy se transforman a consecuencia de la organización especulativa del suelo y la expansión de zonas marginales. Como se sabe, las regiones metropolitanas suelen conformarse a partir de extensas áreas suburbanas de relativa baja densidad de población que se van ampliando e integrando por proximidad hasta generar conurbaciones.

Estas regiones pueden actuar como ciudades dormitorio para fuerza de trabajo de clase baja o conformarse en la periferia de marginación de las ciudades como fue discutido conceptualmente en la década del sesenta. También existe otro tipo de proceso de metropolización, aquel que se convierte en un refugio de la clase alta y media-alta que huye del vértigo de la ciudad en busca de mejores condiciones de vida enfatizando la seguridad.

Otra de las características que puede adoptar la metropolización es la existencia de regiones industriales o de servicios de diverso tipo y esto lleva a la segunda característica general: regiones donde se van conformando condiciones específicas y especiales para el capital global. Esta característica está menos sistematizada que la anterior y, en general, no suele establecerse una visión relacional entre tales mutaciones de localización productiva y de residencia. El caso que se presenta, de metropolización noreste de Montevideo, procura introducir esa perspectiva relacional de ambos planos de análisis: el de condiciones especiales de residencia para sectores altos y el de producción del capitalismo global en regiones periféricas de la economía-mundo.

Parte del territorio estudiado corresponde en términos formales al departamento de Montevideo y al vecino departamento de Canelones. Desde el punto de vista del paisaje que se despliega, el tránsito entre uno y otro resulta indistinguible. Resultan más visibles lo que podríamos llamar islas con imagen de

futuro diferenciadas del resto. Por la vía de los hechos, el capital ha remodelado esta zona noreste de acceso a Montevideo. En ese apéndice de la capital, con reglamentaciones diferenciadas, conviven islas de ciudad dormitorio lujosas y seguras, con enclaves globales que se presentan como de impulso al Uruguay insertado en el mundo global y revestidos de un aire de ciencia y tecnología. Esto ha ocurrido no sin conflictos y este es uno de los elementos que propone introducir el presente artículo.

Debe destacarse que es un caso muy particular en el marco de las zonas de influencia de las rutas de acceso a la capital del Uruguay. No existen otros accesos a la ciudad donde haya ocurrido un proceso similar. Otros accesos a Montevideo han experimentado procesos de suburbanización de la capital en términos habitacionales o con implantación de algunas unidades industriales o logísticas, pero ninguna ha generado un perfil de islas de sociedad del conocimiento y barrios privados, paralelamente a la desaparición del suelo para uso rural y a la expulsión, contención o control de población en situación de pobreza y marginación.

El énfasis está puesto en cómo el territorio expresa con mayor claridad que antes las desigualdades sociales y la separación entre clases sociales con dinámicas de cierre de sectores altos. Sin embargo, tales procesos sociales no pueden analizarse separados de dinámicas de acumulación específicas. Por ello, también se apunta a visualizar formatos territoriales que hacen a la acumulación del capital en un contexto de profundización de la inserción pasiva¹ de Uruguay en la economía-mundo capitalista.

El estudio de trayectorias sociales y de subjetividades colectivas no puede desanclarse de condiciones de cierre territorial y de dinámicas de acumulación de capital más general. A la vez, el tema está transversalizado por el poder político y los diferentes criterios que se establecen en un departamento y otro, así como por la emergencia de un tercer nivel de gobierno, los municipios. Sin embargo, como señala Harvey, en todo mapa móvil deberían figurar las turbulentas corrientes de un desarrollo geográfico desigual que resulta preciso trazar para comprender el modo en que las transformaciones locales se relacionan con tendencias más generales (Harvey, 2007).

¹ Inserción pasiva en la economía-mundo se enmarca en la visión propuesta por autores como Immanuel Wallerstein o Samir Amin y procura enfatizar el ajuste o adaptación que se dio en la economía uruguaya en la división global del trabajo. Se enfatiza la aceptación de su posición dependiente en las dinámicas de acumulación como proveedor de servicios y materia prima sin promover otras alternativas sociales y económicas.

La inserción de Uruguay en la economía-mundo y la reconfiguración de la región metropolitana noreste a partir de territorios estratégicos

Uno de los instrumentos centrales que marca el giro del Uruguay en su reposicionamiento en la economía-mundo es la Ley de Zonas Francas. Sancionada el 17 de diciembre de 1987 e impulsada por el Poder Ejecutivo, no mereció grandes cambios en su tratamiento legislativo, más allá de las fuertes polémicas que suscitó. Es una ley extremadamente abierta hacia las posibilidades especiales que le otorga al capital. Pensada originalmente para atraer maquilas industriales (lo cual no se concretó, entre otras razones, por no estar en línea con el proceso de integración regional), terminó siendo efectiva para atraer actividades logísticas y servicios, incluyendo actividades financieras y más tarde de deslocalización administrativa, de gestión y de procesamiento de información en general (outsourcing) que se vienen desplazando a países periféricos. Esto se ha trabajado como enclaves informacionales, asumiendo la importancia de la información (en un sentido general que puede incluir desde un algoritmo al procesamiento de datos) en la nueva fase capitalista.

Esa ley constituye una verdadera inflexión en la línea de apertura económica del Uruguay (que se profundizó en la década del noventa). Sus líneas centrales permanecen incambiadas, más allá de que se ejercen mayores controles. De hecho, durante el gobierno nacional del Frente Amplio a partir del 2005, se aprobaron nuevas zonas francas y una de ellas, de amplias dimensiones, está instalada en la zona metropolitana que nos ocupa (es el llamado Parque de las Ciencias).

Producto de esa ley se encuentra Zonamérica, enclave informacional en el marco de una renovada dinámica de enclaves económicos (Falero, 2012). Recordemos que se trata de territorios (pequeños o grandes) en los que se habilitan condiciones económicas especiales dentro de los estados-nación para actividades de transnacionales (en forma directa o indirecta). O, en otras palabras, localizaciones globales rodeadas o enclavadas dentro de un estado-nación.

El Parque de las Ciencias consiste en una zona franca (aún en construcción cuando se escriben estas líneas) que involucra a transnacionales de sectores farmacéuticos, cosméticos, biotecnológicos, fitosanitarios, veterinarios, de dispositivos médicos, entre otros. Se ubica en la Ruta 101, en un predio de 55 hectáreas, a poca distancia del aeropuerto, pero a diferencia de Zonamérica, en el departamento de Canelones.

Se puede decir que estos territorios estratégicos de conexión global subnacional (Sassen, 2007) representan el paradigma de la fractura social y territorial de la región metropolitana de Montevideo. Hacia dentro de los límites, la imagen es capitalismo moderno, globalizado, hacia fuera, territorios en transformación por intervención del Estado a diferentes niveles y por agentes del capital. En transformación, a un ritmo apresurado, las zonas cercanas a estos territorios estratégicos están dejando de tener características rurales o suburbanas y procurando desplazar o controlar a los sectores empobrecidos.

Segregación, guetos y barrios privados

Recordemos, segmentar es dividir en partes y puede aplicarse al proceso de descenso social y de nuevo confinamiento, y segregar refiere a separar una parte del todo. El concepto adquirió vigencia en la década del ochenta para tratar de entender los procesos de reestructuración urbana y de expansión de la pobreza y remite a una perspectiva territorial, es decir, la ubicación espacial urbana diferente de clases y sectores sociales.²

En nuestro territorio objetivo aparecen claramente procesos de segmentación y segregación. En las regiones metropolitanas de las grandes ciudades latinoamericanas, los años noventa vieron la incorporación de formas residenciales cerradas y fortificadas. Verdadero símbolo de la segmentación de la ciudad que los centros comerciales complementaron, ofreciendo espacios privados con aspecto de espacio público, con acceso en apariencia libre y, no obstante, controlado.

La expresión máxima de separación social la constituye el gueto. ¿Qué es lo que distingue a un gueto como forma social, cuáles de sus características son constitutivas y cuáles derivadas? Loïc Wacquant ha volcado elementos que permiten generar una aproximación para su construcción como categoría de análisis. Este sociólogo relaciona el concepto de gueto con el de seclusión socioespacial que caracteriza como "el proceso por el que se acorralan, se cercan y se aíslan determinadas categorías y actividades sociales en un cuadrante reservado y restringido de espacio físico y social" (Wacquant, 2011: 11). Existen dos ejes de cruce en la seclusión: uno, vinculado al prestigio social y a la clase, y otro, con relación a si es electiva o impuesta.

Los barrios privados son una forma de seclusión por elección vinculada a la

² No obstante, el concepto proviene de la Escuela Francesa de Sociología Urbana, particularmente deben recordarse las elaboraciones de autores como: Lefebvre, Lojkin y Castells.

posesión de alto capital económico y simbólico. Tienen un perímetro poroso para quienes allí viven, pues pueden salir fuera del lugar cuando quieren, pero a la vez, se constituye en un aislamiento protector y diferenciador de quienes no pertenecen a esa urbanización cerrada.

Existe, a nivel general, una importante cantidad de trabajos que dan cuenta del fenómeno de las urbanizaciones y barrios privados. Hay algunos elementos que se repiten: la demanda que buscan satisfacer quienes allí eligen vivir y los facilitadores, tales como la seguridad, la eficiencia de los servicios, factores económicos de rentabilidad de la inversión, la ruralidad/paisaje, el equipamiento deportivo, la ubicación, la exclusividad y el sentido de comunidad (Fernández, Salcedo y Torres, 2004: 115-118).

El mercado inmobiliario, como señala Sabatini (2000), ha divisado una demanda de aquellos sectores que antes se ubicaban en el entramado urbano existente y han encontrado buena rentabilidad en los suelos de la periferia (en las zonas suburbanas) para dar respuesta a esas demandas. La publicidad, como señala Randado (2010), ha cumplido, por diversos mecanismos, un rol central en la expansión de barrios privados.

El seguimiento de prensa nos permitió observar una visión positiva, donde los barrios privados son identificados como “una ingeniosa arquitectura como para vivir en armonía con la vida”, cuyos atributos son: la paz, la tranquilidad, el silencio y el medio ambiente, que generan su propio microclima. Los argumentos utilizados para privilegiar este tipo de construcción están basados en la seguridad, en la posibilidad de vivir en armonía con el ambiente, rodeado de verde, aun teniendo que “viajar un poco más para lograr lo que no pueden tener en el centro de la ciudad”. La mayoría de los barrios privados en Uruguay están en áreas clasificadas como suburbanas o rurales, distantes del centro de la ciudad, pero igualmente cercanas utilizando automóvil.

Cabe destacar, tras nuestro análisis documental, que se evidencia que su desarrollo en la región metropolitana se debe a la resistencia de las administraciones del Frente Amplio en el gobierno de Montevideo a este tipo de urbanizaciones cerradas, lo que ha llevado a buscar ubicación en los departamentos contiguos (Canelones y San José). De esta manera, pueden identificarse dos patrones de segregación. Por un lado, uno protagonizado por unidades domésticas de bajo poder adquisitivo, lo que a veces implica dinámicas de marginalidad social, que puede dar lugar a un tipo de gueto específico. Por otro lado, un patrón de segregación residencial vinculado a estratos medio-altos y altos que da lugar a barrios privados.

La segregación de los *countries* muestra para la socióloga Maristella Svam-

pa, la “distancia insalvable y permanente entre los diferentes componentes de la sociedad que ilustran la consolidación de un modelo específico de socialización basado en el contacto entre grupos homogéneos desde un punto de vista social y racial” (Svampa, 2001: 13). Esta visión, en consonancia con el resto de la teoría crítica, entiende el fenómeno como parte de los impactos urbanos de la globalización y los modos de producción que esta conlleva en la actual etapa de acumulación capitalista. Este fenómeno visibiliza y expresa la fractura social operada, la privatización de lo público y la pérdida de valor de lo común.

Los barrios privados, más allá de la sociedad en que se articulan y de sus variantes, comparten un conjunto de características básicas. Mencionamos cuatro de ellas que hemos identificado en nuestro estudio: suponen casos de universos de élite que cambian considerablemente la manera como las personas de las clases media y alta viven, consumen, trabajan y piensan; siempre están demarcados pero no están aislados por muros (como otros casos en América Latina); enfatizan el valor de lo privado sobre lo público, ámbito al que muchas veces suele verse como productor de bloqueos para el desarrollo y para la potencial mejora de toda la zona; finalmente, además de la seguridad que es un elemento central y por el cual no se rechaza el control social implicado, confieren estatus o prestigio (Pérez Sánchez, 2013).

Clases sociales, intervención privada sobre el entorno y subjetividades en las dinámicas de segregación observadas

El concepto de clase es ante todo un concepto clasificatorio, es decir, intenta agrupar a distintos individuos a partir de un conjunto de rasgos comunes o criterios de unificación vinculados a la posición social. No ingresaremos en la discusión teórica de fondo, simplemente buscamos plantear el concepto como herramienta analítica que permita observar procesos relacionales de diferenciación y desigualdades sociales.

En el análisis de clases no solo cuentan los resultados finales, sino también y fundamentalmente la inicial distribución de dotaciones de recursos económicos y otros que los alimentan. Con esta preocupación teórico-metodológica, el mapa que se presenta a continuación es fruto del ejercicio de nuestro equipo por visualizar la estructura de clases a partir de los datos del Censo de Población, Hogares y Vivienda 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, la ausencia de la variable ocupación, que consideramos fundamental para identificar dicha diferenciación, nos lleva a considerar las tres



Figura 1: Estratificación socioeconómica. Fuente: INE-Censo 2011

dimensiones siguientes: características de la vivienda, unidad doméstica con relación a esta y educación. De este modo, visualizamos la estratificación socioeconómica y las desigualdades sociales presentes en el territorio, donde se observa claramente cómo conviven los dos extremos de ingreso y la casi inexistencia de los sectores medios.

La conexión entre clase y territorio, en la línea de lo antes mencionado, se considera central. La ciudad, sus conurbaciones o su zona metropolitana, como la que nos ocupa, es expresión de diferenciación social. Esto se lee en los aspectos físicos (infraestructura, arquitectura), pero también en sus aspectos sociales, por ejemplo, en los itinerarios o trayectorias de vida.

Los barrios privados identificados en nuestro caso pueden verse como territorios de producción de fuerza de trabajo calificada que se contraponen con otros que se configuran en territorios de reproducción de fuerza de trabajo no calificada que alimenta a los primeros, así como también a los enclaves. Esta región metropolitana asume de esta forma su condición de un conjunto de islas con parámetros de homogeneización social definidos a su interior (más allá de las diferencias existentes dentro de estas), pero a la vez, profundamente

separadas de otras áreas. La inserción en la economía-mundo provoca y reproduce mundos de vida radicalmente diferentes, produciendo una fractura de las líneas que integran como sociedad. Sin embargo, esa fuerte diferenciación y aparente aislamiento entre distintos sectores de población que se presentan con claridad ante un observador externo involucra particulares modalidades de relación. Su análisis nos aproxima a comprender el efecto que las transformaciones territoriales descritas están teniendo en el tejido social, en la producción de subjetividades y en el potencial de acción colectiva y de construcción de autonomía de los sectores más empobrecidos.

El espacio social se configura, entre otros aspectos, por los sentidos subjetivos que en él se producen, por las producciones discursivas, por las relaciones sociales que se establecen y por las acciones que se desarrollan (González Rey, 2011). En este sentido, entendemos que es fundamental conocer y comprender los significados que los actores vinculados al territorio construyen en relación al mismo y en particular a las transformaciones experimentadas en las últimas décadas.

La evidencia empírica muestra que una modalidad de relación entre el capital y las organizaciones de base o los habitantes más empobrecidos de la zona, es la que se desarrolla a través de las acciones de tipo de responsabilidad social empresarial (RSA). Para algunos, desde perspectivas de integración social o de conciliación de clases, esto sería un elemento positivo (Randado, 2010). En cambio, desde nuestra perspectiva, este accionar se incluye como formas de dominación y control (ensayadas más claramente en ámbitos como el empresarial) que no permiten abordar las causas de fondo de la injusticia social y ayudan a reproducir/legitimar las causas de la desigualdad social (Falero, 2012; Sousa Santos, 2007; Svampa, 2008).

En uno de los barrios privados examinados, se destaca una asociación civil (tipo fundación) integrada por la comisión de copropietarios y vinculada con los desarrolladores urbanísticos, que tienen una acción social sobre el asentamiento y las residencias populares cercanas. Ellas implican parte del dispositivo de intervención que se expresa, tanto a través de donaciones puntuales como de la provisión de servicios comunitarios básicos (salón comunal, policlínica, centro de atención a niños y a familias, entre otros). Esto ocurre ante la ausencia o beneplácito del estado, y configura parte de un nuevo formato de responsabilidad social y de disipación de potenciales conflictos a partir de las desigualdades sociales evidentes. En el discurso de algunos pobladores, a veces, el barrio privado y el estado son presentados indistintamente como entidades a las que reclamar la provisión de servi-

cios, mostrando de este modo la frecuente sustitución de funciones del primero respecto del segundo. Así, una vecina entrevistada expresa la queja por las promesas incumplidas del barrio privado.³ Ese tipo de acciones se suma a otra más sutil y de mayor impacto, que se configura cuando dicha asociación de barrios privados se convierte en la voz del asentamiento ante el estado y otros actores, para realizar más efectiva y rápidamente sus gestiones. Esto se desprende de las entrevistas a la comisión de copropietarios de uno de esos barrios, de las realizadas a vecinos de los asentamientos y a actores gubernamentales. Esta cierta sustitución de los propios vecinos carentes de voz, por sus vecinos ricos y patrones (Pérez, 2013), representa, en términos de capacidades de acción colectiva, todo un indicador de las limitaciones y formas de dominación que se van estructurando.

La percepción de los pobladores acerca de los cambios que el territorio ha sufrido en los últimos años suele ser positiva, ya que se asocia con algunas mejoras en la infraestructura, con la creación de puestos laborales e incluso con mayores niveles de visibilidad y reconocimiento. Ahora bien, en la medida que el actor privado queda colocado en la posición de proveer ayudas y servicios, toma para sí el derecho de decidir sobre aspectos de la vida cotidiana de aquellos con quienes colabora (como sucede respecto al uso del salón comunal, por ejemplo). En este contexto, aunque las ambivalencias y las contradicciones puedan expresarse, las posibilidades de resistir estas formas de dominación se ven debilitadas y parecen lejanas. La tensión entre autonomía y dependencia no es fácil de transitar cuando está en juego la fuente laboral y la obtención de otro tipo de beneficios para la sobrevivencia.

También los enclaves informacionales actúan sobre los territorios cercanos a través de fundaciones que conocen el entorno, sus problemas y su perfil. Tal es el caso de las convocatorias a organizaciones de base para la presentación de iniciativas comunitarias destinadas a los sectores en situación de pobreza. Una de esas organizaciones conformada por antiguos habitantes de la zona, nos relata la importancia que ha tenido para ellos la obtención del apoyo financiero por parte de la Fundación Zonamérica para la concreción de un emprendimiento productivo a desarrollarse con personas en situación de pobreza. Además del beneficio obtenido en cuanto al apoyo material para cumplir con sus finalidades sociales (al que acceden en menos tiempo y con menos obstáculos que si lo gestionaran ante el estado), resaltan el impacto en términos de reconocimiento y valoración de la organización. Siguiendo a Bader Sawaia (2004), dentro de lo sutil en que muchas veces los procesos de dominación se ejercen, se hace

fundamental analizar los procesos afectivos involucrados y sus implicancias políticas e ideológicas. En este sentido, cabe preguntarnos por los efectos que genera la gratificación por el reconocimiento en la organización analizada.

La organización de base se ve fortalecida en la percepción de sus capacidades de gestión. La confianza de la empresa privada genera algo que, en otros momentos o en otras organizaciones, ha generado el estado cuando se asocia con organizaciones sociales de diverso tipo para ejecutar programas de política pública: una suerte de mayor estatus. Así, la empresa privada pasa a ser una marca y a formar parte de su identidad.

Las organizaciones sociales de base territorial podrían, potencialmente, comportarse de forma diferente respecto a estas acciones que se realizan en el marco de la RSE. Entre la aceptación acrítica y el rechazo total, hay una vasta gama posible dependiendo de la coyuntura, de la oportunidad política, del actor empresarial que se trate, de la situación o urgencia ante la que se encuentran, de la ausencia mayor o menor de las instituciones estatales. En el caso que nos ocupa y hasta donde ha llegado nuestra indagación, parece primar la primera de las alternativas.

Tanto desde la perspectiva de algunas de estas organizaciones, como de algunos actores gubernamentales, se ha encontrado un fuerte pragmatismo en este sentido. Por ejemplo, una solicitud a una empresa puede verse como la expectativa de quitarle algo al capital a favor del barrio (sería como una expresión de la "teoría del derrame a nivel local"), sobre todo cuando además ellas cuentan con beneficios tributarios. Para la empresa puede significar la compra de confianza y de seguridad socio-territorial. En todo caso, es muy difícil para organizaciones que viven muchas veces en la urgencia de lo inmediato, advertir la complejidad de este "mercado de la solidaridad" que la RSE contribuye a crear. Hay ausencia aparente de conflicto: la empresa cumple con su responsabilidad social, el estado es condescendiente con ello (aportar económicamente a la zona es lo que tienen que hacer, ya que están exoneradas de impuestos) y los actores comunitarios obtienen beneficios materiales y simbólicos. Así, la dimensión política de la acción y de la participación social en el caso de estos últimos queda debilitada, menguando las posibilidades de pensar más allá de las necesidades inmediatas.

El tema excede lo puntual. Mediante los cambios en curso ya aludidos, debe considerarse la capacidad de la empresa para reestructurar el tejido social cercano, instaurar un conjunto de relaciones sociales y culturales y producir identidades nuevas. De modo que se está ante una nueva forma de regulación de las relaciones sociales (Falero, 2013).

Conclusiones

Una primera conclusión a destacar es la competencia, en la actualidad, por inversiones que pueden terminar reconfigurando de modo radical una región metropolitana como la que ha sido abordada. Los incentivos pueden ser beneficios generales, como una política de atracción de inversiones, o selectivos, por ejemplo, fiscales y vinculados a sectores en particular. Hay una amplia gama de posibilidades. Los gobiernos juegan un rol clave en tal sentido mediante la generación de incentivos diferenciales. Esto ha ocurrido claramente en la región metropolitana estudiada.

De esa forma, el análisis permite advertir como segunda conclusión la importancia que adquieren los llamados territorios estratégicos, de conexión global-subnacional (en nuestro caso, las dos grandes zonas francas) o, lo que es lo mismo, el nivel subnacional en la constitución de las formaciones globales que se usan para deslocalizar actividades de empresas transnacionales. Este proceso implica que algunos elementos de lo nacional deben desnacionalizarse. Las nuevas condiciones organizacionales, que permiten operar globalmente, suponen también transformaciones territoriales que nos interpelan en nuestra capacidad de pensar las regiones metropolitanas en nuevas contradicciones. El examen de la incidencia del mercado inmobiliario y la especulación de la tierra en las zonas metropolitanas no pueden estudiarse separados de los anteriores elementos.

Una tercera conclusión, es la forma archipiélago que aparece en la región metropolitana estudiada considerando las islas de enclaves económicos o territorios estratégicos y los barrios privados que se han venido expandiendo. Puntos concentrados de acumulación a nivel metropolitano que son atravesados por redes globales de acumulación y que van reconfigurando el territorio. Ambos elementos están conectados y los dos casos presentan características similares en cuanto a cierre y separación del entorno, pero al mismo tiempo proponen una imagen contraria, de continuidad. Se observa un entrecruzamiento entre emprendimientos económicos y urbanizaciones cerradas residenciales que lleva a ponderar los nuevos dispositivos de dominación que se ponen en práctica. En tal sentido, el recurso de construir un poder simbólico asociado a la modernidad, a integrarse al mundo, a la sociedad del conocimiento, a la seguridad, entre otros, no es una cuestión accesorio. Actualmente, ocupa un lugar clave dentro de las formas en que se busca aceptación y prevenir conflictos.

Una cuarta conclusión, es la importancia de considerar cómo estos núcleos

territoriales concentrados de sectores sociales dominantes reconfiguran el tejido social y se va cristalizando una nueva estructura social con relación a la preexistente. Las formas de intervención social directa sobre ese mar de situaciones diversas para lograr aceptación va, desde ofrecer empleos no calificados, apoyar selectivamente organizaciones sociales, buscar mecanismos de responsabilidad social empresarial, y que ello aparezca con un tono de compromiso social, de respeto y apoyo a la sociedad. Esto conforma una verdadera disputa por el territorio en relación con otros agentes sociales, donde las estrategias de dominación y control de unos con relación a otros debilitan la posibilidad de emprender acciones colectivas y expresar conflictos sociales producto de la desigualdad, impactando además en la construcción de identidades sociales.

En dicha línea, quinta conclusión, el papel que adopta el estado en este sentido es fundamental, ya que, delegar en manos privadas el cumplimiento de funciones vinculadas a garantizar el acceso a servicios e infraestructura adecuada para la calidad de vida de la población, implica favorecer indirectamente la persistencia de las modalidades de dominación analizadas y, además, renunciar a un rol fundamental: el de proteger el derecho a la ciudad de todos los ciudadanos.

Llegados aquí, solo resta decir, sexta conclusión, que es vital entender hacia el futuro la conexión entre la construcción social del territorio con trayectorias individuales y la construcción de subjetividades colectivas en estas condiciones de notoria desigualdad social. Pues, es claro que no puede explicarse una cosa sin la otra y que el objetivo de construir y fortalecer el tejido social en la zona que nos ocupa pasa por conocer tanto procesos macro, que van más allá de la coyuntura y del espacio inmediato, como elementos de nivel más micro que a la larga van conformando disposiciones a actuar, sentir y pensar.

Referencias

Falero, Alfredo (2012) "Zonamérica y Jacksonville: conexiones globales, aislamiento de prestigio y luchas por el territorio en la zona noreste de Montevideo". En *El Uruguay desde la Sociología x*. Montevideo, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.

____ (2013) "El papel de la responsabilidad social empresarial en la regulación del tejido social. Aperturas analíticas para el caso uruguayo". En *El Uruguay desde la Sociología xi*. Montevideo, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.

González Rey, Fernando. (2011) *El sujeto y la subjetividad en la psicología social*. Buenos Aires-México DF, Noveduc.

Harvey, David (2007a) *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid, Ediciones AKAL.

____ (2007b). *Espacios del capital. Hacia una geografía crítica*. Madrid, Ediciones AKAL (1.ª edición en inglés: 2001).
Lefebvre, Henri (1973) *El derecho a la Ciudad*. Barcelona, Ediciones Península.

Pérez Sánchez, Marcelo (2013) "Los ganadores y sus vecinos perdedores: las relaciones sociales entre barrios privados y asentamientos irregulares en las regiones metropolitanas de Montevideo". Buenos Aires y Santiago de Chile. Proyecto de tesis de Maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina, Universidad de la República y Universidad Complutense de Madrid. Sin publicar.

Randado, Alejandro (2010) "Aparición y auge de las urbanizaciones privadas en el Gran Buenos Aires". *Revista Temas Americanistas* n.º 25, pp.110-136, Universidad de Sevilla, España.

Sabatini, Francisco (2000) "Reformas de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la segregación residencial". *Revista Eure* 26, pp. 77. Santiago de Chile.

____ (2004). "Medición de la segregación residencial: reflexiones metodológicas desde la ciudad latinoamericana". En: Sabatini, F. y Cáceres, G. (Comp.) *Barrios Cerrados en Santiago de Chile. Entre la exclusión y la integración residencial*. Lincoln Institute of Land Policy, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.

Sabatini, Francisco; Cáceres, Gonzalo y Cerda, Jorge (2001) "Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción". *Revista Eure* 27, pp. 82. Santiago de Chile.

Salcedo, Rodrigo; Torres, Alfonso (2004) "Los nuevos barrios enrejados ¿muro y frontera?". En: Sabatini, F. y Cáceres, G. (Comp.). *Barrios Cerrados en Santiago de Chile. Entre la exclusión y la integración residencial*. Lincoln Institute of Land Policy, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.

Sassen, Saskia (2007) *Una sociología de la globalización*. Buenos Aires, Katz Editores.

Sawaia, Bader (2004) "O sufrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão/incluso". En: B. Sawaia (Org.) *As artimanhas da exclusão. Análise psicossocial e ética da desigualdade social*, pp. 97-118. Petrópolis, Editora Vozes.

Svampa, Maristella (2001) *Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados*. Buenos Aires, Editorial Biblos Sociedad (2.a edición).

Wacquant, Loïc (2011) "El diseño de la seclusión urbana en el siglo xxi". *Revista Herramienta* n.º 48, octubre, Buenos Aires.



américa latina

contrapunto



Acapatzingo: construyendo comunidad urbana

César Enrique Pineda

Cuando uno cruza las puertas de este barrio inusual, se da cuenta de inmediato de que algo muy especial sucede en este rincón del oriente de la Ciudad de México. No solo porque uno es recibido por las guardias rotativas de los vecinos que mantienen la seguridad barrial en cada acceso para las más de quinientas familias de la Cooperativa Acapatzingo; ni tampoco por los mensajes colgados en las puertas con numerosas invitaciones a talleres y otras actividades culturales; sino esencialmente porque al cruzar el umbral de esos accesos uno puede ver y sentir otro orden, uno alternativo, en medio de la gran capital.

Llama la atención enseguida que las jardineras de las banquetas estén frondosas y cuidadas; que las casas aunque sencillas y modestas brillen con pintura reciente; que los pocos autos que circulan lo hagan a muy baja velocidad, dentro de este barrio que restringe la entrada a los que no son sus habitantes y que, por tanto, los niños pueden correr por las calles y llenar de carcajadas algunos espacios recreativos.

Si uno camina por La Polvorilla, aunque no vea opulencia en este barrio autoorganizado, quizá se puede encontrar con otro tipo de riqueza: la que se basa en la cooperación, la colaboración, la reciprocidad y la organización de los más pobres que han logrado construir, desde cero, una nueva comunidad que toma decisiones por asamblea, tiene su propia radio, su sistema de seguridad interno, sus huertos colectivos y espacios comunes construidos en buena medida de manera autogestionaria, todo ello en medio de una zona favelada, precarizada y marginal. Sobre esta extraña comunidad se refiere este artículo, que trata de describir el proceso de construcción comunitaria urbana como proceso atípico de autonomía en plena ciudad.

Luchas en la periferia urbana mexicana

A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, se generó en Ciudad de México y otras partes del país, un proceso ascendente de organización popular urbana que comenzó a formar numerosas barriadas populares en las periferias, en un fenómeno equivalente a lo que sucedió en muchas ciudades de América Latina (Zibechi, 2008).

Las luchas por la vivienda tuvieron un crecimiento exponencial debido a la creciente migración del campo a Ciudad de México, a la explosión demográfica de esas décadas, a los mecanismos de incorporación estatales e irregulares en el mercado inmobiliario y, en especial, a la concentración y centralización del empleo industrial y mercantil en el Distrito Federal, la capital del país. A ello habría que agregar la agudización de la escasez de vivienda, o de sus altas rentas, que para la década de los setenta significó una verdadera crisis habitacional intensificada por las consecutivas crisis económicas que golpearon los ingresos de los trabajadores con la reducción de sus ingresos y con el aumento de la carestía de la vida (Navarro, 1990).

La capacidad del estado mexicano para satisfacer la demanda de vivienda fue por mucho rebasada, al igual que sus mecanismos de control de los sectores populares. Los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Distrito Federal, fueron además totalmente desbordados por la dinámica poblacional urbanizadora, dejando en la desprotección a enormes contingentes sociales empobrecidos en asentamientos precarios e irregulares y sin servicios de infraestructura básica.

En medio de lo que hoy sabemos era una crisis de acumulación global y del desbordamiento del régimen de regulación estatal, la acción de activistas estudiantiles, promotores de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y de militantes de la izquierda radical no partidaria en las periferias, encontró un campo fértil de necesidades sociales y de disposición de lucha que abrió la posibilidad de un poderoso movimiento de toma de tierras urbanas. Decisiva sería, en 1980 y 1981, la realización de los Encuentros Nacionales de Colonias Populares que fructificarían en la integración de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), antecedente directo de numerosas expresiones que se diversificarían en toda la Ciudad de México (Moctezuma, 1984; Moctezuma, 1999). Pero no sería sino hasta el terremoto de 1985, donde no solo colapsarían construcciones, casas y edificios, sino también las redes clientelares del priismo, cuando se abriría una enorme brecha, donde el régimen sería rebasado por la organización y la movilización popular frente al desastre. Si la crisis habitacional era grave previa al terremoto, posteriormente se generó una masiva demanda de vivienda que fue canalizada y politizada por numerosos y emergentes procesos urbanos populares. Los movimientos de inquilinos y de solicitantes de vivienda, quienes habían iniciado la toma de tierras y formado asentamientos y barriadas populares, convergieron —con el detonador del terremoto por un lado y por el creciente clima de movilización social en Ciudad de México— en la segunda mitad de la década de los ochenta. La ciudad vivió

un ascenso cultural, estudiantil y electoral, desde abajo, de manera vertiginosa.

Sería en el oriente de la ciudad, en el cinturón de extrema miseria formado en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa e Iztacalco, de donde emergerían masivos procesos de toma de tierras orientadas a satisfacer la urgente necesidad de un techo. El núcleo origen de varias expresiones del Movimiento Urbano Popular (MUP)¹ sería la emblemática toma del predio El Molino, en 1985, que marcaría la pauta para realizar trabajo de base en los cinturones de esas zonas precarizadas.

Había surgido el equivalente a un poderoso movimiento de los sin techo, anclado en las redes familiares y de parentesco, en las redes subalternas urbanas por un lado y en los núcleos militantes influidos por el maoísmo, por lo que se llamaba línea de masas, así como por innumerables activistas y grupos estudiantiles que retomaban muchos de los postulados y planteamientos de esa década, entendidos en clave revolucionaria de liberación nacional y de construcción de un modelo socialista (Lao, 2009). De la paradigmática toma masiva de El Molino, a la par de otras como San Miguel Teotongo o Cabeza de Juárez, y en especial después de violentos desalojos en la zona del Ajusco, surgirían varias expresiones del MUP y, en 1988, el ala radical de todo el movimiento: el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) (Sánchez, 2007), de donde emergerá la Cooperativa Acapatzingo.

A contracorriente

La Cooperativa Acapatzingo ubicada en los límites de las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac es el asentamiento más grande y más consolidado de ocho asentamientos y campamentos más que integran el Frente Popular Francisco Villa Independiente-Unidad Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente (Fpfvi-Unopii)². Popularmente conocida como La Polvorilla, es quizá una experiencia atípica al interior de lo que hemos caracterizado como movimiento urbano popular, ya que su posterior desarrollo, al momento de auge del MUP, intensificó y aceleró las tendencias de autoorganización, autogestión y participación, con una explícita intención de construcción comunitaria y, en los últimos años, utilizando la noción de autonomía y poder popular para identificar dichos procesos colectivos.

Aunque por su extensión territorial y por su número de habitantes, Acapatzingo es la experiencia comunitaria de construcción autonómica más compleja del Fpfvi-Unopii, lo cierto es que las prácticas de construcción comunitaria

también se reproducen en el resto de los asentamientos, en menor escala, pero en equivalente intensidad y capacidad organizativa. En cada uno de estos núcleos³ —derivados de largas historias de lucha por la tierra urbana, de toma de los terrenos o bien de compras con ahorros colectivos, de acampado y resistencia a los desalojos por el gobierno de la ciudad— se han constituido cooperativas de vivienda.

Estas experiencias mantienen continuidades con las capacidades creadas en el movimiento urbano popular en su conjunto para la solución de la vivienda popular. Dichas capacidades han sido sintetizadas para el estudio de otras organizaciones del MUP por Ramírez Sáiz, pero son también características del PfvU-nopii: a) la creación de ahorro colectivo como herramienta de acceso para los créditos gubernamentales para vivienda; b) intervención directa en el diseño y planeación del asentamiento; c) administración y control del proceso de producción de la vivienda y de los servicios urbanos; d) participación en la autoconstrucción (Ramírez Sáiz, 2003: 33). A ello habría que agregar la secuencia de toma de terrenos, autoorganización, defensa de las tierras tomadas, marchas y plantones como acciones colectivas que identifican a este movimiento.

Sin embargo, estas fortalezas de los procesos no son el centro de nuestra reflexión. A pesar de su importancia, lo característico del proceso del PfvU-nopii se concentra en haber dado una radicalización importante a los procesos autoorganizativos, producto de varias bifurcaciones —tanto políticas como organizativas, que no fueron sencillas— que parten del rompimiento de la concepción revolucionaria como acción futura. Gerardo Meza, uno de los líderes de la organización sostiene que:

Los militantes a los que ahora se les llama ortodoxos planteaban que primero tenía que llegar la revolución para transformar nuestro mundo, nosotros lo que decimos es que tenemos que comenzar con esta transformación aquí y ahora, por medio de esfuerzos, de solidaridad con los compañeros, con los hermanos. Desarrollar el trabajo colectivo, en contraposición con la competencia y el individualismo que nos enseñan diariamente en todos lados y por supuesto, el respeto con los demás. Partiendo de estos principios, nosotros decimos que la revolución es aquí y ahora para toda la vida (Lao, 2009).

El progresivo abandono y crítica sobre la concepción clásica de la izquierda los ha acercado a otros procesos sociales, aunque manteniendo un horizonte de transformación socialista, la autonomía ha aparecido como elemento de construcción política. Enrique Reynoso, también dirigente de la agrupación, plantea sobre ello:

Nosotros modestamente tratamos de aprender del EZLN y del MST, porque son derroteros en América Latina. Modestamente creemos que nos acercamos en varios aspectos: [en] la construcción de espacios con cierta autonomía... de construcción de autonomías... esencialmente en esta necesidad de aprender y comprender que los movimientos no surgen de arriba hacia abajo, que los movimientos se van dando de abajo hacia arriba y que es este equilibrio en la toma de decisiones donde se rompe o se empieza a romper con el sistema que demanda obedecer los dictados de una clase o sector ubicados por encima de los demás (Sánchez, 2010).

Quizá estas orientaciones sobre la revolución y el poder permiten comprender un poco lo intenso del proceso comunitario que se vive al interior de los asentamientos del PfvíUnopii y de su acercamiento, en los últimos ocho años, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus iniciativas políticas, ancladas en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Estas concepciones sobre el cambio social y la dominación son producto de una fuerte discusión interna, del análisis de los cambios en los procesos sociales mexicanos y mundiales y, en especial, de una radical crítica a los senderos que tomó el propio movimiento urbano popular, por lo que dichas definiciones van a contracorriente del sentido que tomaría el MUP.

Así, Acapatzingo y el resto de los asentamientos del Frente Popular se han consolidado después de un largo y tortuoso camino; primero en la toma de tierras, luego en una intensa fase represiva del estado que significó numerosos encarcelamientos y, posterior a ello, en las numerosas divisiones del MUP y también del propio Pfví; en especial, en los caminos de institucionalización y partidización que vivió la mayor parte del movimiento urbano popular a raíz de su articulación con el Partido de la Revolución Democrática, que representa a la centroizquierda que gobierna la Ciudad de México desde 1997.

Y es que la influencia del MUP se eclipsó en la primera década del siglo XXI por diversos factores, como la incidencia de la dinámica del mercado en los procesos habitacionales y de urbanización (Eckstein, 2001); por la fragmentación, división y dispersión del propio movimiento (Serna, 1997; Tamayo, 1999); por los cambios en las políticas públicas sobre la urbanización y la vivienda que redujeron la tolerancia a los procesos de toma de tierras; por el abandono de la idea de construcción de poder popular, la progresiva desactivación de asambleas y una creciente jerarquización (Barragán, 2010). En especial, la alianza electoral que la mayoría de las organizaciones del MUP realizaría con el partido en el poder provocaría que:

[...] subordinaran la organización social a la dinámica de los partidos. Dichas medidas fueron causantes de la desactivación de los grupos urbanos populares y de su progresiva partidización, es decir de su conversión en fracciones partidarias. Además, en su relación con los respectivos partidos, estos grupos asumieron rasgos clientelistas y corporativos, exigiendo cuotas de poder (cargos de representación popular o partidarios) y atención preferencial a sus demandas. [...] Desde el punto habitacional y urbano, los efectos de la incursión electoral y partidaria de los grupos independientes no fueron significativos. Es decir, no obtuvieron logros reivindicativos y el costo orgánico pagado fue muy alto (Ramírez Sáiz, 2003: 16).

Es por ello que las definiciones del FpviUnopii son decisivas cuando resuelven apartarse de las tendencias dominantes del MUP en su alianza electoral-gubernativa, por un lado, y de las prácticas clientelares que progresivamente fueron invadiendo al movimiento. Sus definiciones y orientaciones emancipatorias han influido en su construcción comunitaria, ya que plantean «construir ya no solo proyectos de vivienda, sino proyectos de vida» (FpviUnopii, 2008). Esta sencilla definición, sin embargo, reorienta su identidad de la gestión de vivienda a la autorregulación social (Gutiérrez, 2011); de la demanda al estado hacia la autogestión; de la alianza electoral y ocupación de espacios estatales hacia la construcción comunitaria y autonómica. Son, por tanto, una expresión a contracorriente tanto al interior del MUP como al corazón de la Ciudad de México y su urbanización salvaje con procesos intensos de mercado y de estatalización. En medio de ese contexto ha resurgido, o mejor aún se ha construido, la comunidad urbana.

De la necesidad a la comunidad

Los enormes terrenos de La Polvorilla, de cerca de setenta mil metros cuadrados, fueron tomados en la década de los noventa, y casi veinte años después es un asentamiento de casi quinientas familias que integran la Cooperativa Acapatzingo, cada una con una vivienda de dos pisos, organizadas por sectores, alrededor de espacios comunes. Como hemos dicho, el asentamiento crea un espacio interior controlado en sus dos accesos por equipos rotativos que resguardan las veinticuatro horas la entrada y salida de personas y autos. El contraste de la organización interna, que genera un orden alterno y colectivo, resalta con sus alrededores precarizados. Acapatzingo da la impresión de ser

un oasis en medio de un desierto de pobreza y casas grises, un espacio de vida en medio de lo que, en otras latitudes, serían las favelas empobrecidas periféricas. Esa comunidad, después de una larga lucha y procesos de organización, cuenta además de sus viviendas, con todos los servicios básicos. Pero aún más, en asamblea, una a una se han decidido las prioridades para construir espacios comunes como: la Casa Nuestra, que es el espacio cultural y educativo donde hay una biblioteca y sala de reuniones; una plaza que fue habilitada con juegos para los niños; un espacio colectivo, todavía deteriorado, El Tejabán, que sirve para las asambleas de la cooperativa. Han construido también una cancha de fútbol para los jóvenes que tuvo una enorme participación colectiva. Al momento de escribir estas líneas se edifica una plaza para los ancianos. Los planes de la cooperativa contemplan espacios a futuro para una clínica de salud, un teatro al aire libre y su propia escuela de educación básica.

Dos logros adicionales importantes son espaciales y organizativos. Por un lado, la construcción de un huerto colectivo donde se cultivan lechugas, chiles, tomates y hasta fresas, bajo un enorme invernadero. Por el otro, una de las viviendas, donada por la comunidad para servir como espacio común, alberga a La Voz de Villa, la radio comunitaria que transmite sin permiso y es gestionada, esencialmente, por jóvenes de la propia comunidad y también por varios menores que comenzaron a transmitir desde que tenían menos de diez años.

Este ordenamiento socioespacial crea un territorio interno, real y simbólico, sorprendente para cualquier visitante, ya que se vive en espacios diseñados, pensados y vividos para la realización de la comunalidad. Solo la planificación como un bien común —como producción del espacio destinado al beneficio colectivo y a mantener relaciones permanentes en colectivo provocando una socialidad alternativa— es un radical logro urbano. Quizá por ello, Acapatzingo siempre tiene visitantes locales, nacionales o internacionales, que son recibidos en una territorialidad que pareciera hubiera sido planificada como ideal de una comuna.

La construcción de Acapatzingo es una verdadera contratendencia, en medio de la extracción de rentas del suelo y los inmuebles por el capital, proceso intensificado y acelerado por las políticas de los gobiernos de centroizquierda que facilitaron, por todos los medios estatales, la especulación, la gran construcción privada y la gentrificación en Ciudad de México. La construcción de estos espacios se logra por una combinación de faenas y jornadas colectivas de manera rotativa por todas las familias (autoconstrucción), recursos y ahorros propios, así como “arrancando y exigiendo que los organismos destinados al financiamiento de vivienda como es el Instituto de Vivienda del Distrito Fede-

ral (INVI) [...] otorguen créditos de carácter blando para la construcción” (Lao, 2009). Sin embargo, aunque los logros materiales son a todas luces impresionantes, todo ello no sería posible sin un intenso proceso organizativo que construye colectividad para la gestión de lo común.

Este proceso colectivo de gestión del habitar en común, del vivir conjuntamente, es precisamente la diferencia con un proyecto de vivienda, con el intento de romper con las relaciones utilitarias de gestión de ella y con la clara intención de politizar la necesidad básica de techo para reconstruir relaciones comunitarias de cooperación, reciprocidad, trabajo colectivo, deliberación y decisión, y ejecución en común, que se vuelve uno de los ejes de acción más importantes del Frente.

Los procesos que podemos identificar pueden describirse en las nuevas relaciones autoorganizativas en los procesos de salud y cultura de las familias que integran cada asentamiento. En ellas se desarrollan intensos procesos, casi todos experimentales de prueba y error organizativo, para impulsar capacitaciones en torno de la prevención y el cuidado de la salud. La naciente estructura de promotoras de salud socializa conocimientos básicos de nutrición, primeros auxilios y, en especial, medicina alternativa y tradicional, así como campañas informativas, en cada asentamiento, sobre todos estos temas que apuntan hacia la construcción —como hemos dicho— de sus propios centros de salud autogestionados. Por el otro lado, existe un intenso proceso participativo en las actividades culturales y recreativas, que van desde juegos con los niños y apoyo en sus tareas, que pasan por torneos, bailes y grupos teatrales, y llegan hasta las fiestas comunitarias en sus aniversarios como asentamientos y como organización.

Sin embargo, la creciente participación es también autorregulativa, tanto en el trabajo colectivo y su división rotativa como en su dimensión crecientemente autogubernativa, donde, de manera embrionaria, cada asentamiento discute sus propias reglas, normas y mecanismos para la resolución de conflictos. Sobre el tema, habla Rosario Hernández, otra de las dirigentes en Acapatzingo:

Si aquí en la colonia se da una situación, un conflicto entre vecinos, algún robo que se pueda dar —que hoy en día pues ya no es como una situación muy común— quien lo resuelve es la comisión de vigilancia. Porque si el esposo le pegó a la esposa o viceversa —también se da— la comisión es la que arregla todo eso (Sánchez, 2010).

A los reglamentos y mediaciones discutidos y aprobados colectivamente hay que sumar que las comisiones de vigilancia mantienen el sistema de protección y seguridad de cada asentamiento, y en su caso entre asentamientos, con numerosos protocolos de reacción ante siniestros, ante robos comunes,

ataques policiacos u otros posibles incidentes, ya que en Acapatzingo, salvo excepciones, no se utiliza la policía ante los conflictos: “No tenemos confianza en ellos, entonces la seguridad la hacemos nosotros mismos” (Sánchez, 2010). La comunidad mantiene un control espacial que semeja al control territorial de las experiencias rurales comunitarias.

De igual forma, se sostiene el mantenimiento de todos los espacios comunes que incluyen las viviendas particulares, banquetas, jardineras, plazas, bodegas, infraestructura y recursos, con participación colectiva y rotativa. Es precisamente aquí donde el trabajo de cultivo, con la comisión de mantenimiento, ha logrado sostener en los últimos años los invernaderos, que ya se están intentando replicar en el resto de los asentamientos, logrando experimentar con el reparto y la venta interna de sus productos, así como el cultivo para la elaboración de medicinas tradicionales. Pero todo ello no sería posible sin una organización participativa desde abajo y que involucre a prácticamente todo el entramado comunitario y familiar.

La organización básica del Frente se realiza por brigadas que pueden aglutinar a diez o quince familias, y que realizan trabajos transversales que requieren mayor esfuerzo y participación, como bien pueden ser las faenas de mantenimiento o construcción, o bien la coordinación rotativa por brigada de la organización de las fiestas colectivas (trabajo que recuerda al sistema tradicional de los pueblos originarios de tequio, sistemas de cargos o mingas). Cada brigada delega la coordinación de trabajos por rubros en las llamadas comisiones, también de manera rotativa. Es decir, cada una envía un integrante a las comisiones de salud, educación, vigilancia, mantenimiento, prensa, cultura, y educación y finanzas, lo que integra un cuerpo intermedio de coordinación y operación permanente en cada asentamiento que, en los hechos, funge con tareas autorregulativas de la comunidad en su conjunto, creando una estructura de participación impresionante, lo que permite, por supuesto, una apropiación muy intensa de la gestión del asentamiento, pero también de los procesos deliberativos, decisorios y cooperativos que crean una cultura y una identidad de poder desde abajo.

Cada asentamiento, cuenta además con la máxima instancia decisoria que es la asamblea, donde cada familia debe enviar al menos a un representante con voz y voto; generalmente son mujeres jóvenes las que integran la asamblea y buena parte de las comisiones. La mesa es rotativa y es en la asamblea donde “todos confluimos, en que todos sabemos que a pesar de las diferencias que podemos tener, por nuestra procedencia o nuestro origen, aquí somos iguales, sabemos que este espacio en la toma de decisiones es como lo más importante para nosotros”.

En resumen, la apropiación comunitaria de la tierra, el diseño y regulación espacial socioterritorial, la construcción de relaciones cooperativas y de división del trabajo colectivo de manera autogestionaria, los emergentes procesos de autorregulación en cuestiones comunicativas, culturales, educativas y de salud, hablan de un inesperado proceso urbano de construcción de relaciones de comunalidad y, en buena medida, de una relativa autonomía urbana.

La comunidad urbana

La producción de comunidad urbana no es un proceso sencillo, es un lento y contradictorio proceso de reconstrucción de relaciones colectivas, debilitadas o fracturadas por el mercado y el estado. Como plantea una de las mujeres de las comisiones de trabajo en el sector Pantitlán: “Nosotros estamos manoseados mucho por el capitalismo. Antes de entrar somos muy individualistas y aquí lo que tratamos es en comunidad... los beneficios son para todos. Nosotros estamos por la autonomía.”

La importancia de la construcción comunitaria urbana tiene que ver también en cómo los sectores subalternos que integran los asentamientos (albañiles, carpinteros, comerciantes ambulantes, vendedores en los vagones de los trenes subterráneos, empleados) recuperan su capacidad como sujetos de manera colectiva. Los subalternos recuperan la voz con la recreación de los lazos comunitarios, a pesar de que algunos abortan el proceso por no poder adecuarse a las dinámicas colectivas. Sin embargo, debe entenderse que el proceso organizativo permite que los dominados y excluidos —que se encuentran en la desposesión material casi absoluta, pero también en una relativa precariedad subalterna, simbólica— abran y construyan, reconstituyendo el propio mundo simbólico de cada una de estas familias y mujeres, como dice Rosario:

[...] lo poco que he aprendido lo he aprendido de la organización [...] a mí me ha permitido ser... una mujer total. Aquello de que la mujer solo era para cocinar o tener hijos aquí en la organización se rompe y no solo conmigo [...] creo que parte de los logros de la organización es la transformación personal que se hace de cada uno de nosotros (Sánchez, 2010).

La producción de comunidad urbana, por otro lado, también golpea la idea dominante de que los mecanismos de gestión y autorregulación solo pueden

realizarse en las culturas campesinoindígenas ancladas en la tierra productiva o en la identidad étnica. Si bien uno de los límites más importantes del proceso del FpviUnopii es precisamente que sus familias están atadas al trabajo precario y asalariado, lo cierto es que la producción de relaciones comunales ha sido posible a pesar de este obstáculo estructural.

La producción de comunidad urbana, en el caso de Acapatzingo y el resto de los asentamientos, habla entonces de la posibilidad de ir a contracorriente de los mecanismos de los regímenes de regulación donde «el estado desempeña el verdadero papel de ordenador de la vida cotidiana y bajo la cobertura de la organización del espacio» (Castells, 1974: 7). Si pensamos que los elementos centrales de los sistemas comunales no son la tradición, la identidad, la unidad ni la cultura, como de manera dominante se ha hecho desde hace mucho tiempo, entonces la alternativa comunitaria resurge explicando estos procesos urbanos.

Si entendemos los sistemas comunales (Patzí, 2005) más como sistemas de gestión económica y política creados desde abajo, de manera rotativa, bajo el mando colectivo, entonces los entramados construidos por familias que no se conocían y que no tenían vínculos previos ni identidades culturales homogéneas se vuelven estructuras neocomunitarias. Es decir, estas nuevas comunidades, no ancladas en la tradición milenaria ni en el arraigo identitario previo, han podido recrearse a partir de un sistema colectivo de trabajo y poder comunal, de propiedad y usufructo de los bienes comunes, creando un territorio parcialmente autónomo, si bien no productivamente, sí en la gestión de la vida urbana, en una relación que no es de carácter públicoestatal, pero tampoco privadamercantil, sino comunal.

Las capacidades autodeterminativas son posibles en la ciudad, enraizadas en la constitución, construcción y constante actualización de la capacidad de control de los asuntos comunes. Más allá de si estas experiencias comunales pueden reproducirse, no como alternativas focalizadas sino como alternativas generalizadas, los críticos de sus límites (Harvey, 2012) quizá deberían reconocer que para pensar en posibles sistemas de gestión urbana más amplios, estas experiencias comunales, tendencialmente autonómicas, tienen mayor prioridad e importancia por ser praxis viviente, única plataforma desde la cual entonces podemos imaginar esos sistemas amplios de autogobierno urbano. Estas maneras de estar, habitar, pensar y hacer juntos —aunque con sus propios límites y contradicciones—, es decir, de manera comunitaria, son base emancipatoria para repensar lo material, lo urbano, la gestión colectiva y la posibilidad de un mundo otro, como en un documento del Frente se plantea:

Entendimos que nuestra lucha no empieza ni acaba con un predio o un solar, ni en cuatro paredes y un techo, que la lucha que ha de transformar al mundo empieza por nosotros mismos, por dejar a un lado el egoísmo, por empezar a pensar en colectivo, es decir, empezamos a dejar de ser yo, para empezar a ser nosotros (FpfviUnopii, 2012).

La experiencia de Acapatzingo y el resto de los asentamientos del FpfviUnopii son una muestra viva de que la comunidad urbana existe, a contracorriente del mercado y del estado. Acapatzingo es, además, esperanza, porque en medio de la soledad ha prosperado lo colectivo; porque en medio de la pobreza ha crecido la organización; porque en medio de la gris ciudad ha germinado el verde de sus cultivos; porque en medio de la vorágine de la agresiva, individualista y mercantilizada Ciudad de México, se ha sembrado, ha germinado y ha crecido —como ellos mismos dicen— el “nosotros”.

Referencias

- Barragán, Lydia (2010). El movimiento urbano popular en la ciudad de México. La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y su proyecto comunitario de producción y gestión social del hábitat, tesis para obtener el título de licenciada en Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Castells, Manuel (1974). Movimientos sociales urbanos. México, Siglo XXI Editores.
- Eckstein, Susan (2001). Poder y protesta popular. México, Siglo XXI Editores.
- Fpfvi-Unopii (1996). Balance de la Organización ante el Primer Congreso.
- ____ (2012). «Capitalismo, autonomía y socialismo». Primer Encuentro de Comisionados UNOPII. Ciudad de México.
- ____ (2012). Documentos Resolutivos del VI Congreso Nacional.
- ____ (2012). Discurso en el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas (2008). Recuperado el 2 de septiembre de 2013 en: <http://meorganizo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:frente>.
- Harvey, David (2012). Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid, Akal.
- Lao, Flavia (2009). «El Frente Popular Francisco Villa Independiente no es solo un proyecto de organización, es un proyecto de vida». Entrevista a Enrique Reynoso, miembro del FPFVI. Recuperado el 2 de septiembre de 2013 en: <<http://www.rebellion.org/noticia.php?id=78519>>.
- Moctezuma, Pedro (1984). «El movimiento urbano popular mexicano». Nueva Antropología, n.º 24, pp. 61-87.
- ____ (1999). Despertares. Comunidad y organización urbano popular en México 1970-1994. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
- Navarro, Bernardo (1990). Crisis y movimiento urbano popular en el Valle de México. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
- Patzi, Félix (2005). «Sistema comunal, una propuesta alternativa al sistema liberal». En: Escárzaga Fabiola, Gutiérrez Rael (Coord.). Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, pp. 291-313. La Paz, BUAP.
- Ramírez Sáiz, Manuel (2003). «Impacto urbano de las Organizaciones Populares en México: 1980-2002». Working paper series. University of Texas at Austin.
- Serna, Leslie (1997). ¿Quién es quién en el MUP? México, Ediciones UNIOS.
- Sánchez, Miguel. Entrevistas a Enrique Reynoso y Rosario Hernández, líderes del Fpfvi-Unopii. Videos originales sin edición para el proyecto «Cooperativa Acapatzingo-Fpfvi-Unopii». Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. CUCEC-UNAM.
- Sánchez, Ruth (2007). El movimiento urbano popular a través de la historia oral: una mirada a la cotidianidad del Frente Popular Francisco Villa. Tesis para optar por el título de licenciado en Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Tamayo, Sergio (1999). «Del movimiento urbano popular al movimiento ciudadano». Estudios Sociológicos, XVII, 50, pp. 499-518.
- Zibechi, Raúl (2008). Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. México, Bajo Tierra Ediciones.

Horizontes de transformación del movimiento urbano popular¹

Alexandra Martínez

En Venezuela el capital se desarrolla estelarmente en espacios urbanos donde habitamos cerca del 90% de la población, espacios improductivos donde el modo de acumulación de capital financiero se centra en la ciudad como lugar de la redistribución de la renta petrolera hacia los circuitos concentrados especulativos: inmobiliarios, constructivos y comerciales, por vía de un esquema de consumo que apunta al infinito. El epicentro de la lucha contra el modelo de civilización (imperial, capitalista, patriarcal y colonial) que está en crisis se libra día a día desde las ciudades; son estas donde nuestros modos de vida, producción y consumo hacen posible el sistema mundial que incrementa desigualdades, guerras, y que amenaza con extinguir la vida en el planeta. Es aquí donde las pobladoras y los pobladores urbanos que confrontamos la avanzada neoliberal salvaje del siglo pasado, tenemos ahora por delante este reto, que es el mismo reto histórico acumulado de la lucha del pueblo por la verdadera y definitiva liberación y la construcción de alternativa. (Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad, Aportes al Programa de la Patria 2012, Movimiento de Pobladores y Pobladoras)

Venezuela, como país dependiente de la renta petrolera, vivió en el siglo pasado un gran éxodo campesino que recompuso la distribución de su población, actualmente 90% urbana. Los pobladores que llegaron a las ciudades, se ubicaron en asentamientos improvisados, no planificados, en los alrededores de la zona plana de la ciudad, en las montañas que la bordean (las periferias en las zonas geográficamente más riesgosas, menos estables y menos accesibles). El éxodo masivo del campo a la ciudad ocurrió en el marco del auge, construcción y hegemonización del imaginario desarrollista, en el cual la renta petrolera y las promesas de la redistribución del ingreso construyeron un discurso de bonanza, riqueza y progreso; de definitiva entrada a la modernidad.

En estos márgenes de las ciudades se conformaron las amplias zonas populares. Allí, los habitantes comenzaron a construir algo más que viviendas o ranchos; comenzaron a construir ciudad. Por un lado, levantaban la ciudad moderna,

1 Publicado en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Alternativas al Capitalismo/Colonialismo del siglo XXI, Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2013.

en calidad de mano de obra; esa ciudad de la riqueza proveniente de la renta petrolera. Pero, por otro lado, montaban la ciudad informal, la ciudad otra, la que hasta hace algunos años no aparecía en los mapas, la de los márgenes; la ciudad de la exclusión, pero también la ciudad cantera para posibles transformaciones.

Con el empuje de las políticas neoliberales, en los años ochenta, empezaron a fraguarse espacios de organización popular desde esos grandes colectivos excluidos, los pobladores y pobladoras de los barrios. Así, se conformaron las Asambleas Barriales de Caracas; espacios asamblearios, amplios, populares y diversos, donde las formas de construcción política se alejaban de manera radical de los espacios de participación política formal. Como ejemplo, podemos mencionar cómo desde la Caracas otra se fraguó uno de los estallidos sociales de mayor relevancia en la historia política reciente del país. El 27 de febrero de 1989 ocurre El Caracazo, un levantamiento popular sin direccionamiento político clásico de ninguna organización, que cuestionó profundamente los cimientos de lo que se suponía era el modelo de democracia liberal latinoamericano, en el que se promulgaba la coexistencia, complementariedad y cooperación entre las clases sociales, como mito pacificador y encubridor de las profundas desigualdades existentes. Fueron los pobladores y pobladoras urbanas quienes protagonizaron esta revuelta.

Durante los noventa, se fueron articulando distintas expresiones de organización, debate y construcción, que cuestionaban las lógicas de exclusión de una ciudad capitalista marcada por la mercantilización de los servicios, la vivienda y los espacios de recreación.

El barrio como lugar de transformación

El barrio compone y significa a este amplio sector de la población que se ha constituido a partir de las luchas urbanas por el acceso a los servicios, a la vivienda, a la educación y, también, a la participación política.

Así, los barrios (que desde el discurso hegemónico de la ciudad son espacios empobrecidos, excluidos, marginales y marginados, carentes de cultura) son construidos y (re)significados por sus pobladores como un espacio de vida, de cultura propia, de solidaridad, de resistencia y de alternativa.

Los barrios son producto de un modelo de segregación social y espacial. Desde el punto de vista urbanístico suponen una situación irregular. Irregularidad jurídica, pues sus pobladores carecen de seguridad legal sobre la posesión de los suelos en que habitan.

Irregularidad urbanística, pues carecen de normas y regulaciones. Irregularidades en las condiciones de vida, pues su equipamiento es deficitario (Rodríguez, 2008).

Sin embargo, los barrios se han conformado en el contexto de procesos de ocupación, cuya característica fundamental es la autoconstrucción progresiva a partir de ocupaciones de terrenos que no pertenecen, de derecho, a sus pobladores. Estos asentamientos urbanos populares han sido la respuesta de la gente; la solución habitacional, al margen del financiamiento de planes públicos y privados.

En su exclusión simbólica, por muchos años se consideró al barrio como sinónimo de atraso y error en el camino del progreso, como algo que no es propiamente la ciudad (aún algunos sectores de la población lo consideran así). Fue visto como una minoría económica que no debía decidir sobre lo público porque no le pertenecía. Hasta hace muy poco, la mayoría de los barrios de Caracas no aparecían en los mapas; eran representados como zonas uniformes verdes o grises, pero nunca reflejados como asentamientos humanos. El proceso de catastro popular empieza, en buena parte, a raíz de la constitución de las organizaciones barriales. Ello significó no solo el levantamiento catastral de los barrios populares, sino, en muchos casos, la reconstrucción de la memoria histórica del lugar y de sus pobladores.

Los barrios, estos espacios autoproducidos al límite, al margen, desde lo no formal, desde la exclusión,

[...] son en grado extremo, manifestaciones que expresan la diversidad cultural de la ciudad y germinan en su seno las maneras alternativas creativas de relación social, organización, producción y comercialización consideradas informales, y que son el ejercicio de la sobrevivencia como principio y valores comunitarios en base a la solidaridad (Rodríguez, 2008).

En gran medida, desde los barrios, las luchas por la democratización de la ciudad surgen con fuerza en un doble movimiento. Por un lado, exigen el acceso a la ciudad: a la tenencia de la tierra, al acceso a la vivienda, a los servicios básicos (luz, agua, transporte). Son luchas por la inclusión (en algunos casos en términos de acceso a la redistribución de la renta, para tener la posibilidad de alcanzar un nivel de consumo que nunca han experimentado). Por otro lado, las luchas apuntan al reconocimiento y la identidad: el reconocimiento del barrio como espacio

territorial, generado desde sus pobladores y pobladoras, con construcciones culturales, saberes, formas de organización, de resistencia y de vida. Es la pelea por la existencia de un modo de vida distinto al impuesto por el imaginario desarrollista, capitalista y neoliberal.

Estos procesos han cuestionado profundamente las políticas públicas (y las nociones de desarrollo y progreso para superar la pobreza) asociadas con “eliminar el barrio,” “educar a la gente,” “salir de abajo.” Confrontan el discurso de la marginalidad, de la pobreza cultural y del modo de vida estandarizado.

La articulación de las luchas barriales en clave de movimiento

Este contexto puede servirnos para entender someramente de dónde surge el Movimiento de Pobladores y Pobladoras y qué implica repensar la ciudad capitalista y aspirar a transformarla. Este movimiento surge como herencia y expresión de las luchas populares urbanas que ocurrieron en los territorios no formales de la ciudad, en los límites, en los márgenes, en los bordes. Sostiene distintas banderas de resistencia, al tiempo que configura una crítica a la ciudad capitalista, articulada en torno a la democratización y el derecho a la ciudad, y apuesta hacia otros horizontes.

La conformación de los Comités de Tierra Urbana (CTU), en el año 2004, fueron claves para la futura articulación de este movimiento. Los CTU son organizaciones barriales que comienzan a vincular distintas políticas populares y propuestas. Al principio, el eje era la titularidad del suelo urbano, pero dichos debates fueron integrando otras temáticas como la democratización y el derecho a la ciudad; la lucha por la tenencia de la tierra urbana; el acceso a la vivienda como un derecho y no como una mercancía; la lucha contra la especulación inmobiliaria, contra los desalojos arbitrarios y forzosos, y la construcción de nuevas comunidades (a su vez, estos debates repercutieron en la cualificación de los sujetos colectivos que configurarían organizaciones en lucha).²

Si bien las reivindicaciones han sido los fundamentos que han movilizado y aglutinado a los sectores populares en distintas oportunidades, los CTU lograron avanzar en clave de movimiento: dejaron de ser apuestas organizativas mera-

2 Cabe señalar que este impulso se da a partir del contexto político que se vive en Venezuela desde 1999, con la elección de Hugo Chávez Frías como presidente de la república, y el inicio del proceso bolivariano (o revolución bolivariana). En este marco, el proceso constituyente, así como el paso de un modelo de democracia representativa a uno de democracia participativa y protagónica, abren el espacio de debate y conformación de distintas formas organizativas locales y barriales; si bien muchas de esas formas organizativas fueron impulsadas, en principio, desde el gobierno, algunas lograron proyectarse autónomamente y existir con un direccionamiento y construcción de agenda propia. Tal es el caso de los Comités de Tierra Urbana.

mente locales, para articularse entre sí en una plataforma nacional; construyeron propuestas y políticas propias, que se desmarcan de las políticas construidas desde el estado (históricamente homogeneizantes, excluyentes, en muchos casos burocratizadas e ineficientes) y de las políticas del sector privado, radicalmente mercantilizadas.

Hoy día, el Movimiento de Pobladores y Pobladoras es una plataforma de articulación de las siguientes organizaciones urbanas:

- Movimiento de Inquilinos. Se articulan en torno a las luchas contra la especulación inmobiliaria y a los desalojos arbitrarios.
- Comités de Tierra Urbana. Además de la lucha por la regularización de la tenencia de la tierra, se organizan por impulsar una política popular y autogestionaria de transformación integral del barrio.
- Trabajadoras y Trabajadores Residenciales. Su lucha se orienta a la dignificación de este sector (anteriormente denominado conserjes) y sus familias, que son actualmente sometidas a lo que se ha definido como una forma contemporánea de esclavitud. Tienen como trabajo el cuidado y mantenimiento de los edificios y, a la vez, los habitan. Por tanto, su lucha ha estado enmarcada en la consecución de derechos laborales y en sus derechos como pobladoras y pobladores.
- Movimiento de Ocupantes. Luchan contra la criminalización de las ocupaciones que, desde hace años, han existido en nuestras ciudades; reclaman el reconocimiento legítimo del derecho de las familias excluidas a recuperar los inmuebles abandonados por el capital inmobiliario y acondicionarlos organizadamente como espacios de vivienda.
- Frente Organizado por el Buen Vivir. Es el resultado de la organización de familias damnificadas, víctimas de los desastres climáticos. Este frente busca recuperar edificios abandonados en la ciudad para que, mediante autogestión, las familias puedan readecuarlos para la vida.
- Campamentos de Pioneros. Es la lucha por recuperar territorio en la ciudad y apropiarlo para desarrollar nuevas comunidades autogestionarias. Los campamentos se conforman con grupos familiares que se articulan para la toma de un terreno ocioso y apuntan a construir una nueva comunidad desde la autogestión.

Las organizaciones de este movimiento han aportado, además, elementos sobre una nueva forma de construir política desde las comunidades; así, la construcción asamblearia y organizativa de base no pasa por coordinaciones centrali-

zadas o espacios de dirección vertical, sino por espacios de dirección y orientación colectiva, desde grupos territoriales y barriales.

De igual forma sucede con el fortalecimiento del papel de las vocerías, en lugar de representantes, delegados o dirección de la organización. La asamblea se configura como el espacio donde se definen acciones y se delegan tareas a algunas compañeras y compañeros, en comisiones de trabajo que luego deben rendir cuentas sobre las responsabilidades que les fueron asignadas.

Esta construcción colectiva de las propuestas y políticas parte del siguiente principio: para que una política popular tenga fuerza debe ser gestada al calor de las luchas y los debates de base. Por lo general, los documentos y políticas construidas son producto de la investigación y el estudio del tema urbano por parte de los militantes, y de la sistematización de los debates locales y nacionales.

Otra de las apuestas a resaltar es la articulación con diversas organizaciones con perfiles de lucha similares en América Latina, y con otras organizaciones urbanas; entre ellas está la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (Selvip), que articula a las siguientes organizaciones: el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), de Argentina; la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) de Uruguay; la União Nacional por Moradia Popular (UNMP) de Brasil, y el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) de Chile. Asimismo, se llevan a cabo acciones orientadas a la articulación política y a la generación de diálogos en temas centrales con otras organizaciones; por ejemplo, el diálogo con organizaciones campesinas o el intento de incorporar la perspectiva de género y los debates feministas populares en las miradas del movimiento.

La formación es otro elemento central en la apuesta de estas organizaciones. El proceso está centrado en el análisis crítico de las prácticas, como eje permanente que se traduce en espacios de escuelas en momentos puntuales; dedica especial énfasis a los procesos permanentes de debate y organización.

En esta reconfiguración política, cabe destacar la reapropiación y resignificación de las políticas públicas que llegan al barrio. Esto está relacionado con un cuestionamiento profundo a las prácticas estatales y burocráticas. Las lógicas organizativas de las comunidades populares desarticulan, en muchos casos, los intentos de control que provienen del estado. Así, por un lado se elevan propuestas al estado y, por otro, se reapropian políticas que llegan a la comunidad.

La construcción de una identidad propia reivindica al barrio como espacio de vida, con profundas desigualdades y necesidades a transformar, pero también como lugar de resistencia, de alternativas, de otras formas, de maneras de vida colectiva y común. Por ello, la autogestión se eleva

como principio motor en la transformación urbana. Según Hernán Vargas, militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, la autogestión podría ser definida como:

La necesidad de fortalecer la capacidad de hacer del pueblo organizado para cristalizar un modelo de gestión colectivo comunitario en las distintas esferas de lo público, y que por lo tanto se constituye en alternativa ante los modelos liberales de mercado y burocráticos estatales que han prevalecido en nuestras ciudades. En el caso de pobladores tiene un fuerte énfasis en el modelo autogestionario para el desarrollo de políticas de vivienda y la producción social del hábitat (Vargas, 2012).

La autogestión, en este contexto, es una apuesta que está en construcción; se articula con elementos de ayuda mutua y de propiedad colectiva, que incluyen el diseño participativo, el trabajo familiar y el ahorro colectivo. No se ciñe solamente a una fase constructiva ni debe confundirse con la autoconstrucción. Sugiere una forma colectiva y organizada de gestionar lo público, y con esto, construir nuevas formas políticas, económicas y sociales.

Relación con el estado: posibilidades y tensiones

Teniendo como marco el proceso político venezolano, la relación con la institucionalidad forma parte del campo de tensiones en el que se desarrolla la organización urbana y la apuesta por la construcción de otra ciudad; pero, al mismo tiempo, constituye una disputa permanente a la gestión única estatal. Por una parte, es innegable que distintas políticas y propuestas organizativas promovidas desde el gobierno han generado y permitido amplios espacios de movilización y participación, antes inexistentes.³ No obstante, estas mismas propuestas pueden llegar a institucionalizar y burocratizar la expresión popular. En la experiencia del movimiento de pobladores, el desafío ha sido pasar de la organización promovida desde el estado a la construcción de un movimiento social, con espacios de autonomía, de construcción y orientación colectiva y propia, donde la relación con el estado sea desde el diálogo entre sujetos políticos. Por ello, para las organizaciones urbanas, las ideas de autogestión, cogestión y cogobierno pasan a ser apuestas fundamentales para pensar cualquier transformación.

³ Que va desde la propuesta de organizaciones barriales, como Comités de Salud, Mesas Técnicas de Agua, Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, hasta la configuración de Consejos Comunales, en el marco de la propuesta de construcción de un estado comunal.

Durante estos años, el movimiento ha planteado diversas propuestas a las instituciones encargadas de elaborar políticas públicas, en materia urbana y de vivienda. Sin embargo, no ha sido posible construir instancias orgánicas y permanentes entre el movimiento y los sectores institucionales. Según Vargas (2012), esto “[...] ha generado en la mayoría de los casos políticas de origen popular que son asumidas nominalmente por el estado, para luego ser despojadas de su esencia política y progresivamente burocratizadas, dejándolas paralizadas o simplemente trasmutadas hacia políticas reformistas”

Asimismo, aun cuando han emergido distintas iniciativas de articulación entre los sectores del movimiento popular para impulsar políticas propias y ciertos sectores del gobierno que intentan construir un estado distinto al de la propuesta neoliberal, se evidencia, en algunos casos, el fortalecimiento de un estado paternalista y asistencialista. Por ejemplo, las políticas públicas actuales asociadas con la vivienda están enmarcadas en el impulso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuya meta es construir tres millones de viviendas en los próximos seis años (en muchos casos, estas construcciones se realizan con apoyo de empresas extranjeras, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación con China, Rusia, Bielorrusia e Irán, y también con empresas nacionales). Las viviendas son edificios de apartamentos unifamiliares estándares, cuya construcción debe estar en manos de empresas que manejan la tecnología y los medios para establecer un modelo de producción mercantil, y cuyo mantenimiento difícilmente podrá ser asumido por la gente que no participa ni en su diseño ni en su construcción. Sin intentar negar la importancia de solventar el problema de la vivienda, sobre todo para las familias damnificadas que viven en refugios, esta misión entra en tensión con la apuesta del movimiento popular urbano. En efecto, el movimiento plantea la construcción de nuevas comunidades socialistas, no desde la construcción de viviendas, sino desde la construcción de comunidad. Sus debates incluyen la discusión sobre la propiedad (apuestan por la propiedad familiar y colectiva) y plantean la ayuda mutua y la autogestión como elementos fundamentales de esta propuesta de transformación urbana.

Desde el movimiento popular, la construcción de viviendas va de la mano con el uso de los espacios ociosos o subutilizados de la ciudad; ello implica realizar diseños participativos, generar fondos para la autogestión (con recursos propios y préstamos del estado) y construir con el aporte del trabajo familiar. Desde esta lógica, el saber técnico se encuentra al servicio de la comunidad; las familias involucradas son los sujetos orientadores del proceso; la vivienda es un elemento cuya perspectiva es la configuración de comunidades participativas que impulsen

propuestas productivas en la ciudad.

Más allá de estas tensiones, se han logrado avances en el diálogo entre el movimiento popular y el gobierno. Producto de años de lucha y movilizaciones de calle, fue posible presentar propuestas de políticas públicas en materia urbana y se consiguió el apoyo gubernamental. Estas propuestas se convirtieron en leyes aprobadas (bien sea por la Asamblea Nacional o vía Habilitante), en políticas públicas impulsadas desde el estado o desde el mismo movimiento popular.

Tres son las líneas claves para impulsar las políticas populares en materia urbana:

1. Lucha contra el latifundio urbano y la especulación inmobiliaria. Democrati- zación de la ciudad.
2. Transformación de barrios y ciudad: poder popular, justicia territorial y reivin- dicación del hábitat popular.
3. Producción popular del hábitat: producción socialista de la ciudad. (Aportes al Programa de la Patria 2012).

Al mismo tiempo, en el 2011, se logró concretar, por vía Habilitante, una serie de leyes relacionadas con la temática: la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos; la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales. Por su parte, la asamblea nacional aprobó la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Estas tres leyes fueron debatidas, sistematizadas y propuestas desde el movi- miento popular urbano.

Imaginario desarrollista e imaginario popular urbano. Tensiones, contra- dicciones, ¿alternativas?

Más allá de los avances en el debate sobre lo urbano y los logros legislativos obtenidos desde el movimiento popular, Venezuela, como país dependiente de la renta petrolera, está profundamente anclada en prácticas desarrollistas y ex- tractivistas. Una de las reflexiones o preguntas que cabría analizar es cómo las organizaciones del campo popular urbano se inscriben, o no, en las posibilidades de construir nociones de buen vivir/vivir bien, o de construir alternativas al mode- lo capitalista en clave emancipatoria.

En Venezuela, el debate crítico sobre las prácticas extractivistas tiene poca fuerza. La ciudad está configurada y atravesada por amplias expresiones capi- talistas y desarrollistas: una separación radical con la naturaleza, con el campo;

altos niveles de consumo; falta de planificación; ausencia de espacios públicos; prácticas violentas, y altos niveles de exclusión social.

El campo popular urbano como espacio de lucha, resistencia y existencia, como parte fundante de la ciudad en su construcción cultural, aporta claves para lo que podría ser una alternativa cultural con propuestas de participación política y de afirmación de identidades populares, en contraposición con el imaginario desarrollista, que entremezcla discriminaciones en una mirada clasista, racista y patriarcal. No obstante, las organizaciones urbanas tienen serios desafíos al momento de aspirar la construcción de un horizonte transformador.

Existen tensiones entre campo y ciudad, y en la relación con la naturaleza. Más allá de los esfuerzos de articulación realizados con organizaciones campesinas, el espacio urbano venezolano se encuentra profundamente separado de los espacios campesinos y del ciclo productivo. Asimismo, es difícil transversalizar los debates en torno a la democratización de la ciudad, con una mirada crítica de la relación que tenemos con la naturaleza. Es un eje poco abordado, que no aparece con fuerza en el discurso ni en las políticas actuales del movimiento popular urbano. Sin embargo, en los aportes realizados al programa de gobierno aparece la necesidad de construir nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza:

[...] a través de cuestionar nuestro modo de vida en las comunidades urbanas para promover alternativas al modelo civilizatorio. Estos cuestionamientos deben ser a nuestros esquemas de consumo general de mercancías, nuestros medios de transporte, el uso indiscriminado de combustible, nuestra alimentación, el consumo de energía y de agua; todos estos son elementos que sustentan desde la ciudad el sistema capitalista (Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad, 2012).

Otra de las tensiones se refiere a la opresión sexual, la identificación del patriarcalizado o el reconocimiento de las relaciones de opresión entre hombres y mujeres, en el barrio y en la ciudad. Aunque las mujeres participan mayoritariamente en las bases, su jornada no se ha modificado y siguen asumiendo doble y triple jornada. Por otra parte, existe una fuerte violencia contra las mujeres y el mandato de la maternidad en las comunidades populares es algo que poco se problematiza, frente al derecho de las mujeres a decidir.

Asimismo, la creación de espacios de participación y de inclusión de los jóvenes urbanos populares constituye otro desafío. Las comunidades y barriadas están atravesadas por prácticas violentas, expresadas en algunos casos

por sectores juveniles, sobre todo masculinos, que han sido excluidos de los espacios materiales y simbólicos de la ciudad: excluidos de un sistema educativo que no reconoce sus necesidades y la situación en la que viven, y de un sistema laboral formal para el que no se encuentran calificados; altamente estigmatizados por su condición racial y de clase. En varios procesos de participación y organización barrial comunitaria, los jóvenes urbanos populares no se sienten reconocidos ni identificados, ya que desde los movimientos tampoco existen propuestas que logren incorporar la mirada juvenil. La articulación de las organizaciones urbanas con los sectores juveniles es clave para pensar una propuesta de transformación urbana.

Existe una fuerte contradicción entre el discurso crítico al capitalismo y los altos niveles de consumo: en general, la ciudad de Caracas consume gran parte de lo producido en el resto del país. Incluso, en las comunidades populares, el fetiche por las marcas, los teléfonos y las tecnologías de última generación tienen una presencia permanente. La ciudad venezolana se configura en un patrón de consumo infinito, que solo puede ser cubierto a costa de una economía fuertemente extractiva primario exportadora y una economía urbana informalizada, explotada y precarizada.

Finalmente, otro punto de tensiones se ubica entre la inclusión, la reivindicación y la emancipación. Las políticas propuestas y construidas desde el movimiento popular urbano contemplan ámbitos y planos vinculados con la inclusión, la reivindicación y, en algunos casos, también con la emancipación, que coexisten en muchos casos desde la complementariedad y, en otros, desde las contradicciones. Aunque se empujan con fuerza políticas autónomas, un sector de la cultura política refuerza la idea de un estado rico, paternalista, que debe responder a nuestras necesidades con solo pedirle. La necesidad, la reivindicación y la inclusión, por una parte, movilizan; pero, por otra, paralizan, desmovilizan y despolitizan. En algunos casos, la autonomía política de lucha es entendida desde la perspectiva de control al estado, para vigilar la distribución de la renta petrolera y no necesariamente como cuestionamiento y transformación de las estructuras. Este es un reto fundamental de las organizaciones urbanas que plantean la autonomía, la autogestión, el cogobierno y la cogestión, como modelos para la transformación.

Así, entre estas tensiones y contradicciones está presente el desafío de promover un proceso de cambio en los contextos urbanos, con espacios de discusión amplios, múltiples y diversos, donde se puedan encontrar distintas expresiones organizativas para debatir el tema de la ciudad, sus posibilidades y límites en la transformación, y construir articuladamente las alternativas.

Algunas ideas no concluyentes

Los procesos de inclusión que ha vivido la sociedad venezolana en estos años han generado un contexto de movilización popular; pero, asimismo, han consolidado una idea de inclusión, en cuanto a acceso al consumo, y de participación que, en muchos casos, se limita al ámbito local.

Sin embargo, para pensar la ruptura y el cambio de la ciudad capitalista, creemos necesario señalar que los pobladores y pobladoras urbanos participan en calidad de sujetos políticos. Ellos, desde sus luchas cotidianas, han construido una apuesta cultural alternativa en la que se cuestiona la relación con el estado, las formas de ejercicio político, el modo de producción capitalista, y donde, además, se conservan las relaciones de reciprocidad y solidaridad. La organización de este sujeto urbano ha posibilitado el mantenimiento y construcción de otra mirada, distinta a la suscrita en el imaginario hegemónico.

En este sentido, las políticas urbanas fraguadas desde el movimiento popular, cuestionan profundamente las miradas clientelares y vivendistas, y reivindican la necesidad de construir el hábitat y la comunidad; de no fragmentar, sino de conservar el espíritu de cooperación y autogestión que caracteriza a los sectores populares. Desde esa perspectiva, se rescata la transformación del barrio, no su eliminación ni su negación.

La necesaria construcción de comunidad implica la reconstrucción de la memoria histórica de los pobladores urbanos (donde la mayoría de los abuelos y abuelas venían de comunidades campesinas, se asentaron en los barrios y transmitieron estas prácticas y costumbres); también supone caracterizar las causas de la segregación y exclusión urbana, y potenciar las capacidades productivas que se anclan en los saberes populares. Construir comunidad sugiere un elemento central en las posibilidades de pensar una ciudad distinta.

El modelo autogestionario, al que se apuesta desde el campo popular urbano, desarrolla posibilidades de hacer en distintos niveles; entre ellas, fortalece las capacidades para la producción social del hábitat, desde los principios del apoyo mutuo y de la propiedad colectiva, que implica la organización de la fuerza de trabajo, la apropiación-reapropiación del conocimiento y de la tecnología, la administración de recursos financieros y la adquisición de medios de producción.

Las posibilidades de pensar en otra lógica más allá de la propiedad privada es otra de las apuestas en la construcción de nuevas comunidades, que fortalece lo común por encima de lo individual, promueve "la diversidad de formas de propiedad y tenencia social de la tierra y la vivienda, distintas a la forma tradicional de propiedad privada individual burguesa (propiedad social directa e indirecta, pro-

piedad colectiva, comunal, multifamiliar o familiar)” (Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad, 2012).

Todas estas propuestas se incluyen en un contexto político transformador. Se trata de transformar la ciudad desde el barrio, desde la ocupación, desde el sujeto oprimido y excluido, lo que implica no solo un cambio sustancial en la infraestructura física, sino en las relaciones sociales, a partir de las aspiraciones y luchas de los territorios y los sujetos, que desde sus resistencias apuntan a la posibilidad de un horizonte anticapitalista.

Referencias

Consejo Patriótico Sectorial de Vivienda, Hábitat y Ciudad (2012) "Aportes al Programa de la Patria".

Rodríguez, Juan Carlos (2008) "Derecho a la Ciudad, Hábitat y Vivienda en la Venezuela Bolivariana", ponencia presentada en el Foro Social Catalán, 25 de enero de 2008. Recuperado el 15 de octubre de 2012 de <http://www.radiochango.com/castellano/konciencia/ponencia-de-Juan-Carlos-Rodr%C3%ADguez-al-Forum-Soc.html>

Vargas, Hernán (2012) Entrevista no publicada.

(In)versiones de ciudad

María Mercedes Ferrero, Ayelén Gallego

La producción del espacio urbano se erige como cristalización histórica de las luchas por el poder y el acceso a los recursos. En él se materializan patrones de apropiación, habitabilidad, accesibilidad, exclusividad y fragmentación, como expresión de dichas tensiones y conflictividades.

Durante el año 2011 se dio en la ciudad de Córdoba un debate mediatizado sobre la legitimidad de las obras públicas del gobierno provincial, la (in)existencia de licitaciones, la corrupción y el modelo de ciudad. En dicho contexto, alcanzó estado parlamentario en el Concejo Deliberante un documento denominado Bases para el Plan Director 2020 (PD), como primera iniciativa para delinear una política de estado que anticipe y oriente el proceso de transformación de la ciudad, proyectándola como polo de desarrollo económico, social y cultural del centro del país para el año 2020. Esta establece como objetivo fundamental la institucionalización de la metropolización y la densificación de dicha ciudad, así como su (re)conversión en un espacio estratégico de productividad y rentabilidad.

El objetivo del presente trabajo es analizar las conceptualizaciones referidas a los modelos de ciudad que subyacen al PD, identificando el rol que asumen el estado y los grupos económicos en la planificación del desarrollo urbano. Las tensiones y contradicciones inherentes a los ejes de inclusión, acceso y habitabilidad sobre los que asienta el PD, adquieren visibilidad a partir del análisis del rol que se asigna en él a los sectores populares urbanos. Para dicho objetivo se utilizará la estrategia metodológica de análisis documental y de contenido sobre el instrumento normativo, su fundamentación y antecedentes.

Necesidades estratégicas y planificación urbana

El proceso de urbanización creciente de la ciudad de Córdoba se produjo durante la segunda mitad del siglo XX. El enorme incremento poblacional que experimentó la ciudad, como proceso paralelo de la industrialización, trajo aparejada una importante extensión de la mancha urbana, con baja densidad poblacional, quedando buena parte de tierras intermedias vacantes y otras tantas ocupadas por viviendas unifamiliares (Informe Catastro Municipal, 2008).

Los últimos dos decenios insinúan un nuevo período en el devenir de la estructura urbana, y la dinámica de urbanización ha experimentado un proceso marcado por dos tendencias particulares. Por un lado, la tasa de crecimiento poblacional se ha desacelerado significativamente; por otro lado, se han modificado los patrones de localización y modalidad de construcción de las actividades residenciales y comerciales: los grupos poblacionales de mayores ingresos tienden a preferir barrios cerrados para vivir, en las afueras de la ciudad, y grandes centros comerciales para consumo, que en su mayoría —a diferencia de lo sucedido en otras ciudades— se han establecido dentro del ejido urbano (Informe Catastro Municipal, 2008).

Esta tendencia, que sigue siendo aún hoy generalizada, se ha complejizado en los últimos años produciéndose un auge en la inversión pública y privada selectiva hacia adentro de la ciudad, potenciando algunos espacios urbanos, polos de consumo alternativos al centro tradicional, como opciones residencial-turísticas-comerciales. Al mismo tiempo, se ha llevado adelante el Plan Nuevos Barrios: Mi Casa, Mi Vida, que ha importado la relocalización de un conjunto poblacional enorme de bajos recursos a barriosciudad alejados del centro urbano. Dicho programa, además de las consecuencias que ha significado para el conjunto relocalizado y el rol que ha jugado en términos de organización del espacio y de la desigualdad social, ha supuesto una nueva extensión de la mancha urbana.

Resultado de todo lo anterior, la ciudad de Córdoba se presenta hoy como una compleja trama de urbanización que desafía cualquier división categórica simple de lo urbanorural, tanto como de lo central-periférico. Así, podemos identificar un complejo tablero donde, siguiendo los conceptos utilizados por Harvey (2004), la “riqueza segregada y protegida” se entremezcla con espacios, también cerrados y construidos a las afuera de la ciudad, para la pobreza. A su vez, en el espacio propio de la ciudad, los espacios urbanos que duelen (Harvey, 2004), “las periferias interiores” al entender del PD (2008: 37), se encuentran rodeadas y presionadas por la generación de espacios de consumo y opulencia.

En este complejo marco, el PD de la ciudad de Córdoba aparece como expresión de la búsqueda del estado municipal de asumir la iniciativa en la producción del espacio urbano. Este resurgir de lo público como gestor del espacio urbano se plantea como una oportunidad excepcional para analizar las relaciones que se establecen entre lo público y lo privado; pero también, y muy especialmente, para dar cuenta de los dispositivos y disposiciones sociales que configuran la particular relación estado-sociedad. Las políticas públicas son

el dispositivo privilegiado por el estado para intervenir, compensar o regular las desigualdades que surgen en la dinámica social del sistema capitalista (Ciuffolini, 2011).

Dada la dimensión y las complejidades de los espacios urbanos, por la importancia creciente de la economía de flujos y las redes (Castells en Susser, 2001; Lefebvre, 1974), el ordenamiento territorial y los mecanismos de gestión y regulación del uso del suelo adquieren un lugar central entre las funciones de gobierno. Sin embargo, “la planificación como negociación y la planificación como orientación estratégica sustituyen a la planificación como norma de una racionalidad preconcebida en la asignación de los usos del espacio y la determinación de las formas espaciales” (Castells en Susser, 2001: 476-477).

Así, podemos afirmar que los procesos de gestión del espacio son siempre políticos y responden a estrategias específicas (Oslender, 2002). La normativa tendiente a la planificación urbana actual no puede ser estudiada desde una óptica que la aísle de los análisis de la economía política y la reduzca a meras cartografías de ubicaciones y disposiciones urbanísticas, sino que, por el contrario, deben ser abordadas desde un enfoque que tome en consideración y análisis la concurrencia de elementos políticos, económicos, ideológicos y culturales, no como entidades abstractas, sino en tanto relaciones históricas de fuerza en la competencia por la apropiación y el uso de los recursos. Es desde esta perspectiva que se propone una posible comprensión del PD para la ciudad de Córdoba como parte constitutiva del conjunto de dispositivos que configuran y delimitan los espacios urbanos, así como el derecho de acceso a la vida urbana.

Desde el año 2003 a la actualidad, la provincia de Córdoba ha experimentado un sostenido impulso del modelo agroexportador, resultado directo del boom de la soja. El sector del agro-negocio se ha convertido en la actividad económica más dinámica de Córdoba y en una de las principales fuentes de acumulación. Este renovado impulso ha permeado la vida urbana de la ciudad, en tanto el enorme excedente de capital generado —que ha necesitado redireccionarse hacia nuevas fuentes de producción/acumulación— ha sido progresivamente absorbido por el sector inmobiliario. Las actividades productivas de ambos sectores de la economía se constituyen —desde entonces a la actualidad— en las principales dinamizadoras de la economía cordobesa.

En este sentido, la propuesta de rediseñar lo urbano parece ligarse a la existencia de una encrucijada en el modelo de acumulación actual. El rol planificador del estado municipal se proyecta, al menos en parte, tendiente a allanar las contradicciones existentes entre los distintos usos del suelo —resultado de la peculiar configuración que ha asumido el desarrollo de lo urbano— asumiendo

el papel de organizador de los intereses económicos y políticos, garantizando la convivencia de las fracciones de capital en cuestión y procurando demarcar los espacios de cada uno.

En este sentido, puede comprenderse que la principal tendencia a revertir en la ciudad actual (que aparece a poco de ahondar en el documento del PD) tenga que ver con limitar la extensión de la mancha urbana y potenciar la densificación. De esta manera, se vuelve necesario el accionar estatal para circunscribir y organizar las fronteras entre los distintos usos del suelo, sobre todo cuando la difusión que caracteriza a los límites entre el campo y la ciudad comienza a amenazar los intereses del sector más pujante de la economía provincial.

Proteger los grandes intereses corporativos en el uso del suelo rural y urbano se vuelve la condición indispensable para concretar el modelo de ciudad que desde el estado municipal se propone. Garantizar las condiciones de inversión sin extender la mancha urbana supone la refuncionalización general de los usos del suelo urbano, transformando el "consumo inadecuado" (PD, 2008: 5) del espacio, en espacios de mayor eficiencia, tendientes a garantizar la reproducción del modelo de acumulación en el corto y largo plazo y en toda la extensión del territorio provincial.

Tramas de lo urbano

La nueva y compleja configuración urbana ha venido acompañada por la limitación en el acceso a los recursos sociales para cada vez más importantes porciones de la población (Ciuffolini, 2011). La desigualdad y los conflictos conviven en el espacio de la ciudad, al tiempo que forman parte de las desigualdades sociales (González Ordovás, 1998). Así entendido, las "peleas por el lugar" (PD, 2008: 6) se convierten en el escenario privilegiado para observar el accionar de la estatalidad.

Los imperativos de inclusión social (PD, 2008: 8) se conjugan con la refuncionalización del estado y del mercado en un todo que pretende presentarse articulado y cohesionado. Desde la perspectiva del PD, la convivencia de las políticas tendientes a salvaguardar los intereses del capital inmobiliario con la búsqueda de asegurar la inclusión de todos a la vida urbana no solo es posible, sino deseada en tanto se presenta a aquellas como la vía para garantizar el derecho a la ciudad de todos. Los cómo de la inclusión parecen difuminarse allí donde se explicitan los perfiles de la actuación estatal.

Los instrumentos para llevar adelante los objetivos excluyen al ciudadano, habilitando además una herramienta de acción innovadora para viabilizar los programas (que se incorpora a las ya tradicionales acciones de tipo directo e indirecto del estado): se trata de las acciones mixtas, que articulan el orden público con el sector privado, a través de mecanismos de concertación (PD, 2008: 13).

Esta tendencia —que aparece en principio como opción ante situaciones singulares (PD, 2008: 13) y termina por extenderse, incluso, a la producción y comercialización de tierra urbana para distintos sectores sociales (PD, 2008: 29) —, se convierte en un determinante fundamental a la hora de concebir la ciudad a construir y, como se verá más adelante, respecto a quiénes pueden hacerlo.

El acceso a la tierra y a la vivienda está atado a los designios del estado y el capital inmobiliario. Los lugares y los modos del habitar pretenden ser definidos en una estrategia general de ordenación territorial, donde los objetivos son los de rentabilidad y eficiencia. Así, la ciudad pensada como un todo es arbitraria y técnicamente proyectada a partir de ejes, polígonos y nodos. Las posibilidades de hacer la ciudad por parte de quienes habitan en ella se reducen a la mera promesa de volverse beneficiarios de un conjunto de políticas que, aumentando la rentabilidad y la eficiencia en el uso de los recursos, tenderá a mejorar sus modos de vida.

(In)versión y exclusión

Analizar el lugar que ocupan los sectores populares en el PD nos permite visibilizar y poner en tensión aquellas contradicciones inherentes al instrumento normativo en lo que refiere al principio de inclusión y al derecho a la ciudad. Estos son presentados entre los fundamentos políticos y pilares rectores del mencionado plan en respuesta a la diversidad social y entendiendo por ellos “el usufructo equitativo del hábitat urbano en el marco de principios de sustentabilidad, igualdad de oportunidades y equidad social” (PD, 2008: 8).

Esta preocupación por la inclusión abre varios interrogantes respecto de quiénes serían su objeto, de qué manera y a qué ciudad se pretende y planifica incluirlos. Podríamos decir que el PD asume que la exclusión es una problemática que forma parte de la realidad urbana de la ciudad de Córdoba (de allí que se establezca aquel fundamento político). Y es partiendo de dicho diagnóstico que se vuelve necesario identificar a la población excluida sobre la que se

pretende "definir y poner en funcionamiento políticas, programas y proyectos urbanos de inclusión" (PD, 2008: 8).

Las formas discursivas, en las que se enuncia a dichos sectores en el documento del PD, aluden siempre a un factor de carencia o precariedad, a alguna característica ausente vinculada la mayor parte de las veces con la cualidad de ser propietario de recursos económicos, principalmente de la tierra y la vivienda urbana. Encontramos una sucesión de expresiones tales como: "masa crítica de marginalidad social y territorial" (PD, 2008: 5), "población de muy bajos recursos económicos" o "población carenciada" (PD, 2008: 57, 60, 67, 68), "asentamientos marginales/precarios/irregulares" (PD, 2008: 59, 61, 75, 95).

Se elabora así un discurso que construye a los habitantes de los asentamientos como marginales en un sentido netamente urbanístico, donde el criterio de definición de su marginalidad pasa por la ubicación y la calidad del hábitat que ocupan: zonas no incorporadas al sistema de servicios urbanos, viviendas improvisadas y terrenos ocupados ilegalmente (Gutiérrez, 2007: 28).

El reduccionismo de dicha perspectiva de la marginalidad presenta a los sectores excluidos como meros habitantes, despojándolos no solo de su potencia política, sino también de la gran variedad de cualidades y derechos propios de su condición de ciudadanos. Más aún, el discurso del desarrollo y la refuncionalización urbana los transforma en nohabitantes, colectivos humanos segregados de la regularidad urbana, de la situación de dominio legal y de todas aquellas pautas propias de lo que pretende instituirse como la normalidad urbana.

Mientras se establecen por un lado las acciones mixtas y la concertación públicoprivada (esto es la coordinación y acción conjunta entre los sectores de poder económico y el estado en la planificación de la ciudad deseada, la afirmación clara por parte del estado de que las empresas dirigen el pulso de la obra pública y las políticas urbanas) como una de las herramientas básicas del PD, se construye discursivamente un sector excluido, estático e impotente, mero objeto de políticas públicas de inclusión, incapaz de pensar, construir, decidir y planificar la ciudad.

En este sentido es que los sectores populares están y no están en el PD urbano. Cuando aparecen, lo hacen como un elemento más sobre el que interviene la planificación, meros espectadores incompetentes e inhabilitados para la concreción de transformaciones urbanas. No existen como ciudadanos ni mucho menos como sujetos políticos. Más aún, avanzando en el abordaje analítico, en términos generales los sectores populares están ausentes del PD en un sentido directa e irreductiblemente material. El instrumento normativo los ausenta de la ciudad, los desaparece (Job y Ferrero, 2011: 13) considerando

solo el espacio que dejan vacío, las zonas vacantes.

El PD define dos tipos de espacios de intervención estratégica. Los nodos son aquellos que “concentran una importante dinámica de flujos urbanos” que se pretende potenciar. Como polígonos se define a aquellos lugares donde es necesario “equilibrar el crecimiento urbano mediante relleno de espacios vacíos o inconexos, en su caso promover la densificación, solucionar problemas de integración social y espacial, revitalización de entornos barriales degradados, regularización de dominios” (PD, 2008: 13).

Los lugares identificados como polígonos se describen a partir de la condición común de “falta de integración con la trama urbana”. Se pretende que el estado municipal asuma un rol proactivo promoviendo en ellos iniciativas que funcionen como “atractores y/o disparadores de cambios en sectores deprimidos” (PD, 2008: 39). Lo que el documento omite mencionar sobre los polígonos es que todos ellos (veintitrés en total) coinciden, o mejor se circunscriben, a espacios de la ciudad actualmente ocupados por barrios populares o villas de emergencia.

La intervención estratégica del PD para definir la ciudad que se quiere para el 2020 se basa, entre los elementos mencionados anteriormente, en una redefinición y transformación profunda del espacio que ocupan los sectores populares en la ciudad. Cuando se hace referencia a “espacios vacíos” o “áreas vacantes” (PD, 2008: 13, 61) está actuando una operatoria ideológica que convierte a todo lo que no está puesto directamente bajo la órbita del capital y al servicio de la rentabilidad económica en espacio improductivo, ocioso, desocupado, libre y disponible para la acción del capital.

La refuncionalización de la ciudad y su reconversión productiva necesariamente tiene que transformar los sitios de los sectores populares, esos que en los términos de un modelo de desarrollo urbano, supeditado a las pautas y niveles de rentabilidad de los sectores del poder, aparecen como zonas deprimidas y sectores degradados. Los sectores populares no existen ante la necesidad de materializar cambios en sus espacios para la integración al circuito productivo y la apertura de nuevos mercados. El territorio por ellos construido sobre el espacio urbano, la historia arraigada en y sobre ese territorio, las relaciones sociales que lo entretajan, son reducidos, lisa y llanamente, a “espacios vacantes” (con la consecuente urgencia en la intervención públicoprivada sobre él, que dicha definición trae aparejada).

Ahora bien, según el PD, para cada polígono deberán establecerse estrategias y políticas particularizadas acordes a la complejidad de la problemática a abordar. Por ello es que, a pesar de que se menciona repetidas veces la exis-

tencia de asentamientos irregulares y el déficit de viviendas, no hay en el PD un desarrollo de propuestas concretas de intervención en cada polígono, sino que se enuncia con vaguedad “promover urbanizaciones de interés social”; “solución a la problemática de los asentamientos marginales”. En última instancia, el proyecto de intervención sobre cada polígono en particular dependerá de la puja de intereses presente en cada espacio, y será materializada por la estrategia de concertación públicoprivada.

Si los territorios de los sectores populares se constituyen como espacios de intervención estratégica para el PD, al mismo tiempo que se despoja a estos de su carácter de sujetos políticos, con capacidad de transformar y construir la realidad urbana, cabe preguntarnos ¿cuál es el lugar real que le queda al fundamento político del “derecho a la ciudad de todos los habitantes”?

Tener derecho a la ciudad refiere, en la iniciativa gubernamental, ante todo a un derecho que pertenece a todos los habitantes como cada uno, es decir, un derecho del que cada quien es titular y puede realizar solo en su individualidad. Desde esta perspectiva, el derecho a la ciudad es una imprecisión que oculta la vulneración de derechos reales de grandes colectivos poblacionales, y por ende, la desigualdad reinante en los procesos de urbanización. Mientras las organizaciones sociales y hasta los sectores académicos locales avanzan lentamente en la conceptualización y disputa del sentido de este derecho, el estado municipal se apropia de su enunciación como condición de posibilidad para el desarrollo de la ciudad como polo productivo, cuando en realidad ese derecho queda supeditado a las necesidades del desarrollo productivo.

La enunciación “usufructo equitativo del hábitat urbano” define una abstracción que no toma en consideración que la condición primera de habitabilidad de la ciudad está dada por el derecho a la tierra, al acceso al espacio urbano y a la vivienda, en base a ellos empieza a dirimirse el derecho a estar en la ciudad, a existir en ella. En la iniciativa gubernamental opera la mercantilización de dichos derechos básicos, en tanto quedan sujetos a los patrones espaciales de la creación de nuevos mercados, de la modificación del espacio urbano en función de las necesidades de circulación de las mercancías.

Sin embargo, el derecho a la ciudad no culmina en el acceso individual y mercantilizado a la tierra y a la vivienda. Definirlo solamente por dichos elementos es una reducción que se orienta en el sentido de la despolitización de los problemas urbanos. El PD introduce las problemáticas de tierra y vivienda como aspectos técnicos, a los cuales pueden oponerse soluciones técnicas, neutrales, incuestionables. La refuncionalización productiva de la ciudad requiere incorporar a los sectores populares a la regularidad urbana, incluso in-

corporarlos al mercado inmobiliario y fomentar la “cultura tributaria” (PD, 2008: 29). Pero esa necesidad no solo no puede garantizar el derecho a la ciudad, sino que vuelve apropiable, de modo netamente individual y técnico, un derecho que debería tener un profundo carácter colectivo y político.

La ciudad se erige como una temporalidad compartida y un espacio de construcción y creación conjunta, que al mismo tiempo contiene y es configurada por las relaciones y lazos sociales que en ella se (re)producen. Hablar de la ciudad desde una mirada que privilegia la dignidad de las personas y colectivos humanos, significa considerar todos los recursos sociales y comunitarios propios del espacio urbano: la ciudad es trabajo, es salud, es vivienda, es educación, es encuentro y es participación social y política. En este sentido es que Harvey (2004) nos dice: “el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización”.

Conclusiones

La ciudad de Córdoba se presenta hoy como una compleja trama de urbanización que desafía cualquier división categórica simple de lo urbanorural, tanto como de lo centralperiférico. En este complejo marco, el Plan Director de la ciudad de Córdoba aparece como expresión de la búsqueda del estado municipal de asumir la iniciativa en la producción del espacio urbano.

La propuesta de rediseñar lo urbano parece ligarse a la existencia de una encrucijada en el modelo de acumulación actual. El rol planificador del estado se proyecta tendiente a allanar las contradicciones existentes entre los distintos usos del suelo, asumiendo el papel de organizador de los intereses económicos y políticos, garantizando la convivencia de las fracciones de capital en cuestión y procurando demarcar los espacios de cada uno.

En este contexto, los sectores populares son enunciados en el instrumento de planificación desde una perspectiva de la marginalidad, que los reduce a meros habitantes, despojándolos no solo de su potencia política, sino también de la gran variedad de cualidades y derechos propios de su condición de ciudadanos. La intervención estratégica de la concertación pública-privada para definir la ciudad que se quiere para el 2020 se basa en una redefinición y transformación profunda del espacio que ocupan los sectores populares en

la ciudad. Cuando se hace referencia a “espacios vacíos” o “áreas vacantes” (PD: 13, 61) está actuando una operatoria ideológica que convierte a todo lo que no está puesto directamente bajo la órbita del capital y al servicio de la rentabilidad económica en espacio improductivo, ocioso, desocupado, libre y disponible para la acción del capital.

Así, el reiterado objetivo de la inclusión se transforma en una abstracción que no toma en consideración que la condición primera de habitabilidad de la ciudad está dada por el derecho a la tierra, el acceso al espacio urbano y a la vivienda; en base a ellos empieza a dirimirse el derecho a estar en la ciudad, a existir en ella. En la iniciativa gubernamental opera la mercantilización de dichos derechos básicos, en tanto quedan sujetos a los patrones espaciales de la creación de nuevos mercados, de la modificación del espacio urbano en función de las necesidades de circulación de las mercancías.

El PD diluye la potencia del derecho a la ciudad, en tanto vuelve apropiable de modo netamente individual y técnico un derecho que debería tener un profundo carácter colectivo y político. Desde otra perspectiva, este derecho aparece como capacidad política de decidir y de hacer, de pensar y transformar el espacio urbano y la ciudad que se quiere.

Referencias

Avalle, Gerardo (2008) "Conflictos localizados. Anclajes territoriales de las luchas piqueteras en Córdoba". En: Ciuffolini, M. (comp.) En el llano todo quema: movimientos y luchas sociales urbanas y campesinas en la Córdoba de hoy. Córdoba, EDUCC.

Ciuffolini, María A. (2011) "El derecho a la y en la ciudad: Un estudio sociopolítico sobre el Programa "Mi casa, Mi vida" en la ciudad de Córdoba". En: Debates Latinoamericanos, año 9, n.º16, Buenos Aires. Recuperado el 16 de setiembre de 2013 de: <www.rlcu.org.ar/revista/articulos.asp?numero=09-16-Abril-2011>.

Documento oficial La ciudad de 1984 y la ciudad de 2008. Recuperado el 16 de setiembre de 2013 de: <<http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/docs/catastro/la%20ciudad%20de%201984%20y%202008c.pdf>>.

Documento oficial (2008) Bases para el PD de la Ciudad de Córdoba. Recuperado el 16 de setiembre de 2013 de: <http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/docs/desarrollo_urbano/BASES%20PLAN%20DIRECTOR%20CBA%202020.pdf>

Foucault, Michel (1992) *Microfísica del poder* (3.ª ed.). Madrid, Las Ediciones de la Piqueta.

Gutiérrez, Alicia (2007) *Pobre´, como siempre... Estrategias de reproducción social en la pobreza*. Córdoba, Ferreyra Editor.

González Ordovás, María J. (1998) La cuestión urbana: algunas perspectivas críticas. Recuperado el 16 de setiembre de 2013 de: <http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/uami/nivon/GONZALEZ_ORDOVAS_la_cuestion_urbana.pdf>.

Harvey, David (2000) "Mundos urbanos posibles". En: Ramos, A. Martín (2004). *Lo urbano en 20 autores contemporáneos*. Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.

____ (2004b). "El derecho a la ciudad". Recuperado el 16 de setiembre de 2013 de: http://www.fadu.uba.ar/mail/difusion_extension/090522_bol.pdf.

Job, Sergio y Ferrero, Mercedes (2011) "Los colores que nos faltan", ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano sobre Seguridad, Código de Faltas y Derechos Humanos, Córdoba, 11 al 13 de mayo de 2011. Recuperado el 16 de setiembre de 2013 de: <www.llanocba.com.ar>.

Lefebvre, Henri (1974). *La producción social del espacio*. Recuperado el 17 de junio de 2011 de: <<http://www.raco.cat/index.php/papers/article/view/52729/60536>>.

____ (1976). *El derecho a la ciudad*. Barcelona, Península. (Ed. it. *Le droit à la ville*, París, Anthropos, 1968).

Núñez, Ana y Ciuffolini, María A. (2011) *Política y territorialidad en tres ciudades argentinas*. Buenos Aires, El colectivo.

Oslender, Ulrich (2002) "Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una espacialidad de resistencia". En *Scripta Nova*, n.º 115. Recuperado el 16 de setiembre de 2013 de: <<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-115.htm>>

Scarponetti, Patricia y Ciuffolini, María A. (2010) *Ojos que no ven, corazón que no siente*. Buenos Aires, Nobuko.

Susser, Ida (2001) *La sociología urbana de Manuel Castells*. Madrid, Alianza Editorial.



debates en la coyuntura

contrapunto

**VEN
PRARIA!**



Una nueva clase trabajadora¹

Marilena Chaufí

Sorpresas

Quien haya conocido en los años cincuenta y sesenta las terribles condiciones de vida y de trabajo de las clases populares brasileñas y haya tenido la oportunidad de viajar por algunas temporadas a Europa, se habrá llevado una doble sorpresa:

Primera sorpresa: habrá visto obreros conduciendo pequeños autos (en Francia, el famoso dos caballos de Renault; en Inglaterra, el Oxford de Morris; en Italia, el Cinquecento de Fiat), de vacaciones con su familia, generalmente en alguna playa, de compras en tiendas populares (Prixunic en Francia o Woolworths y C&A en Inglaterra), mandando a sus hijos a guarderías, escuelas y liceos públicos, a escuelas técnicas e, incluso, a universidades. También habrá visto que los trabajadores y sus familias tenían acceso a hospitales públicos y a medicamentos gratuitos y, evidentemente, tenían su propia casa. Era la Europa del período fordista del capitalismo industrial, en la que la línea de montaje y fabricación en serie de productos de bajo costo permitía el consumo masivo. Pero era, sobre todo, la Europa de la economía keynesiana, cuando las luchas anteriores de trabajadores organizados habían llevado a la elección de gobernantes de centro o de izquierda y al surgimiento del estado de bienestar social, en el cual una parte considerable de los fondos públicos era destinada, en forma de salarios indirectos, a los derechos sociales reivindicados y conquistados gracias a la lucha de los trabajadores.

Segunda sorpresa: habrá constatado una diferencia profunda entre, por ejemplo, la situación de los trabajadores suecos (desde los salarios y derechos sociales hasta los derechos culturales) y la de los trabajadores españoles, portugueses y griegos que, incluso, fueron sometidos a dictaduras fascistas y forzados a emigrar a otros países de Europa en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. Sin embargo, a nadie se le habrá ocurrido afirmar que estos trabajadores ascendieron a la categoría de clase media; curiosamente, es exactamente eso lo que se afirma de los trabajadores brasileños, luego de diez años de políticas contrarias al neoliberalismo.

¹ Este artículo fue publicado en Carta Maior, 7 de julio de 2013.

La catástrofe neoliberal

Frente a esta clase trabajadora, a mediados de los años setenta, cuando el déficit fiscal del estado, sumado al estancamiento económico y a la inflación, provocó una crisis en el capitalismo, no fue por casualidad que los ideólogos conservadores ofrecieron una supuesta explicación: la crisis —dijeron— fue causada por el poder excesivo de los sindicatos y de los movimientos obreros que presionaron por aumentos salariales y exigieron el incremento del gasto social del estado. De esta manera, habrían destruido los niveles de lucro requeridos por las empresas, desencadenando procesos inflacionarios incontrolables y provocando un aumento colosal de la deuda pública. Hecho el diagnóstico, también ofrecieron un remedio: un estado fuerte para quebrantar el poder de los sindicatos y de los movimientos populares, para controlar el dinero de las arcas públicas y cortar drásticamente los gastos sociales y las inversiones económicas. La meta principal sería la estabilidad monetaria, por medio de la contención de los gastos sociales y del aumento de la tasa de desempleo, para formar un ejército industrial de reserva que pusiera fin al poderío de las organizaciones laborales. Se trataba, entonces, de crear un estado capaz de elaborar una reforma fiscal para incentivar las inversiones privadas, reduciendo los impuestos sobre el capital y las fortunas y aumentándolos sobre la renta individual y, en esta línea, sobre el trabajo, el consumo y el comercio. Finalmente, un estado que se alejara de la regulación de la economía, privatizando las empresas públicas y dejando en manos del propio mercado la desregulación o, para ser más exactos, que implementara el fin de las inversiones estatales en la producción y el control sobre el flujo financiero, y que instaurara una drástica legislación antihuelga y un amplio programa de privatización. Pinochet en Chile, Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos fueron la punta de lanza de dicho programa.

Con la reducción del espacio público de los derechos y la ampliación del espacio privado de los intereses del mercado, nacía el neoliberalismo, cuyas características principales pueden resumirse de la siguiente manera:

1. La desactivación del modelo industrial de tipo fordista, basado en el planeamiento, la funcionalidad y en el largo plazo del trabajo industrial; en la centralización y la verticalidad de las plantas industriales; en las grandes líneas de montaje concentradas en un único espacio; en la formación de grandes stocks orientados por las ideas de calidad y durabilidad de los productos, y en una política salarial articulada al estado (el salario directo articulado al salario indirecto, esto es, a los beneficios sociales asegurados por el estado).

En contrapartida, en el modelo neoliberal, la producción opera por fragmentación y dispersión de todas las esferas y etapas del trabajo productivo, con la compraventa de servicios en todo el mundo, o sea, con la tercerización y la precarización del trabajo. Se desarticulan las formas consolidadas de negociación salarial y desaparecen las referencias que permitían a la clase trabajadora reconocerse como clase social y luchar como tal; esto la lleva a debilitarse, puesto que se disgrega en pequeñas unidades tercerizadas —de prestación de servicios, en el trabajo precarizado y en la informalidad— diseminadas por el planeta. Surge una nueva clase trabajadora, cuya composición y definición aún están lejos de comprenderse.

2. El desempleo se vuelve estructural; abandona su forma accidental o de expresión de una crisis coyuntural, ya que la forma contemporánea del capitalismo, contrariamente a su forma clásica, no opera por inclusión de toda la sociedad en el mercado de trabajo y de consumo, sino por exclusión. En consecuencia, los sindicatos, las organizaciones y movimientos populares pierden poder y aumenta la pobreza extrema.
3. El poder de decisión pasa del capital industrial al capital financiero, el cual se vuelve la médula y el centro nervioso del capitalismo. Esto multiplica la desvalorización del trabajo productivo y privilegia a la más abstracta y fetichizada de las mercaderías: el dinero, ya no como mercadería equivalente a todas las demás, sino como moneda o expresión monetaria de la relación entre acreedores y deudores, permitiendo el pasaje de la economía al monetarismo. Dicha abstracción transforma la economía en el movimiento fantasmagórico de las bolsas de valores, de los bancos y de las financieras, ya que no opera por medio de la materialidad productiva, sino mediante signos, señales e imágenes del movimiento vertiginoso de las monedas.
4. En el estado de bienestar social, la presencia de fondos públicos bajo la forma de salarios indirectos —derechos económicos y sociales— desató el lazo que unía el capital a la fuerza de trabajo —o al salario directo—. Tradicionalmente, ese lazo era el que obligaba a la innovación técnica por el trabajo, a reaccionar por el aumento real del salario; desatarlo trajo aparejadas tres consecuencias: a) el impulso a la innovación tecnológica se volvió prácticamente ilimitado, provocando una expansión de las inversiones y un enorme aumento de las fuerzas productivas de gran liquidez, pero de ganancias insuficientes para poder concretar todas las posibilidades tecnológicas, lo que exigió un financiamiento estatal; b) el desempleo pasó a ser estructural, no solamente por la introducción ilimitada de tecnologías de automatización, sino por la velocidad de la rotatividad de la mano de obra, la cual se vuelve descalificada

- y obsoleta debido a la rapidez de los cambios tecnológicos. Esto fragmenta aún más la clase trabajadora y disminuye el poder de sus organizaciones; c) el aumento del sector de servicios también se volvió estructural, dejó de ser un complemento de la producción, ya que, bajo la designación de tecnociencia, la ciencia y la tecnología se transformaron en fuerzas productivas, esto es, abandonaron su condición de mero soporte del capital para convertirse en agentes de su acumulación; con esto, cambió el modo de inserción social del conocimiento científico y técnico: los científicos y los técnicos se transformaron en agentes económicos directos. La fuerza y el poder capitalistas se encuentran ahora en el monopolio de los conocimientos y de la información.
5. La transnacionalización de la economía reduce la importancia de la figura del estado nacional como enclave territorial para el capital y prescinde de las formas clásicas del imperialismocolonialismo políticomilitar y geopolítico de áreas de influencia, de suerte que el centro económico, jurídico y político planetario se encuentra en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial, los cuales operan bajo un único dogma: estabilidad monetaria y recorte del déficit público.
 6. La distinción entre países del primer y del tercer mundo tiende a aumentar, debido a la enorme brecha entre la inmensa riqueza y la pobreza extrema, esto es: la polarización de clases surge como polarización entre la opulencia absoluta y la indigencia absoluta.

El cambio en camino

En política, existen acciones y acontecimientos con fuerza suficiente como para volverse simbólicos. Podemos contraponer dos momentos que marcaron la política brasileña entre 1990 y 2002. El primero nos transporta a la torta de casamiento que inauguró la era Collor; el segundo, a la simple pregunta formulada por el flamante presidente de la república a los periodistas de un informativo de la Rede Globo, en la noche del 28 de octubre de 2002.

Al final de la campaña presidencial de 1989 y hasta la asunción del nuevo mandatario, entre noviembre de 1989 y enero de 1990, un nuevo acontecimiento marcó la política brasileña: emergió en primer plano, tanto en los discursos como en los debates y en las acciones, la figura de la economista Zélia Cardoso de Mello y de su equipo técnico. Dicho grupo, que se reunía en un edificio de Brasilia apodado torta de casamiento, tomaba las decisiones fundamentales y las medidas económicas que definieron el gobierno de Fernando Collor de

Mello, en el cual el discurso político fue suplantado por el técnicoeconómico. Con él surgía una nueva y poderosa figura: el mercado, cuya fantasmagoría solo entraría en pleno funcionamiento en el período 1994-2002, cuando la población brasileña comenzó a oír curiosas expresiones como «los mercados están nerviosos», «los mercados están agitados», «los mercados se calmaron», «los mercados no lo aprobaron», como si los mercados fueran gente.

En la noche del 28 de octubre de 2002, casi al final del informativo nacional de la Rede Globo, cuando los periodistas hablaban de la cotización de las bolsas de valores, del dólar y del real, de la agitación y de la calma de los mercados, el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, que estaba siendo entrevistado, preguntó con una leve sonrisa irónica: «¿No tienen otros temas para tocar?, ¿qué pasa con el hambre, el desempleo, la miseria, la desigualdad social?». Esa simple interrogante, unida al pronunciamiento hecho unas horas antes que anunciaba la creación de la Secretaría de Emergencia Social, cuya prioridad era la lucha contra el hambre, delimitó simbólicamente el nuevo campo de la política brasileña: los derechos civiles, económicos y sociales son prioritarios y dirigen las acciones técnicoeconómicas, pues la democracia es la única forma política en cuyo centro se encuentra la idea de derechos, tanto de su creación, por parte de la sociedad, como de su garantía y conservación por parte del estado.

La torta de casamiento simbolizó el ingreso del país al modelo neoliberal. El pronunciamiento y la interrogante del nuevo presidente de la república simbolizaron la decisión de abandonar dicho modelo. Entre esos dos momentos, están los dos períodos de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que volvieron hegemónico el modelo neoliberal con la llamada reforma y modernización del estado, esto es, con la adopción del neoliberalismo como principio definidor de la acción estatal (privatización de los derechos sociales, convertidos ahora en servicios vendidos y comprados en el mercado, privatización de las empresas públicas, direccionamiento de los fondos públicos hacia el capital financiero, etcétera). Para legitimar tal decisión política se activaron las dos grandes ideologías contemporáneas: la competencia y la racionalidad del mercado.

La ideología de la competencia afirma que quienes poseen determinados conocimientos tienen el derecho natural de mandar y comandar a quienes, supuestamente, son ignorantes. De esta manera, la división de clases se manifiesta como una división entre los dirigentes competentes y los que solamente ejecutan órdenes. Esta ideología, que privilegia la figura del técnico competente, tiene la particularidad de olvidar la propia esencia de la democracia, a saber, que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder

a toda la información que les permita tomar decisiones políticas, puesto que todos son políticamente competentes para opinar y deliberar, y que se debe recurrir a los técnicos solamente después de haberse tomado las decisiones políticas. La función de los técnicos no es deliberar ni decidir, sino implementar, de la mejor manera posible, las decisiones políticas tomadas por los ciudadanos y por sus representantes. A su vez, para la ideología neoliberal, el espacio público debe ser reducido al mínimo, mientras que el espacio privado de los intereses del mercado se debe ampliar, ya que se considera al mercado portador de racionalidad para el funcionamiento de la sociedad. Dicha ideología se consolidó en Brasil mediante el discurso de la modernización, para el cual modernidad abarcaba apenas tres conceptos: minimización del estado (léase: reducción del gasto público para derechos sociales), importación de tecnologías de punta y gestión de los intereses de las finanzas nacionales e internacionales.

El neoliberalismo se propagó por la vida cotidiana brasileña. Bastaba con observar lo que sucedía en los informativos y otros medios de comunicación. Las cotizaciones de las bolsas de valores y de las monedas de todo el mundo, el comportamiento del FMI, del Banco Mundial y de los bancos privados ocupaban las primeras páginas de los periódicos y eran las noticias destacadas en los informativos de la radio y la televisión; algunos canales, incluso, llegaban a mantener en la pantalla los gráficos con la variación de las cotizaciones de bolsas y monedas, minuto a minuto. El alza o la baja del valor del dólar, del euro y del real, el riesgo país brasileño, los discursos de los dirigentes del FMI, del Banco Central estadounidense, de los economistas ingleses, franceses y alemanes, eran titulares de todos los medios y en los informativos matutinos, la transmisión cotidiana de la apertura de la bolsa de valores en Wall Street pasó a ser una especie de oración o misa, compitiendo con otros programas transmitidos, a la misma hora, en radios y canales religiosos.

Con todo, el neoliberalismo no significa, para nada, la creencia en la racionalidad del mercado y la minimización del estado, sino la decisión de cortar los fondos públicos del polo de financiamiento de los bienes y servicios públicos —a saber, de los derechos sociales— y maximizar el uso de la riqueza pública en las inversiones exigidas por el capital. La comprensión de esta verdad se expresó en la decisión de los electores de hacer valer la reivindicación por una nueva forma de gestión del fondo público, en la cual la brújula fuera la defensa de los derechos sociales.

Una nueva clase trabajadora brasileña

Investigaciones, estudios y análisis, demuestran que hubo un cambio profundo en la composición de la sociedad brasileña. Esto se debió a los programas gubernamentales de transferencia de renta, inclusión social y erradicación de la pobreza; a la política económica de garantía de empleo y al aumento del salario mínimo, así como a la recuperación de parte de los derechos sociales de las clases populares, principalmente alimentación, salud, educación y vivienda; a la articulación entre esos programas y el principio de desarrollo sostenible y a los primeros pasos de una reforma agraria para que la población rural no se viera obligada a emigrar a los centros urbanos.

A grandes rasgos, de acuerdo a la clasificación de los institutos de investigación de mercado y de sociología, se suele organizar a la sociedad en una pirámide fragmentada en clases (A, B, C, D y E), tomando como criterios para dicha fragmentación la renta, la propiedad de bienes inmuebles y muebles, el grado de escolarización, ocupación o profesión. Conforme a estos indicadores, se concluyó que, entre 2003 y 2011, las clases D y E disminuyeron de forma considerable, pasando de 96,2 millones de personas a 63,5 millones. En la cima de la pirámide se registró un crecimiento de las clases A y B, que pasaron de 13,3 millones de personas a 22,5 millones. No obstante, la expansión más espectacular se dio en la clase C, que pasó de 65,8 millones de personas a 105,4 millones. Dicho aumento dio lugar a la afirmación de que creció la clase media brasileña o, mejor dicho, de que una nueva clase media surgió en el Brasil. Sin embargo, sabemos que hay otra manera de analizar la división social de clases, a partir de la forma de la propiedad.

En el modo de producción capitalista, la clase dominante es propietaria privada de los medios sociales de producción (capital productivo y capital financiero); la clase trabajadora, excluida de dichos medios de producción pero incluida como fuerza productiva, es propietaria de la fuerza de trabajo, vendida y comprada bajo la forma salarial. Marx llamaba «pequeña burguesía» a la clase social que no se situaba en ninguno de los dos polos de la división social del modo de producción capitalista. La elección de tal denominación tenía dos motivos principales: en primer lugar, para alejarse de la noción inglesa de middle class, que designaba, justamente, a la burguesía, situada entre la nobleza y la masa trabajadora; en segundo lugar, para indicar, por un lado, su proximidad social e ideológica con la burguesía y no con los trabajadores y, por otro, señalar que, aunque no fuera propietaria privada de los medios sociales de producción, podría ser propietaria privada de bienes muebles e inmuebles. En una palabra, se

encontraba fuera del núcleo central del capitalismo: no era detentora del capital ni de los medios sociales de producción ni era la fuerza de trabajo que produce capital; se situaba dentro de las llamadas profesiones liberales, en la burocracia estatal —en los servicios públicos— y en la empresarial —de administración y gerencia—, en pequeñas propiedades rurales o en comercios de pequeño porte.

Fue la sociología, sobre todo la de inspiración estadounidense, que introdujo la noción de clase media para designar a dicho sector socioeconómico, empleando, como mencionamos, los criterios de renta, escolarización, profesión y consumo, la pirámide de las clases A, B, C, D y E, y la célebre idea de movilidad social para designar el pasaje de un individuo de una clase a otra. Si abandonamos la descripción sociológica, si nos quedamos con la constitución de las clases sociales dentro del modo de producción capitalista (incluso adoptando la expresión clase media), si tenemos en cuenta las investigaciones que mencionamos al comienzo de este texto y las cifras que representan, en cuanto a la disminución y al aumento del contingente en las tres clases sociales, podremos llegar a algunas conclusiones:

1. Los proyectos y programas de transferencia de renta y garantía de derechos sociales (educación, salud, vivienda, alimentación) y económicos (aumento del salario mínimo, políticas de garantía de empleo, salariodeseempleo, reforma agraria, cooperativas de economía solidaria, etcétera) indican que lo que creció en el Brasil fue la clase trabajadora, cuya composición es compleja, heterogénea y no se limita a los operarios industriales y agrícolas.
2. El criterio de los servicios como definidor de la clase media no se mantiene en la forma actual del capitalismo, debido a que la ciencia y la técnica —la llamada tecnociencia— se volvieron fuerzas productivas, y los servicios que realizan, o dependen de ellas, están directamente vinculados a la acumulación y a la reproducción del capital. En otras palabras, el crecimiento de asalariados en el sector de servicios no es crecimiento de la clase media y sí de una nueva clase trabajadora heterogénea, definida por las diferencias de escolarización y por las habilidades y competencias determinadas por la tecnociencia. De hecho, en el capitalismo industrial, las ciencias —algunas incluso financiadas por el capital— se desarrollaban, en su mayoría, por medio de investigaciones autónomas, cuyos resultados podrían conducir a tecnologías aplicadas por el capital en la producción económica. Esto significaba que los científicos y los técnicos pertenecían a la clase media. Hoy en día, no obstante, las ciencias y las técnicas se volvieron parte esencial de las fuerzas productivas y, por este motivo, los científicos y los técnicos pasaron de la

clase media a la clase trabajadora como productores de bienes y servicios, vinculados a la relación entre el capital y la tecnociencia. De esta manera, renta, propiedad y escolarización no son criterios para distinguir entre los miembros de la clase trabajadora y los de la clase media.

3. El criterio de profesión liberal también ha sido problemático en la definición de la clase media. La nueva forma de capital llevó a la formación de empresas de salud, estudios de abogacía, centros educativos, de comunicación, alimentación, etcétera, y sus componentes se dividen entre propietarios privados y asalariados, y estos últimos deben ser incluidos (aunque no les guste y afirmen lo contrario) en la categoría de clase trabajadora.
4. La figura de la pequeña propiedad familiar tampoco es un buen criterio para definir la clase media, ya que la economía neoliberal, al desmontar el modelo fordista, fragmentar y tercerizar el trabajo productivo en miles de microempresas, en gran parte familiares, dependientes del capital transnacional, transformó a esos pequeños empresarios en fuerza productiva que, conjuntamente con los prestadores individuales de servicios —tanto en su condición de trabajadores precarios como en su condición de trabajadores informales—, es dirigida y dominada por los oligopolios multinacionales; en suma, los transformó en una porción de la nueva clase trabajadora mundial.

Por lo tanto restaron, para albergar a la clase media, la burocracia estatal y empresarial, los servicios públicos, las pequeñas propiedades rurales y los pequeños comerciantes no afiliados a las grandes redes de oligopolios transnacionales. En Brasil, la clase media se benefició con las políticas económicas de los últimos diez años, creció y prosperó.

Si retomamos el ejemplo del viajero brasileño en la Europa de los años cincuenta y sesenta, podemos decir que la nueva clase media brasileña finalmente comienza a tener acceso a los derechos sociales y a volverse activa en el consumo de masa. Como la tradición autoritaria de la sociedad brasileña no puede admitir la existencia de una clase trabajadora que no sea constituida por los miserables desheredados de la tierra, los pobres desnutridos, los analfabetos e incompetentes, comenzó a afirmarse, inmediatamente, que había surgido una nueva clase media, puesto que es menos peligroso, para el orden establecido, que una clase trabajadora protagonista social y política.

Al mismo tiempo, cuando afirmamos que se trata de una nueva clase trabajadora, la novedad no está solamente en los efectos de las políticas sociales y económicas, sino también en los dos elementos introducidos por el neoliberalismo, a saber: la fragmentación, tercerización y precarización del trabajo, y la incorporación a la clase trabajadora de segmentos sociales que, en las formas

anteriores del capitalismo, habrían pertenecido a la clase media. Hasta el momento, es muy poco lo que se sabe de esa nueva clase trabajadora.

Clase media: ¿cómo se desata este nudo?

Una clase social no es un dato fijo, definido únicamente por determinaciones económicas. Se trata de un sujeto social, político, moral y cultural que actúa, se constituye y se interpreta a sí mismo y se transforma por medio de la lucha de clases. Es una praxis o, como escribió E. P. Thompson, un «hacerse histórico». Ahora bien, si en esto reside la posibilidad transformadora de la clase trabajadora, es también aquí donde reside la posibilidad de ocultamiento de su ser y el riesgo de ser absorbido ideológicamente por la clase dominante. La primera señal de riesgo es, justamente, la difusión de que existe en Brasil una nueva clase media. Es por esto, además, que la clase media pone sobre el tapete una cuestión política de enorme relevancia.

Fuera del núcleo económico definidor del capitalismo, la clase media también se encuentra fuera del núcleo del poder político: no detenta el poder del estado ni el poder social de la clase trabajadora organizada. Esto la coloca en una posición que la define menos por su posición económica y mucho más por su lugar ideológico, lo cual tiende a ser contradictorio.

Por su posición en el sistema social, la clase media tiende a ser fragmentada y raramente encuentra intereses comunes que puedan unificarla. Sin embargo, ciertos sectores, como los estudiantes, los funcionarios públicos, los intelectuales y los líderes religiosos, tienden a organizarse y a oponerse a la clase dominante en nombre de la justicia social, defendiendo los intereses y derechos de los excluidos, expoliados y oprimidos; dicho de otro modo, tienden a las ideologías de izquierda y, por lo general, a la extrema izquierda y al voluntarismo. No obstante, tal configuración es contrarrestada por otra diametralmente opuesta. Fragmentada, abandonada al individualismo competitivo, desprovista de referencias sociales y económicas sólidas y claras, la clase media tiende a alimentar el imaginario del orden y de la seguridad ya que, como resultado de su fragmentación e inestabilidad, su imaginario está habitado por un sueño y por una pesadilla: su sueño es formar parte de la clase dominante, su pesadilla es integrar el proletariado. Para que el sueño se cumpla y la pesadilla no se concrete se necesita orden y seguridad. Esto hace que la clase media se vuelva ideológicamente conservadora y reaccionaria. Su papel, tanto el social como el político, es asegurar la hegemonía ideológica de la clase dominante,

haciendo que tal ideología, por medio de la escuela, la religión y los medios de comunicación, se naturalice y se propague por toda la sociedad. Se puede decir que desde esa perspectiva, la clase media es la formadora de la opinión social y política, conservadora y reaccionaria.

Debemos, todavía, definir a la clase media del Brasil, la cual, además de los rasgos anteriores, adquiere una estructura autoritaria propia de la sociedad brasileña. Conservando las cicatrices de la sociedad colonial esclavista, el Brasil está marcado por un predominio del espacio privado sobre el público y, con la noción de jerarquía familiar en el centro, es fuertemente jerarquizado en todos sus aspectos: las relaciones sociales e intersubjetivas siempre se dan entre un superior que manda y un inferior que obedece. Las diferencias y asimetrías son siempre transformadoras de desigualdades que refuerzan la relación mando-obediencia y las desigualdades se naturalizan. Las relaciones entre quienes se consideran iguales son relaciones de parentesco, esto es, de complicidad. Cuando los individuos son vistos como desiguales, la relación adquiere la forma de clientelismo, tutela o cooptación y cuando la desigualdad es muy grande, la relación se vuelve opresión. La división social de las clases es determinada por la polarización entre las carencias de las clases populares y el privilegio de la clase dominante, acentuada y reforzada por la adopción de la economía neoliberal. Visto que las carencias son siempre particulares, se diferencian de los intereses, que pueden ser en común, y de los derechos, que son siempre universales. Visto que los privilegios son siempre particulares, no se pueden unificar en intereses en común ni pueden, jamás, transformarse en derechos; si esto ocurriera, dejarían de ser privilegios. Se entiende, por lo tanto, la dificultad de instituir la democracia en el Brasil, la cual se define como creación de nuevos derechos por la sociedad y de su garantía por parte del estado.

La clase media, como porción constitutiva de la sociedad brasileña, incorpora y propaga ideológicamente las formas autoritarias de las relaciones sociales. También naturaliza y valora positivamente la fragmentación y dispersión socioeconómica, introducidas por la economía neoliberal y defendidas ideológicamente por el estímulo al individualismo competitivo agresivo y al éxito a cualquier precio para operar con los procedimientos del mercado. Ahora bien, por más que en Brasil las políticas económicas y sociales hayan avanzado en dirección a la democracia, las condiciones impuestas por la economía neoliberal determinaron, como vimos, la propagación por toda la sociedad de la ideología de la competencia y de la racionalidad del mercado como promesa de éxito. Una vez que la nueva clase trabajadora brasileña se rigidizó dentro del modelo capitalista del momento —marcado por la fragmentación y dispersión

del trabajo productivo, la tercerización, la precariedad e informalidad; percibido como prestación de servicios, de individuos independientes que se relacionan con otros individuos independientes, en la esfera del mercado de bienes y servicios— se volvió propensa a adherir al individualismo competitivo y agresivo difundido por la clase media. En otras palabras, la esencia social se oculta y tiende a adherir al modo de apariencia social, como conjunto heterogéneo de individuos e intereses particulares que compiten. La propia clase media tiende a creer que forma parte de una nueva clase media brasileña.

Tal creencia se refuerza por su ingreso al mercado de consumo masivo. De hecho, desde un punto de vista simbólico, la clase media sustituye la falta del poder económico y político que la define, por la inclinación al voluntarismo de izquierda o la tendencia a la derecha, buscando prestigio y signos de prestigio, como diplomas y títulos de profesiones liberales, o bien por el consumo de servicios u otros objetos que denoten autoridad, riqueza, abundancia o ascensión social (una casa con cuatro cuartos en un barrio distinguido, un auto importado, ropa de marca, etcétera). Dicho de otro modo, el consumo se traduce en una ascensión social en dirección a la clase dominante y a una distancia infranqueable entre ella y la clase trabajadora. Esta, por su parte, al tener acceso al mercado de consumo, tiende a tomar ese imaginario por realidad y a adherir a él. Si por las condiciones actuales de su formación, la nueva clase trabajadora brasileña está rodeada de valores y símbolos neoliberales difundidos por la clase media, ¿cómo se desata este nudo?

Conclusión

Si la política democrática corresponde a una sociedad democrática y si en Brasil la sociedad es autoritaria, jerárquica, vertical, oligárquica y polarizada entre carencias y privilegios, solo se podrá dar continuidad a una política democrática enfrentando esta estructura social. La inclusión social no basta para derribar la polarización. Esta se enfrenta atacando los privilegios y estos se enfrentan solamente por medio de cuatro grandes acciones políticas:

1. una reforma tributaria que opere sobre la vergonzosa concentración de la renta y que obligue al estado a pasar de la política de transferencia de renta, a la política de distribución y redistribución de la renta;
2. una reforma política que dé una dimensión republicana a las instituciones públicas;
3. una reforma social que consolide el estado de bienestar social como política de estado y no solo como programa de gobierno;

4. una política de ciudadanía cultural, capaz de dismantelar el imaginario autoritario, terminando con el monopolio de la clase dominante de la esfera de los bienes simbólicos y la difusión y conservación de estos por parte de la clase media.

Con todo, el estado solo puede avanzar hasta ese punto. La continuidad de la construcción de una sociedad solo es posible con las acciones de la clase trabajadora. Por esto, como ha ocurrido tantas veces en la historia y tan claramente en el Brasil en los años ochenta y noventa, es fundamental que la propia clase media encuentre, en medio de tantas adversidades impuestas por el modelo de producción capitalista, nuevos caminos y formas de organización, que cree sus propias formas de lucha y de expresión autónoma y que sea la dueña de sus actos.

Ciudades brasileñas, junio de 2013: lo(s) sentido(s) de la revuelta¹

Marcelo Lopes de Souza

Perplejidades del mes de junio

Hay que llamar a las cosas por su nombre: lo que se dio en llamar primavera brasileña, en una suerte de paralelismo con la primavera árabe, no fue un movimiento social. Se trató de una ola de protestas, alentada por diferentes organizaciones, grupos débilmente organizados e individuos aislados. En cuanto a las organizaciones, iban desde movimientos sociales hasta partidos políticos, pasando por sindicatos, gremios estudiantiles y otras tantas.

De la movilización que en un principio gravitó en torno a una organización particular, el Movimento Passe Livre (MPL), polarizadora de un movimiento social específico iniciado entre jóvenes universitarios y de enseñanza secundaria por el pase libre en los transportes colectivos, se pasó rápidamente a un desbordamiento sociopolítico que no expresa otra cosa que una enorme energía social reprimida. La agenda inicial, socialmente crítica e incluso anticapitalista introducida por el MPL, fue siendo obnubilada y parcialmente eclipsada por una agenda mucho más vasta y amorfa desde el punto de vista ideológico. De esta, fueron emergiendo reivindicaciones e interpretaciones políticamente correctas (esto es, de conformidad con la esencia del statu quo capitalista y seudodemocrático, como el combate a la corrupción y el rechazo a determinadas acciones legislativas) y en parte, moralistas y hasta reaccionarias (como el odio manifestado por skinheads y otros individuos, y grupos de derecha contra los comunistas, los rojos, etcétera). Para quienes tenían bien presente la hegemonía conservadora en la sociedad brasileña, el parcial secuestro —o la parcial usurpación— de las manifestaciones de junio por los sectores conservadores no fue ninguna sorpresa. Si no era inevitable era, al menos, esperable.

En una reflexión sobre la rebelión argentina de principios de la década pasada, el periodista e intelectual uruguayo Raúl Zibechi, frente a la diversidad de movimientos específicos involucrados (piqueteros, asambleas barriales, empresas recuperadas y otros) y a la multiplicidad de fuerzas sociales y manifestaciones

¹ Versión resumida de un artículo homónimo, originalmente publicado en tres partes en la página web Passa Palavra, en 09/07/2013 (<http://passapalavra.info/2013/07/80798>), 16/07/2013 (<http://passapalavra.info/2013/07/80839>) y 23/07/2013 (<http://passapalavra.info/2013/07/80884>).

más o menos espontáneas, afirmó que ya no se trataba solamente de un único movimiento social, sino de la sociedad en movimiento (Zibechi, 2003). A este respecto, podemos enmendar nuestra reflexión afirmando que toda sociedad está siempre en movimiento; ciertamente, no hay “sociedades sin historia” (expresión nada feliz usada, en otros tiempos, por investigadores estructuralistas), lo que equivale a decir que no hay sociedades estáticas. Sin embargo, lo que Zibechi intenta captar con su expresión es algo bien real: en ciertos momentos, de fuerte y generalizado contenido insurreccional, la dinámica de las sociedades se acelera. Según las condiciones, podemos encontrarnos frente a una ola de protestas, a una plétora de organizaciones y movimientos o incluso, a un tsunami de carácter revolucionario. Cualquier ola, por grande que sea — aun la de un tsunami—, tarde o temprano se disipa y algunos de sus aspectos se institucionalizan. Como diría Castoriadis, la sociedad instituidora, por más radical que sea su movimiento, siempre dará lugar a la sociedad instituida (Castoriadis, 1983). No se puede vivir constantemente a un ritmo acelerado, no se puede renunciar al aparato de la institucionalización —ni obviamente, a las instituciones sociales— y no se puede eliminar la diferencia entre el instituidor y el instituido. En definitiva, la pregunta es la siguiente: ¿Qué resulta de todo esto? O dicho de otro modo: ¿Qué clase y qué intensidad de acumulación sociopolítica —material, políticopedagógica, estratégica, cultural simbólica— deriva de tal o cual movimiento/lucha social? ¿Qué consecuencias traerá? Y, parafraseando una crucial interrogante de Castoriadis, los resultados de las luchas actuales, ¿facilitarán o dificultarán las luchas y los avances futuros?² Esto es, los avances del presente, ¿merecerán ser subrayados? ¿En qué circunstancias? ¿Desde qué puntos de vista? En el caso brasileño actual es muy difícil ser optimista, aunque tampoco debemos rendirnos ante el pesimismo.

Primavera brasileña: ¿expresión fácil o comparación válida?

La comparación con la rebelión argentina hecha por algunos observadores, desde el punto de vista de la acumulación de fuerzas y del impacto general de las movilizaciones, no es absurda, pero consideramos que fue precipitada. En ambos casos, hay puntos de encuentro y de desencuentro en medio de una ola de protestas bastante compleja. Sin embargo, el caso argentino demostró tener una capilaridad social —para la cual fue de gran contribución la larga tra-

2 Textualmente (en portugués): “[...] que fazer e como fazer para que cada etapa de um processo de emancipação, por seus resultados, torne mais fácil, e não mais difícil, a participação política na etapa seguinte?” (Castoriadis, 1990, p. 181).

dición de luchas y resistencias organizadas de los trabajadores— y una solidez que no fueron demostradas en la primavera brasileña.

Tal vez la comparación con la primavera árabe —a pesar de las distancias geográficas y culturales— sea más feliz, la cual desde el comienzo fue extremadamente heterogénea en lo que respecta a las fuerzas que la motivaron (desde organizaciones y grupos religiosos y fundamentalistas, como la Hermandad Musulmana y los salafistas, hasta estudiantes universitarios de izquierda y occidentalizados). No pocos analistas occidentales proyectaron expectativas que, inevitablemente, acabaron por ser falsas. Sí, inevitablemente porque se trató, repetidas veces, de interpretar lo que ocurría en el Magreb y en el Medio Oriente mediante conceptos como democracia y revolución, incluso con ayuda de ideas e ideales de libertad y aun, libertarios, con una mirada cultural y políticamente ajena a aquella región del planeta. La primavera árabe, menos de un año más tarde, resultaba frustrante para quienes proyectaron en ella sus deseos y valores, tomando el todo (países complejos y atravesados por varias líneas de fractura étnica, religiosa, política) por la parte (jóvenes y estudiantes occidentalizados y de espíritu muchas veces laico y de izquierda). La plaza Tahrir dejaba de ser tratada casi eufóricamente como un emblema de la renovación para ser vista como el símbolo de un episodio interesante y relevante, pero menos interesante y menos relevante de lo que les hubiese gustado. Uno de los riesgos de tal frustración es que desviemos demasiado pronto nuestra atención del fenómeno, lo que nos impide comprenderlo y evaluarlo —y estimarlo— por lo que efectivamente es o fue y por los resultados que efectivamente ha dejado.

En el caso brasileño, inmediatamente algo se hace evidente: fuimos testigos de una ola de manifestaciones como no veíamos hacía veinte años. Para bien y para mal. Aún más, en las dos últimas décadas, tanto la prensa como el estado se preocuparon mucho más por las luchas sociales rurales que por las urbanas. En estas últimas, y principalmente en las grandes ciudades y en las metrópolis, parecía que conflicto social significaba casi exclusivamente delincuencia violenta común más o menos organizada. A la luz de las contradicciones sociales “objetivas” y de algunos hechos demográficos evidentes, el protagonismo de las organizaciones de las luchas rurales —para empezar, obviamente, el Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)— y el papel de actores coadyuvantes a los que parecían reducidos los movimientos sociales urbanos en los años noventa y en la década siguiente parecían sorprendentes. Después de junio de 2013, las ciudades volvieron a despertar la atención por ser nuevamente arenas de conflictos políticosociales.

Los gobiernos Lula y Dilma: efectos sobre las luchas sociales, principalmente en las ciudades

En el escenario actual (agosto de 2013), podría decirse que los diferentes tipos de activismo urbano de los años sesenta a ochenta (activismo de barrio, activismo de favela) perdieron importancia. Los “nuevos movimientos sociales”, como eran conocidos en la literatura sociológica de los años setenta y ochenta, envejecieron e incluso esclerosaron, prácticamente sin poder seguir siendo caracterizados como movimientos sociales influyentes. Los movimientos que emergieron en los años noventa —que podemos denominar de manera ligera, como la segunda generación del nuevo activismo social urbano, para diferenciarlo de los movimientos que surgieron en el período precedente— todavía se encuentran en un estado embrionario o poco desarrollado. Sin embargo, aunque aún sea embrionario, y en gran parte porque lo es, ese flamante activismo —o activismo urbano de la segunda generación del nuevo activismo— nos invita a reflexionar a propósito de determinados problemas y desafíos que vienen acompañando su trayectoria. Todo esto, en el contexto de una reflexión sobre los impasses y dificultades de la lucha anticapitalista en la sociedad brasileña. La reciente ola de protestas debería catalizar una reflexión colectiva, necesaria desde hace varios años, sobre la evolución del activismo y de las luchas sociales en el Brasil post-redemocratización y, especialmente, a partir de la coyuntura política inaugurada con la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al Palacio del Planalto.

En 2002, cuando el ex operario y líder sindical Luis Inácio Lula da Silva, presidente de honor del PT, fue electo presidente de la república, se generalizó el sentimiento entre los sectores de izquierda de que, finalmente, todo un universo político comprometido con cambios sustanciales —entre ellos la reforma agraria— llegaría al poder de estado. Aún en agosto de 2003, en el comienzo del período de gobierno, Plínio de Arruda Sampaio —intelectual vinculado al MST— manifestó su convicción y esperanza de que el gobierno Lula sería, si no un gobierno revolucionario, al menos un gobierno disputado y dividido, una especie de campo de tensión en el que los trabajadores lograrían hacer valer gran parte de sus intereses (Lerrer, 2003: 91). A once años de la conquista del poder nacional por el PT, ¿qué expectativas siguen vigentes? Habría que examinar de manera interconectada, algunas cuestiones relativas a la dinámica interna del activismo y de los movimientos y sus relaciones con el aparato estatal.

Algunas organizaciones de la segunda generación del nuevo activismo social

ya demostraron tener un carácter pujante y bastante organizado, lo que no las libra, a pesar de eso, de algunas fragilidades. El Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), por ejemplo, viene demostrando que una organización sin techo puede dialogar muy bien de manera crítica con el planeamiento y la gestión urbana promovida por el estado, examinando y explorando las brechas y las contradicciones contenidas en documentos como planos maestros. Al mismo tiempo, viene creando territorios disidentes organizados de manera alternativa y cumpliendo con un planeamiento estratégico relativamente sofisticado de sus acciones. No obstante, la estrecha asociación del MTST con un partido tradicional de izquierda, el Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), a fines de la década pasada, llevó a que el movimiento perdiera parte de la cuota de creatividad que poseía. En Río de Janeiro, varias de las ocupaciones de sin techo de las zonas centro y portuaria, en parte organizadas siguiendo fuertes principios de autogestión —y en esto, diferenciándose del MTST y de otras varias organizaciones sin techo—, no lograron resistir a las presiones y persecuciones del estado y del capital ni al creciente asedio de traficantes de drogas. Cayeron las ocupaciones Machado de Assis y Zumbi dos Palmares, Chiquinha Gonzaga resiste con dificultades y Quilombo das Guerreiras está, en principio, con sus días contados, puesto que ya se decidió el desalojo de sus ocupantes. En lo que respecta al hiphop, el surgimiento de la Central Única das Favelas (CUFA) hace algunos años parecía merecer ser saludado, por lo menos en un primer momento como un hecho positivo; lo que se vio más tarde, sin embargo, no merecería más que alguna nota al pie de página y enmendada. Finalmente, el MPL organizó una red interesante y trascendental originada a partir de las manifestaciones de Salvador y Florianópolis, entre 2003 y 2005. No obstante, precisamente en medio de la ola de protestas de 2013, el MPL fue forzado a recular y a adoptar otra postura a propósito de las segmentaciones de la movilización que él mismo originó. A pesar de la formación de redes, de los intercambios y de la cooperación entre organizaciones, a esta segunda generación de nuevos activistas le falta mucho conocimiento sobre cómo desarrollar un papel cada vez más proactivo, consistente y, como corolario, eficaz.

La autogestión y las formas horizontales —no jerarquizadas— de organización y planeamiento de luchas y actividades como alternativas explícitas a la gestión y al planeamiento promovidos por el estado se muestran posibles e, incluso, ya existen en la realidad. Obviamente que pesan ciertas contradicciones, por ejemplo de orden político, pero algunas organizaciones ya han hecho esfuerzos importantes en esta dirección, principalmente mediante la construcción de experiencias de planeamiento y gestión urbana radicalmente alternativos y de resistencia o por

planeamiento y gestión insurgente. Por estos, entendemos las acciones que han buscado las organizaciones de los movimientos para comprender el discurso y los instrumentos del planeamiento promovido por el estado —así como los marcos legales e institucionales vinculados al derecho (urbano, de propiedad, etcétera)— para utilizarlos, en la medida de lo posible, en beneficio propio, aprovechando brechas y contradicciones. También para establecer territorios disidentes, apoyados por redes logísticas y de solidaridad política; producir un contradiscurso técnico y político —alternativo al discurso estatal— a propósito de problemas como déficit habitacional, disparidades de infraestructuras, transporte urbano, entre otros. El planeamiento y la gestión urbana de resistencia o insurgente serían un planeamiento y una gestión crítica efectivamente impulsada de abajo hacia arriba (por lo tanto, como algo mucho más profundo y radical que iniciativas de dichos gobiernos progresistas, del estilo de planeamientos y gestiones participativas implementadas en los marcos de coyunturas favorables). Mediante esfuerzos como estos es evidente que, en algunos casos, aunque operen con supuestos y con un margen de maniobra muy diferentes del planeamiento y de la gestión promovidos por el estado (y, en la era del empresarismo urbano cada vez más directamente por el propio capital privado), las acciones protagonizadas por los movimientos pueden ser entendidas como mucho más puramente reactivas o reivindicativas, ya que las organizaciones de la sociedad civil no disponen de las prerrogativas legales y de los recursos económicos e institucionales a disposición del estado para planear y gestionar el uso del suelo.

No obstante, ni la autogestión ni la horizontalidad son características diseminadas entre las organizaciones de movimientos sociales brasileños, a pesar de que hoy en día están mucho más presentes que hace veinte años. En su notable obra *La mirada horizontal*, Zibechi reconoce, tomando como ejemplo el movimiento sin tierra brasileño y en particular, su principal organización, el MST, que: “es imposible que un movimiento represente la negación absoluta, la inversión total, de la sociedad en la que está inmerso” (Zibechi, 1999: 82). “Como todos los movimientos sociales, el de los Sin Tierra combina aspectos que niegan la sociedad capitalista actual con otros que la reproducen” (Zibechi, 1999: 82). Y agrega: “ciertamente, en el MST conviven también aspectos de la vieja cultura política, que se traducen en estilos organizativos similares a los que predominan en los partidos de la izquierda”; problema que “es más visible en los estratos superiores de las direcciones” (Zibechi, 1999: 84).

No obstante esto, Zibechi destaca —y no sin razón— la importancia capital del MST y el desafío representado por “un mundo nuevo en el corazón del viejo” (Zibechi, 1999: 81). La provocación pretendida a esta altura del artículo

tiene que ver, sin embargo, con el otro aspecto: lo viejo en el corazón de lo nuevo. Esto es, estilos centralistas y jerárquicos de movilización, reclutamiento y organización.

Esto no quiere decir que las formas descentralizadas y horizontales de organización sean en realidad una novedad histórica; basta pensar en los grupos y movimientos de autogestión que surgieron a lo largo del siglo XX, y ni que hablar de la tradición específicamente anarquista que se remonta al siglo XIX.

Sucede que, especialmente en el siglo pasado, el leninismo y su centralismo democrático fueron hegemónicos. Luego de la Guerra Civil Española, la presencia política de los anarquistas pasó a ser residual, incluso en países donde hasta los años treinta —o por lo menos hasta comienzos del siglo XX— habían constituido movimientos fuertes. Las organizaciones políticas marxistas de tipo no leninista y básicamente horizontales —como los consejos operarios de los años veinte y treinta— fueron apenas excepciones. Asimismo, ciertos grupos de intelectuales y militantes autogestionados que surgieron luego de la Segunda Guerra, como el francés *Socialisme ou Barbarie* (1948-1967), raramente pasaron de pequeñas agrupaciones de disidentes a pesar de su influencia episódica sobre algunos movimientos sociales. Lo “nuevo,” por lo tanto, parece seguir siendo la autogestión, la horizontalidad, incluso porque, sin una crítica profunda y maciza a la herencia del socialismo real —y no solo del estalinismo sino del bolchevismo tout court—, es difícil imaginar cómo se podrá gestar una alternativa radical al capitalismo. Esto es, una alternativa que no corra de entrada, el grave riesgo de reproducir una trágica farsa histórica como fue la del socialismo burocrático, en el fondo, tan tributario del imaginario capitalista.

Prestando atención a los movimientos sociales urbanos del Brasil actual y sus organizaciones, pareciera existir en algunas una nítida disposición hacia las críticas radicales y de izquierda del bolchevismo y de lo que este representó. A decir verdad, ya hay organizaciones que encarnan conscientemente, en mayor o menor grado, tal empresa. Es muy cierto que esto todavía está muy lejos de ser un espíritu generalizado. Incorporar dicho espíritu puede ser considerado como uno de los más importantes desafíos para los activistas brasileños. Sin embargo, también es innegable que la ola de protestas urbanas, iniciada y alentada por una organización, el MPL, comprometida con principios nítidamente libertarios (horizontalidad, autogestión, autonomía y apartidarismo), demuestra que los estilos descentralizados y radicalmente democráticos de organización y protesta comienzan a amenazar seriamente la predominancia y la hegemonía de los estilos centralizadores y (casi) bolcheviques. Evidentemente, esto no significa que estén a punto de revertir la conservadora correlación de fuerzas que actualmente

se observa en el Brasil.

Otro desafío para el activismo contemporáneo, está relacionado al activismo urbano y se refiere, específicamente, al problema de organizar y de movilizar a los trabajadores informales. En la era de la globalización y del proceso eufemísticamente denominado de reestructuración productiva, en los países centrales, el sistema capitalista cesó de poder incluir e integrar al mundo del consumo a la gran mayoría de los trabajadores. Por el contrario, pasó a expeler o a no incluir a una creciente porción de la población del mercado de trabajo formal, especialmente los jóvenes. Lejos de la franja superior, en comparación con los tres decenios que van del período inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra hasta mediados de los años setenta (época apodada, con notable exageración, de los treinta glorieuses), la situación a la que hoy asistimos es de un desempleo en masa, de precarización de las relaciones de trabajo y de erosión del Welfare State en los países centrales, y de hiperprecarización del trabajo en los países de la (semi)periferia. En estos últimos, como Brasil, acostumbrados desde siempre a las altas tasas de subempleo, muchas veces crece también el desempleo abierto, y el desde siempre precario mundo del trabajo se precariza aún más. Como si esto fuera poco, el deficiente papel del estado como proveedor de servicios y bienes públicos (como salud y educación) se vuelve todavía más limitado.

En un escenario donde el mundo del trabajo implosiona y un elevado número de personas en edad de trabajar es condenado al desempleo crónico y al subempleo, algunas organizaciones de movimientos sociales han sabido ir mucho más allá de los límites impuestos en el ámbito de la participación por medio de canales oficiales y de la lucha institucional —aunque dichos canales y dicha lucha, sabiamente, no sean siempre despreciados—. Protagonizan además, prácticas de acción directa en las cuales la dimensión espacial es muy fuerte y, en cierto modo, definidora de estrategias e identidades. En medio de procesos de territorialización, las relaciones sociales se (re)articulan en un intento por resistir a las fuerzas y a los efectos desagregadores del capitalismo (semi)periférico, en particular, en el momento del parcial desmantelamiento de los estados nacionales.

Son muchas las prácticas espaciales urbanas asociadas a esas formas de resistencia y ellas varían de país a país y de ciudad a ciudad, tanto en intensidad como en calidad. Van, por ejemplo, desde arremetidas hacia la propiedad privada de tierras y bienes inmuebles, por medio de ocupaciones de terrenos y edificios deshabitados, hasta la constitución de circuitos económicos alternativos al mercado capitalista, como comedores populares, cooperativas y gestión de fábricas

quebradas por los propios trabajadores. También, engloban inversiones y avances simbólicoculturales en materia de redes de sociabilidad promotoras de solidaridad y cohesión, procesos de concientización y formación política, y estímulo al desarrollo de prácticas culturales críticas y emancipadoras.

Todo esto sumado al hecho de que ya no se puede sostener, sin alejarse de la realidad, el centralismo del proletariado en sentido tradicional como sujeto de la historia, debido al acomodo político de la masa operaria formal (reducción del movimiento obrero y transformación hacia un activismo sindical de tipo corporativista), pone sobre el tapete la cuestión de que los movimientos sociales necesitan hacer frente a la necesidad de articular distintos actores sociales, entre ellos, quienes viven en condiciones de vida hiperprecarias (que los marxistas suelen llamar peyorativamente de “lumpemproletariado”), los subempleados y los desempleados crónicos. Y esto por no hablar de otras agendas, directamente no remisibles o reductibles a la esfera de la producción, pero que también han orientado y avivado luchas sociales fundamentales: la lucha contra el racismo, contra el machismo, la opresión de género, la homofobia, entre otros. ¿Hasta qué punto es posible? ¿Hasta qué punto un universo marcado por la hiperprecarización y por la fragmentación económica es pasible de una autoorganización revolucionaria? Frente a este cuadro de debilidades, el gobierno Lula se dispuso a desarrollar un proceso de división y de debilitamiento político del activismo urbano. En verdad, tal proceso se desdobra con el peso de la actuación en escala nacional de instituciones del gobierno nacional o por él influenciadas. Una tendencia que ya venía de la década anterior: atraer o “engancha” a la sociedad civil de las dinámicas y agendas de modelos participativos oficiales —ampliamente governmentsponsored— de participación popular, del estilo de los presupuestos participativos.

En un país como Brasil, marcado por las secuelas de la crisis de la deuda externa y de sus resultantes ajustes estructurales —además de los inevitables ajustes fiscales, privatizaciones, etcétera— y donde las finanzas del estado en los varios niveles de la administración pública, pero sobre todo en los municipios, se encuentran en una situación deplorable, la cuestión sociopolítica detrás de la participación como instrumento de gobernabilidad pasa a ser inseparable de una suerte de invitación para cogestionar la crisis. Por supuesto que eso no acaba con el hecho de que existen o existieron experiencias participativas y relativamente osadas (lamentablemente, una ínfima minoría [Souza, 2006]). No se trata por consiguiente, de descalificar de forma generalizada a los modelos de presupuestos participativos y consejos gestores de política urbana, visto que algunos de ellos han sido, por lo menos parcialmente, útiles como meca-

nismos redistributivos indirectos a pesar de sus limitaciones.

El problema radica en que, más allá de las limitaciones intrínsecas a los canales y foros de planeamiento y gestión participativos (Souza, 2006), tales canales y foros también acarrearán potencialmente determinados riesgos para los movimientos sociales, principalmente el riesgo de cooptación —mencionado en el párrafo anterior— que no debe ser subestimado. ¿Cuán grande es y ha sido dicho riesgo? ¿Qué hacer para evitarlo o, por lo menos, reducirlo? Una porción de la sociedad civil ya empezó a percibir que, por lo general es desgastante, infructífero e incluso peligroso negociar con el estado y utilizar canales participativos instituidos por el mismo. Esto no justifica, ciertamente, las posturas simplistas del estilo: “olvidemos por completo y de una vez por todas los foros participativos”. Sin embargo, la necesidad de evitar toda forma de ingenuidad en ese aspecto se hace obvia. Frecuentemente, se olvida o se subestima el hecho de que el estado es en última instancia una estructura heterónoma. Cuando admitamos que esta es la esencia del aparato estatal, el objetivo de intentar influenciar al estado por medios institucionales, solo se podrá concebir en la mejor de las hipótesis, como un objetivo táctico —y aun así debe ser tratado con extrema cautela—, jamás como un objetivo estratégico o como un fin en sí mismo.

Podemos admitir que, debido a la naturaleza contradictoria de los procesos políticos y del propio estado, muchas veces se presentan coyunturas favorables así como brechas y potencialidades legales e institucionales; siempre y cuando los movimientos no pierdan de vista la necesidad de evaluar en cada situación específica y en cada momento los riesgos de cooptación (Souza, 2006; Souza, 2012). Es razonable reconocer la necesidad de prepararse para explorar dichas coyunturas, brechas y potencialidades. “Si” y “cómo” un foro participativo institucionalizado constituye, por encima de todo, una oportunidad o un riesgo, es algo que solo puede responderse caso a caso. El aprendizaje que podemos extraer, desde ya, del análisis de las experiencias brasileñas de los últimos veinte años es que, además de que la multiplicación de foros denominados participativos³ no representa, per se, nada que dé margen a un gran optimismo, a la capacidad de evaluar de manera exigente y lúcida el carácter prometedor —y a veces con argucias— de que cada situación debe ser constantemente cultivada. A decir verdad, la proliferación de foros participativos inconsistentes puede llevar, en casos de ineficacia o de expectativas frustradas, al desgaste y aun al descrédito generalizado hacia determinados modelos (Souza, 2000) o hacia la bandera de la participación popular en sentido amplio (Souza, 2006). Además, puede colaborar para cooptar movimientos, sus organizaciones y a la población

en general. En esa situación, desde una óptica que contemple la lógica y los intereses sistémicos —disminución de la oposición y desmantelamiento de resistencias— la multiplicación de foros participativos no dejará de revelar su trascendental dimensión de funcionalidad y de eficacia... para el control social.

¿Hacia una reinención de las luchas urbanas?

En ese escenario de desolación política —de fragmentación y cooptación— ciertos grupos activistas urbanos están intentando reaccionar y organizarse. Uno de los ejemplos más felices es el de los Sin Techo, que, por lo menos en São Paulo, procura trabajar —lamentablemente sin mucha sistematicidad y sin mucho éxito— por una reinención del baluarte de reforma urbana como emulación de la reforma agraria.

El intento por rescatar esta bandera de reforma urbana por parte de una porción del movimiento Sin Techo es digno de ser destacado. En este caso “rescatar” es un término realmente apropiado. Luego de un período importante de condensación a mediados de los años ochenta, en el que la perspectiva de influenciar la elaboración de la nueva constitución del país por medio de una enmienda popular funcionó como catalizador, el ideario de reforma urbana en la siguiente década —y en gran medida hasta ahora— ha sido rehén de la tecnocracia de izquierda de quienes creen —comenzando por los directores— que las leyes y los planes progresistas, y bien hechos, podrían compensar el reflujo de los movimientos sociales y promover por sí solos grandes transformaciones socioespaciales (Souza, 2006). Si en los años noventa la ideología de la tecnocracia de izquierda ya había capturado muchas energías que se habían concentrado en la década anterior, en la movilización popular por la reforma urbana con el gobierno Lula, tal factor ideológico y sus efectos fueron notablemente catalizadores. Frente a este hecho, que la organización de Sin Techo más conocida, el MTST, cuya actuación se concentra en São Paulo, tenga entre sus lemas principales la “lucha por la reforma urbana” es un buen augurio (aunque por el momento la comprensión de dicha reforma sea parca o poco sofisticada).

En cuanto al hip-hop del Brasil actual, a pesar de estar dividido entre una vertiente básicamente comercial y una crítica —o de protesta—, tiene al menos parcialmente algunas nítidas características de un movimiento social o más específicamente, de un movimiento políticocultural. Si la abrumadora mayoría de los estudiosos e investigadores urbanos brasileños de espíritu crítico —incluidos los vinculados a las luchas urbanas— privilegió hasta hace poco tiempo

la explotación de clases en detrimento de la consideración seria y profunda de la lógica propia de otros tipos de opresión, es mérito de los rappers como Racionais MC's y MV Bill haber abierto el debate sobre discriminación racial. Sus letras, con impresionante contundencia y plasticidad, pintan un retrato sin retoques de la cotidianeidad de los pobres de las grandes ciudades brasileñas: la segregación habitacional, la estigmatización socioespacial, la violencia policial⁴ y otros, que están acostumbrados a enfrentar.

El MPL es otro movimiento significativo. En la década pasada ya se habían trabado algunas luchas en Salvador y Florianópolis (como la célebre Revolta da Catraca en esta última ciudad). Paulatinamente, la organización y el movimiento se fueron expandiendo por el resto del país. Para el trabajador de bajos recursos, que vive en la periferia y que depende del transporte colectivo —caro y de mala calidad— para trasladarse, este problema no puede ser subestimado. Se trata de un tema explosivo, impulsado para ser el detonador de revueltas populares de grandes proporciones. Esto explica que, hace algunas décadas, las principales explosiones de violencia popular más o menos espontáneas hayan sido los destrozos de trenes y ómnibus, reflejo de que al pueblo se le había agotado la paciencia debido a la precariedad de los medios de transporte⁵.

Los movimientos sociales necesitan articularse y varios vienen trabajando en esto. Podemos citar la cooperación esporádica entre grupos de hip-hop y organizaciones de Sin Techo en São Paulo o el foro de organizaciones de movimientos sociales que, en 2009, fue creado en Río de Janeiro con el sugestivo nombre de (Re)Unindo Retalhos ([Re] Uniendo Retazos), el cual lamentablemente tuvo vida corta. Sin embargo, estas articulaciones son solo incipientes. Podríamos decir que se trata de crear condiciones para evitar que cada movimiento, tomado aisladamente y visto desde una óptica política, se debilite o se deje cooptar perdiendo su criticidad. En realidad, se puede decir que lo que los movimientos necesitan es en gran medida reinventarse.

No obstante esto, otro tema debe ser puesto en el tapete. Se trata del sentido —o los sentidos— de las luchas actuales y, en particular, de la reciente ola de protestas (entiéndase “sentido” tanto como significado político e histórico, como rumbo, dirección o tendencia). Esto también pone en discusión el papel del gobierno supuestamente de izquierda del PT.

La violencia estuvo lejos de ser una constante durante la ola de protestas de junio de 2013, a pesar de los ánimos por momentos exaltados —lo que es comprensible— y de los daños colaterales previsible, como saqueos y destrozos. A pesar de algunos enfrentamientos violentos, prevalecieron el buen humor y la creatividad. Sin embargo, esto no es un motivo para regocijarse ni mucho

menos para lamentarse por los pocos “episodios de vandalismo” que se vieron, como previsiblemente insistieron en resaltar los sectores conservadores y los medios corporativos. Todo esto porque una de las fuentes de violencia, además de las demostraciones de fuerza por parte de manifestantes y de confrontaciones con una policía brutal, fueron choques entre diferentes sectores de las multitudes manifestantes. En Río de Janeiro, un grupo de neonazis linchó a militantes de izquierda durante las manifestaciones del 20 de junio. Un caso extremo sin dudas, pero un caso extremo sintomático de un problema más amplio: la ola de protestas fue rápidamente disputada por sectores nacionalistas y conservadores, lo que condujo —en algunos casos— al aislamiento de las fuerzas anticapitalistas y libertarias, comenzando por el MPL, que habían sido las disparadoras de las protestas.

El creciente discurso llamando al orden y las interpretaciones conservadoras y hasta moralistas surgieron debido a que los conservadores compraron, convenientemente, la historia del “gobierno de izquierda” del PT por lo que vale su imagen. La ola de manifestaciones iniciada por fuerzas de izquierda, y cuyo detonador fue la lucha contra el aumento del boleto del transporte colectivo en varias ciudades, pasó a ser parcialmente orientada por sectores de clase media que levantaban banderas “políticamente correctas”, como las críticas a la corrupción, a los políticos, a los partidos —de izquierda principalmente—. En este punto, cabe retomar la comparación con la rebelión argentina para remarcar otra diferencia: en Argentina, a pesar de las ambigüedades estructurales y de las limitaciones de pequeña burguesía —que volvió rápidamente a ser “la misma clase media de siempre”, como me dijo en el año 2007 un activista de la organización Libres del Sur, de Avellaneda—, no había un gobierno supuestamente de izquierda que confundiera corazones y mentes. Dicho problema surgió más tarde, con el neoperonismo de Néstor Kirchner. También aquí parece adecuada una comparación con la primavera árabe: en el Magreb y en el Medio Oriente, la resistencia contra las dictaduras pareció unir temporalmente a sectores muy diferentes, incluso opuestos. Quienes prevalecieron fueron lamentablemente las orientaciones y los grupos menos comprometidos con una real transformación social.

Complejidad de una ola de protestas política e ideológicamente disputada

En un artículo publicado en O Estado de São Paulo del 19 de junio de 2013, el aplaudido antropólogo Roberto Da Matta, a pesar de no ser un genio de la

investigación social crítica —o, quién sabe, justamente por serlo—, sintetizó notablemente parte de la interpretación de la clase media al respecto de la ola de protestas de junio de 2013:

[...] una sorprendente ola de motines, consecuencia de la total apatía de los gobernantes frente al caos que todos vivimos en las ciudades brasileñas, sin transporte urbano, con un nivel de delincuencia rozando la guerra civil y por la imposibilidad de moverse en auto debido a la falta de espacio y de educación cívica.

Sin esconder los estereotipos habituales y con mucha altura no disimulada, Da Matta resumió —casi sin intención— los sentimientos difusos de la pequeña burguesía de las grandes y de las medianas ciudades. Claro que esto no tiene nada que ver con la crítica anticapitalista. Las objeciones al gobierno del PT y a los partidos surgieron en gran medida de la derecha —de un modo neoconservador y con frecuencia neofascista— y no de la izquierda. Tal espíritu fue captado en el furor de los acontecimientos por el diario virtual independiente *Passa Palavra* (2013a y 2013b).

Al principio, el sentido parecía ser casi unívoco: el espacio público —entendido no como vago sinónimo de escena o esfera pública, sino como expresión geográfica: calles, plazas y otros— denominado “público” de modo puramente formal como espacio de uso colectivo gestionado y mantenido por el estado, adquirió una rara visibilidad. El concepto público se cargó de un fuerte significado sociopolítico. Poco a poco, la violencia fue minando bajo el signo de la intolerancia y del odio la dimensión verdaderamente pública de ese modo de vivenciar los espacios de circulación de todos los días, no solo la violencia por parte de la policía sino también de manifestantes contra manifestantes —en general de neofascistas contra izquierdistas, ya fueran militantes de partidos políticos o independientes—. Sintomáticamente, asustado por el rumbo que estaba tomando la ola de protestas, el MPL decidió el 21 de junio no convocar a nuevos actos por miedo a contribuir —involuntariamente— al aumento de la cooptación de la movilización por parte de sectores conservadores. Entre el día 6, cuando el MPL logró convocar a casi dos mil personas en las calles de São Paulo contra el aumento del precio del boleto de R\$ 3,00 a R\$ 3,20, y el día 21 del mismo mes, sucedieron dos hechos clave: la extensión de la movilización y de las protestas por todo el país —llegando a ciudades medianas y del interior— y la ampliación de la agenda de resistencia y de protesta de un modo que, al tiempo que la enriquecía también la descaracterizaba. En cierto

sentido, negaba la esencia críticoracional del contenido de las fuerzas políticas que originariamente convocaron a la movilización.

No obstante, sería un gran error reducir la evolución y los desdoblamientos de la ola de protestas a un secuestro políticoideológico generalizado de una movilización que tenía, en principio y por lo menos indirectamente, un contenido de clase definido: estudiantes y jóvenes politizados —y en su mayoría de clase media— que demostraban una elevada conciencia crítica y una agenda solidaria sobre los intereses objetivos de los trabajadores. Paulatinamente, se fue transformando en un fenómeno marcado por el nacionalismo, por sentimientos pequeño burgueses e incluso, neofascistas. Restringirse a tal interpretación significaría nublar la vista, con la imposición de lentes tradicionales comunes incluso en los partidos de izquierda, ante la dificultad de separar el trigo de la cizaña y de valorar los aspectos positivos de la movilización popular, sin poder ver las potenciales ganancias de la incorporación —que esperemos no sea efímera— de novos personagens que entraram em cena, para recordar el título de la gran obra del sociólogo Eder Sader (Sader, 1995). Un observador sensible, de seudónimo Vermelho e Preto (Rojo y Negro), en un extenso comentario publicado a propósito de uno de los textos de Passa Palavra sobre la Revolta dos Coxinhas, advirtió lo siguiente:

Del millón de personas que salieron a la calle, la abrumadora mayoría estaba vestida con los colores verde y amarillo. Eran los Coxinhas, como se hicieron llamar. Llevaban carteles contra la corrupción y “desfilaban” sacando fotos para publicar en Facebook. Pero la juventud que tenemos es esta y no otra. La mayoría de ellos siente la mierda en la que estamos enterrados. Gran parte de las reivindicaciones exigía una mejor salud y educación. Muchos jóvenes gays mostraron sus rostros sin máscaras. Las calles se abrieron nuevamente y jesto es una gran conquista!

Moraleja: lo contrario de la ingenuidad no debe ser —ni necesita serlo— la impertinencia ni el exceso de temor. De acuerdo a Pablo Ortellado —citado en una nota del 24 de junio de 2013 en Folha de Sao Paulo— los medios de comunicación (entre otros factores, por la manera como manejaron las protestas a mediados de julio) colaboraron para atraer actores conservadores y contrarios a la izquierda. Probablemente, este hecho tuvo un peso significativo sumado a los demás factores que están detrás de la ampliación de la agenda de demandas y del abanico de manifestantes: el conservadurismo de gran parte de la juventud, mezclado con sentimientos difusos de indignación y rechazo de parte del statu quo. En cuanto a ese conservadurismo, es cierto que el espectro del neofascismo —o fascismo cotidiano— siempre ronda movimientos

de masa sin contenido anticapitalista definido. Subestimar tal peligro no sería prudente. Sobrestimarlo también sería nefasto, pues nos llevaría a cerrar los ojos y el corazón delante de los nuevos actores y de los aspectos positivos de esa liberación de energía social contenida en nombre de un modelo demasiado restrictivo, de una buena movilización de clases y de una agenda política coherente. Con sus pros y sus contras, con aspectos óptimos y pésimos, con presupuestos e implicaciones motivadoras y al mismo tiempo preocupantes —cuando no lamentables—, el pueblo salió a la calle y asistimos a una notable ola de movilizaciones y protestas. Con el tiempo, la historia se encargará de rescatar lecciones equilibradas, así como las implicancias a mediano y largo plazo que este momento nos dejó.

Es lícito creer que la enorme complejidad socioespacial de las ciudades —mucho mayor que en el campo—, que dificulta el protagonismo y el poder de influencia de los movimientos urbanos de contenido anticapitalista, contribuyó —en esta ocasión— al surgimiento de una ola de protestas de carácter extremadamente heterogéneo y amorfo y, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existentes hoy en Brasil, a la visibilidad creciente de fuerzas neoconservadoras. Sin embargo, es muy cierto que la hegemonía políticoideológica conservadora no se impuso de forma absoluta. La marea creciente del conservadurismo y del moralismo pequeño burgués era real; lo que hizo aquí fue solamente sacar a la superficie lo que siempre había estado en los subterráneos del tejido social y que podía ser visualizado o auscultado en investigaciones de opinión a propósito de temas como: “baja de la edad de imputabilidad penal”, “introducción de la pena de muerte”, “naturaleza y papel del MST”, entre otros.

En el Brasil actual, tanto a nivel del pueblo como del gobierno, la ideología de centro va generalmente de centro izquierda a centro derecha. Hay dos formas —obvias— de contraponerse a este centro: por la izquierda o por la derecha. En la ola de protestas de junio de 2013 ambas formas estuvieron presentes. El hecho de que ambas formas atacaran el centro no podría jamás llevarnos a confundirlas. Tampoco deberíamos reducir los hechos ocurridos como pertenecientes a una u otra ideología (en parte movidos por el miedo que sentimos los izquierdistas hacia el sector conservador).

Las manifestaciones fueron una fusión tensa y oscilante de tendencias diferentes y en gran parte opuestas. Desde el punto de vista de la acumulación de avances, los resultados a corto plazo pueden hacernos pensar en una victoria parcial, aunque los efectos más duraderos no prometan necesariamente una victoria. Todavía queda mucha historia por escribir. Es imprescindible ampliar la conciencia en el universo de las fuerzas anticapitalistas en cuanto a que,

hechas las autocríticas y aprendidas las lecciones, nuestro papel de coautores de esta historia unido al de nuevos actores y a sus acciones en el espacio público, puede despertar la confianza en un nuevo potencial, que a muchos aún les parece negativo y merecedor de desconfianza, para que sea con el tiempo más matizado y aprovechable.

Referencias

- Avritzer, Leonardo (2002) "Modelos de deliberação democrática: uma análise do orçamento participativo no Brasil". En: Santos, B. de S. (org.): *Democratizar a democracia. Os caminhos da democracia participativa*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- (2003) "Apresentação". En: Ribeiro, Ana Clara Torres; Grazia, Grazia (2003) *Experiências de orçamento participativo no Brasil (1997 a 2000)*. Petrópolis, Vozes (en coedição con el Fórum Nacional de Participação Popular).
- Castoriadis, Cornelius (1983) "Introdução: Socialismo e sociedade autónoma". En: *Socialismo ou barbárie: O conteúdo do socialismo*. São Paulo, Brasiliense.
- (1990) "La révolution devant les théologiens". En: *Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe iii*. Paris, Seuil.
- Herschmann, Micael (2000) *O funk e o hiphop invadem a cena*. Rio de Janeiro, UFRJ.
- Lerrer, Débora (2003) *Reforma agrária: Os caminhos do impasse*. São Paulo, Garçon.
- Moisés, José Álvaro; MartínezAlier, Verena (1985) "A revolta dos suburbanos, ou: 'patrão, o trem atrasou'". En: Moisés, José Álvaro et ál.: *Contradições urbanas e movimentos sociais*. Rio de Janeiro y São Paulo, CEDEC/Paz e Terra.
- Nunes, Edíson (1985) "Inventário dos quebraquebras nos trens e ônibus em São Paulo e Rio de Janeiro, 1977-1981". En: Moisés, José Álvaro et ál.: *Cidade, povo e poder*. Rio de Janeiro y São Paulo, CEDEC/Paz e Terra.
- Passa Palavra (2013a) "20 de junho: A Revolta dos Coxinhas". Recuperado el 21 de junio de 2013 de <<http://passapalavra.info/2013/06/79726>>.
- (2013b) "Uma nação em cólera: a revolta dos Coxinhas". Recuperado el 24 de junio de 2013 de <<http://passapalavra.info/2013/06/79985>>.
- Ribeiro, Ana Clara Torres e Grazia, Grazia de (2003) *Experiências de orçamento participativo no Brasil (1997 a 2000)*. Petrópolis, Vozes (en coedição con el Fórum Nacional de Participação Popular).
- Rocha, Janaina et ál. (2001) *Hip-hop: a periferia grita*. São Paulo, Fundação Perseu Abramo.
- Rodrigues, Glauco Bruce (2009) «Quando a política encontra a cultura: A cidade vista (e apropriada) pelo movimento hip-hop». *Cidades*, vol. 6, n.º 9, pp. 93120.
- Sader, Eder (1995) *Quando novos personagens entraram em cena. Experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo: 1970-1980*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- Souza, Marcelo Lopes de (2000) "Para que serve o orçamento participativo? Disparidade de expectativas e disputa ideológica em torno de uma proposta em ascensão". *Cadernos IPPUR/UFRJ*, nº 2, ago./dez. 2000 (publicado en 2001), pp. 12342.
- (2006) *A prisão e a ágora: reflexões em torno da democratização do planejamento e da gestão das cidades*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- (2012) "Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese?". En dos partes, recuperadas el 27 de abril de 2012 de <<http://passapalavra.info/?p=56901>> y el 4 de mayo de 2012 de <<http://passapalavra.info/?p=56903>>, respectivamente
- Tatagiba, Luciana (2002). "Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil". En: Dagnino, Evelina (org.). *Sociedade civil e espaços públicos no Brasil*. São Paulo, Paz e Terra.

Territorios urbanos en disputa.

Telles, Vera da Silva y Bava, Silvio Caccia (1981) "O movimento do ônibus: a articulação de um movimento reivindicatório de periferia". *Espaço & Debates*, n.º 1, pp. 77101.

Zibechi, Raúl (1999) *La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación*. Montevideo, Nordan Comunidad.

— (2003) *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*. La Plata y Montevideo: Letra libre y Nordan Comunidad.



los movimientos debaten

MÁS VIVIENDA SIN GENTE
NI GENTE SIN VIVIENDA
LIT. AND. SUKUM - COVIL

nitrapunto

LA MALA

FUCVAG

La vivienda: ¿derecho humano o mercancía?

Pablo Caballero, Fernando Zerboni

En la actualidad, la vivienda nos plantea debates de fondo que debe dar la sociedad como tal para encarar este tema con madurez y perspectiva social que nos permita crecer hacia un futuro mejor.

Este tema puede ser visto, principalmente, de dos formas entre sí contradictorias. Podemos concebir la vivienda como un derecho social, como una necesidad humana fundamental y, por tanto, su solución debería implicar a la sociedad en su conjunto y al estado fundamentalmente. Por el contrario, si la consideráramos por su valor de cambio (como mercancía) y no por su valor de uso (como un derecho), con esa visión lucrativa, ignoraríamos directamente la satisfacción de ese derecho.

La vivienda como satisfacción de un derecho humano debe ser considerada como un bien de uso y no como una mercancía.

Como bien de uso, la vivienda asegura fuertemente a las familias su calidad de vida y el sentimiento de seguridad personal y colectiva; afianza y reconstruye la trama social, ligándolas al suelo, a su barrio, a su ciudad, a su país, consolidando el sentido de pertenencia. Desde este punto de vista, para muchas familias lo importante es tener un techo bajo el cual vivir, pelear y construir su futuro que, sin eso, aparece muchas veces como incierto. La vivienda, como bien de uso, es un elemento satisfactor de necesidades. Cuando se la ve como una mercancía, no apunta a la satisfacción de un derecho humano, ya que solo resulta accesible a los sectores pudientes de la población.

Las familias para las cuales la vivienda cumple con la satisfacción de un derecho humano, que privilegian su valor de uso por sobre la idea de mercancía, deben ser apoyadas por el estado en la defensa de su permanencia en esa vivienda. Al asumir ese compromiso, el estado debería condicionar su ayuda al uso que se realice. Por tanto, toda vivienda apoyada por el estado no debería ingresar libremente al mercado. El estado, en defensa de la sociedad, debe establecer las condiciones bajo las cuales son intercambiadas, y quienes sienten que la vivienda es un reaseguro para su vida deben estar dispuestos a aceptar esos condicionamientos. Y no se trata de dividir el mercado y las políticas correspondientes en las diferentes formas de propiedad; entre propietarios colectivos y propietarios individuales. La línea de división para las políticas del estado debe estar entre aquellos para quienes la vivienda es un bien de uso y

aquellos que la consideran una mercancía.

Si entendemos que el estado debe bregar por la satisfacción del derecho a la vivienda, deberíamos plantearnos que todos aquellos, más allá de la forma de propiedad, que accedan a la vivienda a través de su apoyo deben aceptar que, en el caso de tener que transferirla por razones de fuerza mayor, esto se realice bajo determinadas condiciones impuestas por el mismo estado que los apoyó en su obtención. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas de usuarios, la ley establece que deben transferir sus viviendas a través de la cooperativa y por el monto de capital social acumulado. Deberían aplicarse condiciones similares para los propietarios individuales, con las adaptaciones pertinentes. La argumentación es clara: aquellos para quienes la vivienda es un bien de uso deben ser respaldados, en caso de ser necesario, por el estado; pero no se puede reclamar alguna forma de subsidio y después venderla especulando con una ganancia, porque esto desvirtúa el sentido del subsidio —que existe para hacer efectivo el derecho a permanecer en la vivienda, no para hacer negocios—. En este caso, algún organismo del estado, que podría ser la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), debería ser el fiscalizador del cumplimiento de estas condiciones, lo cual no es difícil de aplicar para todas las viviendas construidas a partir del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (FNVyU)¹. Cada vez que una vivienda construida a partir del estado se comercializa, los futuros destinatarios consultan la deuda; en ese momento se debería controlar en qué forma se produce el intercambio, y en el caso de que se escape a las normas establecidas, el actual o el futuro destinatario se deberá hacer cargo de la deuda subsidiada.

Para muchas familias la vivienda es una inversión, una forma de ahorrar; aquello de “ahorro en ladrillos que es lo más seguro”. Por lo tanto es bastante perverso que, en cualquiera de los casos, el estado aporte algo para que luego hagan un negocio. Otro ejemplo lo constituyen las familias que adquieren viviendas en el marco de la Ley de Inversiones y que son subsidiadas por el estado; también estas deberían comercializar sus viviendas según las condiciones por este impuestas. Una posibilidad sería que en tal caso devuelvan el subsidio recibido, o que se la vendan al estado como se hace en Cuba, en este caso por el precio que se pagó.

Para esos muchos uruguayos que entienden la vivienda no como un negocio ni una inversión, sino como un reaseguro para su vida, tener el techo satisface una necesidad básica y cambia su visión del mundo. Desde esa óptica es que debemos pensar la propuesta: los propietarios individuales, para quienes la

1 N. del E.: Por derogación del artículo 81 de la Ley N.º 13.728, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), se convirtió, a partir del 27 de diciembre de 1991, por la Ley N.º 16.237, en Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (FNVyU).

vivienda es un derecho humano ante todo, deberían ser apoyados de la misma manera que los colectivos, pero aceptando que la transferencia de la vivienda se hace según lo establecido por el estado. Esta propuesta puede ser un parteaguas entre quienes ven la vivienda como lugar de cobijo para su familia y quienes la ven como una inversión. Aquellos que ven la vivienda como una forma de ahorro, si hacen un negocio, que pongan la plata o que devuelvan el apoyo que recibieron.

Decir que pensamos y trabajamos por una sociedad con justicia social implica decir que trabajamos y luchamos por una sociedad en la que, por lo menos, la propiedad individual que se subsidia, esté fuertemente reglamentada por el estado y no se rija por las leyes del mercado.

Esta visión aporta en varios terrenos:

1. Se avanzaría en el control de la propiedad privada por parte del estado, lo cual no nos desagrade si seguimos sosteniendo que justamente la propiedad privada es la base de la explotación capitalista.
2. Es un avance en el tema de la vivienda, reforzando la idea de concebirla como un derecho humano.
3. Suma a la concepción de nuevas formas de encarar el tema de la vivienda.
4. Desataría nuevos debates que ya están planteados, como: ¿qué sucede con las viviendas que el estado regala, como los Núcleos Básicos de los noventa, por los cuales no se cobró nada o casi nada? Estamos de acuerdo en que esas familias quizás no puedan pagar, pero no deberíamos entregarles un bien que luego comercialicen.

Hoy, debido al trabajo realizado en las últimas dos administraciones, el estado está en condiciones de transitar por esta vía. Por supuesto que se va a resistir la estructura, porque todo crecimiento duele. Se van a resistir también las cabezas. Esta propuesta crea una fuerte afirmación entre todas las familias que acepten que la vivienda no es un negocio sino un bien de uso y estén dispuestas a comprometerse en ello con el estado. Esta es la idea central a debatir y debería ser la base ideológica de una política de estado en un tema en el que durante años, pese a contar con una de las leyes de vivienda más avanzadas del mundo, la política de sucesivas administraciones no ha progresado, sino que ha transferido fondos a las empresas constructoras, sin preocuparse de la suerte de las familias que luego habitaban las viviendas. Durante la dictadura tenemos varios ejemplos, como el complejo habitacional Euskal Erría o Complejo América.

Los gobiernos democráticos no transitaban por vías muy diferentes, y si hay

dudas, recordemos algún ex jerarca construyendo viviendas para su familia en Punta del Este con recursos del FNVyU. Luego, en la administración Lacalle, con los Núcleos Básicos Evolutivos para pobres, de treinta metros cuadrados, y más tarde los irónicamente llamados “mejorados” de treinta y dos metros cuadrados, no cambiaron demasiado las cosas. Por eso, la salida para los trabajadores fueron los asentamientos irregulares, los cantegriles. El segundo gobierno de Sanguinetti hizo la vista gorda ante la ocupación de terrenos para la formación de esos asentamientos irregulares, como forma de descomprimir el tema de la vivienda. Una vez consolidados los asentamientos, el estado debe acercar servicios, siendo este también un negocio para las grandes empresas constructoras. Y otra vez el estado es quien se perjudica, en una palabra todos nos perjudicamos, pues la plata sale de nuestros bolsillos; porque quien lleva agua, saneamiento y calles a estos barrios en la periferia es el estado, y para ello le paga a las empresas privadas, quienes hacen un negocio redondo. Por un lado, el estado construye viviendas de interés social de mala calidad y a precios exorbitantes beneficiando a las empresas, y por otro, permite que los trabajadores y las familias en condiciones económicas complicadas ocupen. Luego paga a las empresas para que acerquen servicios, obra loable y necesaria por parte del estado, pero que beneficia a los mismos de siempre y solo un poco a quienes han sufrido la marginalidad y no por esa regularización dejan de sufrirla. El estado encara estas regularizaciones siguiendo las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito que ponen plata, pero no se les ocurre apoyar un plan de vivienda basado en la generación de instrumentos de largo plazo y con la participación de la ciudadanía. Estas recomendaciones coinciden con los intereses de las empresas, quienes por supuesto las apoyan.

La problemática de la vivienda y el hábitat no es de fácil solución, es un tema que se remonta a décadas de falta de políticas racionales y justas. La actual administración lo ha priorizado, y apoyamos que lo haya hecho más allá de los peros. Ha tomado en cuenta la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones y ha priorizado la construcción de viviendas, a través de las organizaciones sociales o de la autoconstrucción asistida, complementando la acción del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) con el Plan Juntos.

Lo que esta administración no ha hecho es modificar la forma en que el estado encara el tema de la vivienda. Desgraciadamente, en el único terreno en que se ha legislado es aquel en el que se permite la participación de las empresas en la construcción de viviendas de interés social. Nos referimos a la Ley de Promoción de Vivienda de Interés Social, ley que nuevamente beneficia a

las empresas en detrimento del estado. Como alguien dijo: “ahora nos quieren convencer de que una vivienda de interés social vale 120.000 dólares”.

Uno de los caminos para modificar la distribución de la riqueza es que el estado adapte su legislación, para que se destinen recursos de quienes tienen para la construcción de vivienda, a los que nada tienen. En vísperas de un año electoral y un nuevo cambio de administración, es vital e imprescindible que el movimiento popular debata con las fuerzas políticas y la institucionalidad, y plantee la pelea por generar herramientas que permitan profundizar y consolidar una política de vivienda tendiente a respaldar a los más débiles. En esta coyuntura, este planteo deviene en estratégico y debe ser un debate que a su vez cambie los puntos de vista desde los cuales se analiza la situación y que tienda a aportar, como ya dijimos, a una mejor distribución de la riqueza. Entendemos que en esta administración se deberían generar instrumentos que refuerzan las posibilidades del FNVyU, que generen tierra urbana y que permitan continuar con la atención de la vivienda más allá del color del gobierno de turno.

El problema de la vivienda y el hábitat de los sectores de bajos ingresos es, sin duda, muy complejo e integra aspectos sociales, económicos, legales, urbanísticos y de servicios, todos los cuales están fuertemente entrelazados. No es solo un problema de vivienda, es también, y principalmente, un problema de hábitat. La solución, a su vez, incide poderosamente sobre otras dimensiones a considerar: salud, educación, empleo, inclusión social. Es la forma de arraigar a nuestros hijos al país, de combatir la droga y de ayudar a la concreción de un trabajo digno, pues todos sabemos que cuando nuestra referencia de vivienda es un asentamiento, ya estamos hipotecando nuestra solicitud de trabajo.

La vivienda tiene una centralidad que debería preocupar a todo el país, por eso debemos debatir sobre ella: las organizaciones sociales, la clase política (de todos los partidos), la academia en general y la institucionalidad en su conjunto. Debemos plantear una discusión sin tapujos de la que participen todos aquellos que estén dispuestos, en la que se analice cómo atacar los problemas vinculados con la vivienda y, de esa manera, se edifiquen instrumentos que luego, contando con la voluntad del oficialismo y la oposición, puedan hacerse realidad. Solo sobre esta base comenzaremos a pensar y proponer una verdadera reforma urbana, por lo que aspiramos a que una de las conclusiones del debate sea la conformación de un espacio de construcción urbana, necesario para generar una ciudad inclusiva.

Ahora bien, la mayor parte de las veces que debatimos sobre la vivienda de interés social aparece el fantasma de la recuperación del capital invertido: No podemos pensar en políticas de vivienda para familias -objetivo del FNVyU- con

la lógica bancaria típica del mercado capitalista. Si queremos hacer del derecho a la vivienda un derecho real, la construcción de vivienda de interés social tiene que ser una inversión que la sociedad haga para mejorar el hábitat de su población, más allá de los recursos que los diferentes sectores tengan. La base de ello debe ser que las familias devuelvan lo que puedan, de acuerdo a su poder adquisitivo y su composición, brindándoles a todos una vivienda digna. Sin entender este concepto todo lo demás se dificulta mucho.

Una de las principales cosas que debemos debatir es el acceso y el uso del suelo urbanizado. Esto ocupa un lugar central al considerar el derecho a la vivienda, porque el suelo escasea o, directamente, no existe en las cantidades necesarias; y frecuentemente su precio o condiciones de financiamiento están muy lejos de las posibilidades de la población de menores recursos. En el caso de las cooperativas, en la actualidad tenemos muy limitadas las posibilidades de acceso al suelo. Comencemos por la más compleja de todas estas posibilidades: la compra de un terreno en el mercado. Más allá de que esta opción se dificulta por el hecho de que el precio de la tierra en el mercado fluctúa según los períodos de crisis o bonanza, existen otros factores que complican, como es el caso del saneamiento. En casi todas las localidades del interior del país, las cooperativas no solo deben comprar el terreno, sino que también deben hacer frente a la construcción del saneamiento con fondos propios.

Está claro que las cooperativas compran el terreno con el dinero del préstamo, pero no saben cuánto van a demorar en acceder a la primera cuota para abonar el terreno. Esto transforma en algo muy riesgoso firmar un boleto de reserva, pues se corre el peligro de que este se venza antes de que se haya obtenido el préstamo y se pierda el dinero de dicha reserva; esto se puede evitar si el propietario está de acuerdo en esperar el tiempo necesario para que la cooperativa acceda al crédito, algo muy difícil de obtener. El otro camino es que se realice un acuerdo de compra en plazos, fijando, desde el comienzo, una cuota accesible para los futuros usuarios de las viviendas. El riesgo más importante es que, mientras se espera el préstamo, algunos socios abandonen el proyecto y se reduzca la capacidad de pago de la cooperativa, que puede recuperarse si ingresan nuevos socios, pero, mientras tanto, los que quedan deben pagar toda la cuota y, si esto no es posible, se corre el riesgo de caer en mora y perder el terreno, y con ello lo invertido. La otra posibilidad es obtener la adjudicación de un terreno fiscal y su custodia hasta el momento de obtener el préstamo, y pagarle al organismo propietario. Por este camino, además de no correr el peligro de perder el terreno, el valor que se paga es un valor fijado con sentido social y no al precio de mercado, que suele ser siempre mayor;

para esto debe existir la voluntad política del estado de destinar tierra para la construcción de viviendas de interés social y la disponibilidad real de tierra en condiciones.

Estos dos aspectos se mezclan a menudo. Muchas veces la voluntad política existe, pero se entorpece con la dificultad para conseguir tierra en condiciones, sobre todo si el único mecanismo al que se apela es el mercado. Ya es viejo, y debería ser sabido, que el mercado no lo resuelve todo. El mercado no ha logrado resolver, en ningún país, el problema de la tierra urbana con servicios para construir vivienda de interés social. Por eso, es necesario gestar instrumentos que posibiliten la obtención de tierra urbanizada por parte del estado. En este sentido, la Ley N° 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, votada en el año 2008, crea los instrumentos para que el estado pueda cumplir con dichas adquisiciones a menores costos. Esta ley es considerada hereje por parte de importantes sectores del espectro político y de los sectores capitalistas, y algunos de los instrumentos que ella genera son rechazados porque se entiende que vulneran la "sacrosanta" propiedad privada.

¿Por qué es hereje esta ley? Porque limita el derecho de propiedad por razones de interés general, impone deberes a la propiedad del inmueble: usar; conservar; proteger el medio ambiente, la diversidad y el patrimonio cultural; edificar; transferir; cuidar y rehabilitar; restituir. Además establece que solo se indemniza si se expropia o se limita el derecho de propiedad, con daño cierto, y plantea el derecho de las intendencias municipales a participar en la plusvalía derivada de las acciones de ordenamiento territorial. Por otra parte prevé reservas de suelo para vivienda de interés social (del 10% al 30% de las que se construyan en programas residenciales); declara de utilidad pública la expropiación de inmuebles necesarios para los planes de ordenamiento territorial de aquellos titulares que hayan incumplido sus deberes territoriales y los tengan abandonados por más de diez años; baja de treinta a cinco años el plazo para prescribir terrenos poseídos, con el fin de vivienda, por familias pobres. Para aplicar esta normativa se hace necesario que exista voluntad política y que se destinen los recursos necesarios. Por lo pronto, a cinco años de aprobada la ley, parte sustancial de ella aún no está reglamentada.

Existe también un proyecto de ley sobre inmuebles abandonados impulsado por los diputados Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni, basado en la Ley de Ordenamiento Territorial, que determina que los predios abandonados puedan pasar al estado. Está claro que se dificulta la aprobación de este proyecto por los poderosos intereses que afecta. Aquí también se necesita voluntad política.

Pero hay más:

El estado dispone de tierra en los ministerios y puede apropiarse de la tierra de los entes, sin embargo, estos mecanismos no se utilizan para resolver las necesidades de suelo y avanzar en la democratización de la ciudad.

El centro de Montevideo está quedando vacío, pues los sectores pudientes se trasladan a las afueras de la ciudad, a barrios privados, y los predios o edificios vacantes no se reciclan para la construcción de viviendas de interés social.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establece que las barracas de acopio no pueden estar en el centro de la ciudad, pero no se las obliga a trasladarse más allá del anillo perimetral de Montevideo como debe ser. Se podría disponer de esos terrenos, quizás canjeando tierras con el estado, quedando tierra urbanizada barata para construir.

Existen edificios vacíos que no se pueden reciclar para viviendas, pues son propiedad privada y su endeudamiento los hace inaccesibles —tenemos en cuenta que parte de ese endeudamiento es con el estado y los trabajadores—.

Sobre todo esto el estado debería tomar medidas y, si no hay instrumentos legales para ello, generarlos. Los recursos económicos son la médula de un plan de vivienda sostenible a largo plazo. Hoy los recursos con que cuenta el FNVyU son de asignación presupuestal. Esto quiere decir que se votan en el parlamento con el presupuesto de cada quinquenio. Así, los recursos dependen de la voluntad política de cada gobierno. Esto es así desde la primera administración del Frente Amplio, en la cual se eliminó definitivamente el impuesto a los sueldos al crearse el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), desapareciendo así el aporte directo de los trabajadores al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Con anterioridad a 1992, el Fonavi se nutría con el 1% de los trabajadores y un monto equivalente volcado por las patronales (privadas y públicas). En 1992 se eliminó el aporte de las patronales privadas, quedando el Fonavi solo respaldado por los aportes de los trabajadores. La administración Vázquez, al crear el IRPF como único impuesto a los ingresos, eliminó el aporte directo de los trabajadores y los recursos pasaron a ser suministrados exclusivamente a través del presupuesto.

Creemos que para desarrollar una política de vivienda seria y sostenible en el tiempo (que no sea un parche más) es necesario fortalecer al FNVyU con recursos directos, para dar una mayor garantía y permitir una planificación cumplible. Desde luego, que los recursos sean de asignación directa no quiere decir que no se puedan destinar a otro fin, que el estado no los pueda desviar; eso siempre es posible, pasó durante la dictadura y también en democracia, pero si se desvían se pueden reclamar. Actualmente lo único que podemos reclamar es que se mantengan, por lo menos, los recursos históricos del plan de vivien-

da. Cuestión difícil si las hay. Creemos que debemos volver a la situación en que la vivienda disponía de determinados recursos directos para satisfacer este derecho. No hablamos de un nuevo impuesto a los sueldos —la existencia del IRPF lo impide—, pero existen múltiples sectores que podrían colaborar con la vivienda, como por ejemplo:

- Incluir un impuesto muy menor a la producción —creemos que esto no alteraría la imagen del Uruguay como país inversor—.
- Gravar el juego. Esto no afecta la inversión productiva y significa importantes montos de dinero.
- Gravar la vivienda vacía (excepto la de temporada), con destino al FNVyU, con lo cual se combatirían varios frentes a la vez.
- Gravar la tierra urbanizada improductiva. No solo con la contribución inmobiliaria, sino con un impuesto directo para el FNVyU.
- Reinstalar, como recurso del FNVyU, el aporte patronal del sector privado equivalente al 1% de los salarios abonados.
- Eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la construcción de vivienda de interés social; impuesto que no pagan los inversores privados, pues los exonera la Ley de Promoción de Vivienda de Interés Social. Los sectores populares son los mayores constructores de ciudad del país, por ende deben recibir ayuda del estado, por lo menos en la exoneración de impuestos.
- Emitir valores negociables para el financiamiento del plan de vivienda, en Unidades Reajustables (UR) o Unidades Indexadas (UI), y con una tasa de interés adecuada, de acuerdo a las tasas medias de rentabilidad de colocaciones en la plaza. Estos bonos se rescatarían en plazos máximos de diez o doce años y tendrían la garantía hipotecaria de las colocaciones que se realicen y, subsidiariamente, la garantía del estado. Para la operatoria correspondiente se debería aprovechar la experiencia y las potencialidades que posee el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
- Utilizar los fondos de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Hoy es posible a través de un fideicomiso con garantía estatal y existen todos los instrumentos para respaldar esta propuesta. Esto se hace en Brasil, desde hace muchos años, con el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) y es la base del sistema brasileño de crédito para vivienda social.

La combinación de estas medidas, con otras que surjan del debate nacional, puede permitir la construcción de una política de vivienda que trascienda a lar-

go plazo. Que estas medidas se consoliden en la estructura del estado y sean puestas en marcha a la mayor brevedad posible, requiere del seguimiento por parte de las organizaciones sociales y de la voluntad política de los responsables nacionales.

Pero así como es necesario pensar en las fuentes de recursos, también debemos pensar en generar un indicador real del costo de la vivienda de interés social. Es imprescindible que se genere una forma de medir por cuánto dinero construimos realmente las organizaciones sociales y los autoconstructores. Como dice el promotor inmobiliario, Julio Villamide, recién ahora, con la Ley de Promoción de Vivienda de Interés Social, los inversores construyen para la clase media; por deducción entendemos que antes construían solo para la clase alta. Entonces, en el promedio, al tomarlos como base de las estadísticas, no se refleja cabalmente la realidad; en el cálculo del Índice del Costo de la Construcción (ICC) nunca se tomó en cuenta el costo de construcción de las organizaciones sociales, siempre se calculó en base a la producción formal.

El derecho a la permanencia hoy está vigente, para todas las familias que reciben financiamiento del FNVyU, a través del otorgamiento de subsidios para quienes no puedan afrontar la cuota, pero no por ley, sino por decreto. Debemos transformar el Subsidio a la Permanencia (SP) en un derecho respaldado por ley; debe existir una ley de subsidios a la permanencia para integrantes del FNVyU, lo que daría garantías, pues no permitiría su modificación a través de una simple medida administrativa, como ocurre hoy.

Pero no alcanza con esto, también hay que trabajar fuerte para lograr la regulación del mercado inmobiliario. Nuestro país vivió, desde 1974, un proceso de desregulación absoluta, en el que el estado pasó de ser protagonista en el control de ese mercado, a ser solo un agente más de financiamiento para los sectores pudientes o la clase media alta, dejando que la libre competencia fuera la política reinante en el área. La dictadura fue uno de los principales impulsores de esta política de desregulación, eliminando controles de precios, pero no de garantías, para los capitales. Se generaron herramientas como garantías de alquileres a través de la Contaduría General de la Nación o del Mvotma, logrando así dar seguridad a los propietarios del cobro de sus alquileres, pero no controlando los precios de esos alquileres ni las garantías de permanencia para el inquilino buen pagador.

Si analizamos todas las áreas de la vida de una familia, en el rubro vivienda es donde menos interviene el estado como ente regulador o testigo; en cambio en el resto de las áreas hay formas o controles del mercado que intentan favorecer o proteger al indefenso. Desde hace muy poco el mercado de alquileres

sufre una intervención del estado en sus ganancias; era uno de los pocos sectores que no contribuía de ninguna manera a las arcas fiscales, pues más allá del impuesto al patrimonio, no pagaba IVA al ingreso ni otro tipo de impuesto.

En 2007, a través de la reforma tributaria, los propietarios comienzan a aportar el 10% de sus ingresos por arrendamientos, pero al no haber control de precios, este porcentaje fue trasladado automáticamente a los inquilinos, al igual que el aumento en la contribución inmobiliaria.

Si analizamos cómo afecta el costo de la vivienda a los ingresos de los trabajadores, vemos que, entre 2005 y 2012, los alquileres han sido el factor que más aumentó y que más golpea sobre la recuperación salarial de los sectores populares. Durante este período la recuperación salarial de los trabajadores fue del 36%; de esa recuperación, el 12,3% se pierde por el aumento del costo de la vivienda. El problema del incremento de los precios de los alquileres no es por la escasez de viviendas en la trama urbana, sino por la escasez de viviendas para alquilar, por la retención que hace el mercado o porque no están en condiciones.

Como consecuencia de la falta de intervención activa del estado en las políticas de arrendamientos, la especulación inmobiliaria reina y controla el mercado; solo se realizan políticas paliativas, brindando soluciones habitacionales (construcción de viviendas) a sectores excluidos por el mercado y en proporciones totalmente insuficientes. En la actualidad, está regularizado solo el 53,8% del mercado de alquileres; el resto alquila sin contrato, con contrato precario o a algún amigo o familiar. Esto significa dos cosas: que casi la mitad de los alquileres en Uruguay no pagan impuesto alguno por no estar registrados y que, a su vez, el inquilino pierde las garantías legales al no haber contratos, resultando, la más de las veces, extorsivos o usureros. Esta cuestión se constata en los sectores populares que no pueden acceder a las garantías debido a que no trabajan registrados en la seguridad social, figuran por menos de lo que ganan, ganan muy poco o trabajan por la cuenta.

Por todo esto proponemos la aplicación de un impuesto progresivo a quienes posean una o más viviendas vacías, que no incluya las viviendas de temporada, con el objetivo de que dicha recaudación sea volcada al FNVyU. Para ello se debe generar un registro nacional de viviendas donde todas, incluidas las de temporada, sean registradas bajo la titularidad de alguna persona o empresa debidamente documentada. La no inclusión de una vivienda en este registro deberá generar graves multas económicas. Este organismo tendrá la obligación de aplicar un impuesto a las viviendas vacías, exonerando la vivienda única o la de temporada que sea debidamente documentada. Esto, a su vez, generará un

censo de cuántas viviendas tiene cada persona o empresa. Una vez realizado el registro, todos aquellos propietarios que posean más de una vivienda deberán disponer de un certificado anual de pago o de una constancia de exoneración del impuesto para cada una de sus viviendas. Se podría realizar la recaudación del IRPF, emulando lo que realiza el Banco de Previsión Social (BPS) con la Dirección General Impositiva (DGI) para las personas físicas. Ejemplos:

- A. Una vivienda con hasta cuatro meses sin habitar estará exonerada de impuestos.
- B. De cuatro a diez meses, pagará el 10% del promedio de alquileres de la zona residencial aplicada para la contribución inmobiliaria o extraída de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- C. De once a diecisiete meses pagará el 20% del promedio de alquileres de la zona.
- D. De dieciocho a veinticuatro meses pagará el 30% del promedio de alquileres de la zona.
- E. Más de veinticuatro meses pagará el 50% del promedio de alquileres de la zona.

Para poder realizar cualquier compromiso legal sobre la vivienda (hipoteca, compraventa, etcétera) se deberá presentar el documento que certifique que se está al día con el organismo (que podrá crearse o adaptar alguno ya existente). En caso de que este proceda a la ejecución por deuda de impuestos, tiene el derecho a ser el primer indemnizado, y lo recaudado por dicho fin será volcado al FNVyU. Los costos de funcionamiento de este nuevo organismo serán descontados de la propia recaudación del impuesto. Todo trabajador que esté inscripto en el BPS tendrá derecho a usar la garantía de alquileres que brinda, estando la empresa obligada a descontar directamente del sueldo o, en su defecto, si tuviera algún seguro de enfermedad o pensión, serán volcados al organismo para ser depositados al propietario. Se eliminarán de esta manera contratos chatarra o basura, ilegales o usureros. Todos los años los propietarios deben renovar el certificado de pago del impuesto, registrando los nuevos contratos o abonando el correspondiente impuesto. Así lograríamos mejoras como las siguientes:

- Que todos los trabajadores cuenten con una garantía de alquiler.
- Recaudar fondos directos para el FNVyU de la especulación inmobiliaria.
- Lograr un registro de propiedades y propietarios.
- Bajar el precio de los alquileres ingresando las viviendas vacías que hay dis-

ponibles o haciendo que estas paguen impuestos que beneficien a los más necesitados.

- Efectivizar los recursos del estado.
- Regularizar y controlar el mercado inmobiliario y los precios de los alquileres.

Solo un gran debate nacional, donde todos los componentes de la sociedad se comprometan, puede lograr las medidas que, con fuerza de ley, pongan en práctica un plan con estas características, que nos permita pensar en una verdadera política de estado en la materia.

Territorio, comunidad y autonomías en movimiento. Movimiento de Pobladores en Lucha

Henry Renna

Comunidad y territorio

Una bella lamien¹ nos compartía que la vida buena (küme mogen), en armonía con el cuerpo, la comunidad y la naturaleza, era la misma que permitía la defensa de los males del mundo. Era la potencialidad de la fuerza de la comunidad la que alejaba a los malos espíritus. La posibilidad de resistencia y avance era la misma virtud de la colectividad organizada. Las energías que generaban, las fuerzas que desplegaba, la creatividad que desbordaba, eran garantía de la vida.

Hoy es esa vida comunitaria la única posibilidad de eliminación de los males del estado y del capital, de su desposesión violenta y de su política de la muerte. Es, la comunidad, el último bastión de defensa de la humanidad frente al modelo. Para nosotras y nosotros, la comunidad es el presente y el futuro del socialismo. Es esa práctica, ese poder hacer de los de abajo, de los nadie, de los nunca, de los sin, la posibilidad de disolución del otro poder, de ese mal desarrollo, su mala vida y sus malos gobiernos. Y más importante, es ese poder hacer el que prefigura esa vida otra, el que dibuja en el presente la organización libertaria del mundo, anticipándose a su llegada. Ese poder, popular y comunitario, solo puede desplegarse libremente en una cancha propia, no puede desplegarse con naturalidad en una cancha ajena, como es el estado por ejemplo, de ahí la importancia del territorio. Para la comunidad es su sostén, para el socialismo su materialidad.

El territorio es y será geopolíticamente decisivo en la lucha de clases, en tanto es el espacio donde podemos sustraernos del dominio del tirano, y en cuanto es el lugar donde la comunidad puede organizadamente construir su nueva población, su ciudad futura, en independencia de sus opresores.

Precisamente, hemos caminado en esa dirección los últimos siete años, transformando los vacíos urbanos de desprotección social y de desposesión económica –de la periferia y del centro de la ciudad– en grietas territoriales

1 N. del E. Lamien, palabra mapuche, significa hermana

emancipatorias que, a partir de las prácticas autogestivas rechazan el orden dominante y, paso a paso, van preconfigurando relaciones materialmente distintas a las dominantes. Es un esfuerzo por recuperar la soberanía sobre el territorio, una lucha donde la clase, caminando en la construcción de autonomía, le arrebató al capital y al estado el control de la producción del hábitat, recupera para sí el acto de poblar, de ocupar nuevamente un espacio, un lugar en la ciudad y construir un nuevo orden de dignidad.

Política de las autonomías

La organización y autoeducación de la clase en sus territorios es, pues, hoy día, el punto de partida estratégico para la revolución social y política. Este es el espacio potencial desde donde construimos zonas autónomas liberadas del poder del tirano y desde donde se emprenden una serie de acciones colectivas que cuestionan, transgreden y, en ocasiones, superan la hegemonía. En el territorio está nuestra potencialidad para construir comunas libres, la posibilidad para una autonomía radical en la ciudad.

Si bien –por arriba– ciertos sectores críticos al modelo han logrado instalarse en el poder institucional marcando en la brújula una suerte de giro a la izquierda, en la región –por abajo– las características de las luchas trascienden de una polarización política, y más parece ser un quiebre respecto de la política misma de centralidad estatal de las izquierdas y el embrión de una nueva política emancipatoria. Una política de las autonomías.

El auge de esta forma de lucha, en Chile y América Latina, junto con muchos otros factores, es proporcional a la crisis del sistema de representación y la crítica a las formas tradicionales de mediación (democracia delegativa), como también a la depredación de los aparatos públicos de seguridad social y de los bienes comunes (economía neoliberal). De ahí la necesidad para las organizaciones revolucionarias de imaginar y crear nuevas alternativas de participación y la imposición de soluciones concretas desde abajo. Esta gesta del pueblo, de hacer política por sí mismo y dar respuesta por sus propias manos a sus necesidades más sentidas, pone en duda la totalidad del sistema de dominio hegemónico, incluso las estrategias y tácticas que pretenden combatirlo.

En efecto, las acciones sociales y políticas de la clase hoy, como la de nuestro movimiento, se sitúan en una ruptura relativa de fondo (horizonte utópico-programático), forma (medios) y contenido (estrategia de cambio social) respecto a las formas de lucha de décadas anteriores, tales como las de corte

reivindicativo o confrontacional emprendidas por las izquierdas, ya sean progresistas o revolucionarias. De forma general, la política de las autonomías impulsa la sustitución de la estrategia de centralidad estatal por la centralidad del poder hacer comunitario como vía de construcción del socialismo. Esta política de las autonomías la entendemos como el hilo que viene tejiendo ese gran proyecto popular truncado e inconcluso de la clase. Viene a reinstalar esa vieja idea nueva germinada en la toma de La Victoria en 1957 de un socialismo que se construye a pulso, a contra marea del burocratismo leninista o de las salidas socialdemócratas de cambio social.

Siete años de lucha, autogestión y educación popular

En julio del año 2006, en la comuna de Peñalolén, nació el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), una nueva fuerza política de la clase, de los movimientos populares de Chile y de los pueblos pobres del sur. Surgido de las poblaciones, nuestras acciones no se insertan en las tradicionales demandas elevadas al estado, más bien se proyectan hacia la construcción de un poder popular y comunitario mediante la lucha, la autogestión y la educación popular; a la construcción de una autonomía territorial.

Por supuesto, cuando se trata del trabajo de base en los territorios de las ciudades neoliberales, difícilmente puede ser un quiebre a tabla rasa entre las formas tradicionales de reivindicación y los nuevos despliegues de lucha. Las profundas raíces de la dominación en el ordenamiento de nuestras ciudades lo impiden. Este peso de la trayectoria hace que, en materia de cambios, solo parezcan prosperar los procesos que, lenta pero sistemáticamente, postulan alternativas de autonomía y conquistas populares frente a las políticas neoliberales de vivienda, de ciudad y su proyecto cultural en un momento dado. Aquellos que caminan en una vía de acumulación de fuerza social, económica, política y cultural de los de abajo.

En los últimos siete años de desarrollo, el movimiento ha sido capaz de mostrarse como una continuidad de la lucha histórica de los sin casa y también como una ruptura relativa respecto de su manera tradicional de hacer política.

La experiencia del movimiento se ha desarrollado utilizando ciertos espacios de la política de vivienda (reivindicación de recursos, suelo y nuevas legislaciones), pero a la vez, avanzando con nuevas propuestas. Fuimos los pobladores y pobladoras organizadas los que conformamos en el año 2007 una alternativa habitacional: la Entidad de Autogestión Inmobiliaria Social (EaGIS)-MPL. Esta

nos permite: en materia habitacional, controlar la gestión en torno a la producción de vivienda; en materia social, abrir un proceso de radical involucramiento y control de las familias con su proyecto de vida; en materia económica, recuperar las riquezas de dicho proceso para nuestras familias; y en materia política, mostrarse como alternativa y opción para el autogobierno de los pobres. De forma permanente, estos pasos se cruzaron con la ocupación de tierra, para luego así autogestionar los proyectos. Caso paradigmático de dicha acción directa necesaria para agrietar la hegemonía capitalista, son los Inmuebles Recuperados por Autogestión (IRA) del casco histórico. No obstante, el camino es más largo. La autogestión, en esta dimensión y escala, es significativa como avance sociopolítico, pero no golpea directamente al esquema de producción capitalista; por ello, es necesario controlar el ciclo completo del proceso. Ahí nace el sueño, y luego la tarea, de conformar la constructora de pobladores, y la esperanza por inaugurar una alternativa productiva bajo control obrero desde el propio movimiento social.

A su vez, la convicción de que no hay práctica revolucionaria que sea exitosa en el tiempo si no está dotada de la producción permanente de teoría revolucionaria y de una generación de saberes que desde abajo contribuyan al nacimiento de un nuevo ser humano. Esto nos condujo en el año 2008 a crear nuestra propia alternativa educativa: el Centro de Estudios y de Educación Poblar —que a la fecha, ha impulsado el Diplomado en Movimientos Sociales Latinoamericanos y Autogestión Comunitaria—, el jardín popular Epuwen, la escuela autogestionada Paulo Freire y el Taller.

En este camino vamos construyendo nuestra alternativa, una ruta en que vamos socializando la autogestión en la comunidad, para que ella autogestione su propio socialismo.

Nuestro sur, la Vida Digna

El movimiento nace de un diagnóstico generalizado y común dentro del campo popular: las luchas por la vivienda —como toda lucha sectorial— cuando se reducen solo a una reivindicación habitacional corren el riesgo de reproducir, con su conquista, la explotación y las relaciones de dominio, viéndose transformada toda la rebeldía empleada en un engranaje más de esta cruenta maquinaria. Específicamente, la aplicación intensiva de subsidios es sostenedora de la desigualdad en el espacio urbano. Así, paradójicamente, la producción masiva de viviendas en dictadura y democracia ha provocado que la histórica lucha de

los pobres por un techo se convierta hoy en la fuente de su propia dominación. Muchos de los nuestros hoy lo tienen, pero en los extramuros de la ciudad, sin comunidad, expulsados de su tierra de origen y de su territorio de vida.

Asimismo, el acceso a la vivienda en la lógica neoliberal subsume demandas superiores sobre el hábitat y las limita a un asunto material, reduciendo la organización social a la entrega de la “llave en mano”; a la asistencia de un bien o servicio entregado por otro: el estado o el mercado. Este marco ha tenido permanencia desde 1974, instalando prácticas asistenciales, de caridad, clientelares y de control social de los gobiernos con las familias, sosteniendo además la rentabilidad de la acumulación capitalista y el sistema de dominio hegemónico.

La importancia de nuestra práctica para el movimiento de pobladores y la realidad de las resistencias urbanas en Chile, es que abre una ventana para empezar a pensar en fórmulas de mayor alcance que la obtención de la casa propia. El objetivo no es solo la vivienda, sino el poder y la capacidad de difundirlo en cada calle y pasaje de las poblaciones del país. Por eso, nuestro sueño es más grande que la casa propia, las esperanzas del movimiento por otro devenir son tan grandes que no caben entre cuatro paredes.

Los comités del Movimiento de Allegados en Lucha entendemos que solo la lucha conjunta de todos los pobladores por sus demandas es la única herramienta que nos permite lograr nuestro objetivo de vida digna. Así, la lucha por la vivienda queda incompleta si no es acompañada de la lucha por el trabajo digno, la educación digna, la salud digna, etc. Por esta razón, nuestra organización pasa a llamarse Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), “instrumento de los pobladores para conquistar luchando lo que nos niegan y así lograr la vida digna”. (Comunicado N° 1, julio 2006).

Las acciones del MPL no se limitan al techo ni se agotan en cubrir una necesidad; la casa es solo el principio de una larga y permanente lucha, la lucha por la vida digna. Es una opción de libertad que no se pide, sino que se conquista en el día a día. Representa un sendero amplio que abarca distintas dimensiones del vivir y de poblar un territorio, como la vivienda, pero también la salud, la educación, el trabajo, nuestra identidad; es recuperar todo lo que nos han reprimido y negado por quinientos años. Empezar nuestra batalla prefigurativa en todos los espacios vitales colonizados por el estado y el capital.

Para el movimiento no es vivir mejor que otros o vivir mejor que antes, sino es una opción que se expresa en el reconocimiento del comportamiento, de la diversidad y la experiencia de vida de nuestros pueblos. No representa un

ideal externo, sino un horizonte construido desde la propia gente, sus sueños, deseos y anhelos de vivir bien. De cierto modo, la idea de vida digna no es un nuevo proyecto mejor a los existentes, sino es un proyecto otro, un camino paralelo que toma la actual resistencia urbana popular a los senderos tradicionales de las izquierdas.

La vida digna, si bien es un horizonte, no corresponde a un estadio lejano que se conquistará tras la superación racional de etapas o gracias a un día mágico, sino que se construye diariamente. Esta, lejos de ser una vida que se propone alcanzar hacia delante, a futuro, el nuevo poblador y la nueva pobladora; busca sus respuestas mirando hacia atrás, al pasado, reencontrándose en el presente con su historia. No hay futuro al cual llegar, sino solo un presente que construir con el poblamiento del territorio donde nos anticipamos a ese mundo con el que soñamos. Como señala Brothch, hacemos de ese mundo que no existe, un mundo que existe todavía no.

Lucha por la vivienda y el suelo. Por una ciudad sin expulsados ni expulsadores

Las características del crecimiento que ha tenido la ciudad de Santiago la han llevado a constituirse en un espacio urbano cada vez más desigual. La comuna de Peñalolén es un buen ejemplo del proceso por el cual ha pasado gran parte del territorio urbano del país: tierras que solían acoger sectores populares, con el acelerado crecimiento por extensión (hacia afuera), se han valorizado y han pasado a ser objeto de interés y de compra para las grandes inmobiliarias. Esto ha llevado a la expulsión sucesiva de las familias debido a la progresiva construcción de proyectos de alta rentabilidad, que en la mayoría de los casos se dan en complicidad con las autoridades municipales. Este proceso se conoce como gentrificación, ya no es un desalojo por la fuerza como las erradicaciones en dictadura, sino un desalojo forzoso por la vía del mercado.

Guiado por el objetivo de permanencia territorial, el movimiento vio un espacio en la institucionalidad actual de la política habitacional, para participar en la gestión habitacional y la construcción de viviendas. La nueva política habitacional lanzada en julio de 2006, que surge precisamente por la presión de los movimientos de pobladores, propone un mediador entre el Ministerio Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y los beneficiarios del subsidio a la vivienda, papel que asume un organismo privado: la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS).

Las EGIS son personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, que

han sido autorizadas por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) respectiva para asesorar a las familias en todos los aspectos técnicos necesarios para acceder y aplicar un subsidio habitacional, percibiendo un honorario por ello. Frente a esta nueva realidad de la política pública, la pregunta que surgió fue: ¿por qué las pobladoras y los pobladores organizados no pueden asumir la gestión habitacional de sus familias? A manera de respuesta, en el año 2007 nació la primera Entidad de Autogestión Inmobiliaria Social y la Prestadora de Servicios de Asistencia Técnica (EaGISPSAT)² -MPL, a través de la cual los pobladores y pobladoras junto a profesionales rebeldes asumen la gestión social de proyectos habitacionales.

La privatización de la política, que entregaba a una empresa privada la gestión habitacional que antes realizaba la dirigencia social, esta vez, se reinterpretó por el movimiento para ocuparla como una herramienta para sus intereses. Fue la oportunidad de gestar desde abajo un sistema de organización de otro tipo, en el que el control del proceso productivo descansa en los trabajadores y pobladores organizados, y en el que los beneficios se reparten en función de las necesidades del movimiento y no en función de las tasas de ganancia del capital. Esto significa que las decisiones del destino de los proyectos y el gobierno de la comunidad son de responsabilidad exclusiva de las asambleas; esta es la antítesis del asistencialismo y de las políticas neoliberales.

En la gestión habitacional de los proyectos con la EaGIS ya no hay diferencia entre la comunidad y un tercero, entre quien gestiona el subsidio y quien se ve beneficiado por él. Ya no se reproducen, como reflexiona Zibechi en sus distintos trabajos, las formas estadocéntricas de organización, asentadas en el centralismo, la división entre dirigentes y dirigidos y la disposición piramidal de la estructura de los movimientos. Se trata de una maquinaria social que evita que surja un poder separado de la comunidad reunida en asamblea. Es el propio movimiento el que, a través de la conformación de equipos de trabajo entre dirigentes y profesionales, levanta una opción productiva autogestionaria. En efecto, uno de los mayores desafíos es socializar al máximo el conocimiento sobre el proceso de gestión habitacional entre las familias, al punto que cada miembro del hogar identifique las barreras que determinan sus condiciones de vida, los agentes que están detrás de ellas sosteniéndolas y las tácticas que debe emprender para la conquista de la vida digna.

Esta estrategia hoy tiene como meta inaugurar la primera constructora de los pobladores, lo cual permitirá articular una alternativa habitacional bajo control obrero, con alentadoras proyecciones para formas autosostenidas de pro-

2 Agregamos la "a" justamente para diferenciamos nominalmente de las EGIS privadas.

ducción popular del hábitat, es decir, el acto de poblar controlado directamente por el movimiento de pobladores.

No aspiramos a mejorar el sistema subsidiario en Chile, el MPL lucha por conquistar la administración popular de fondos fiscales. Nuestra propuesta es clara: si este estado no puede y los privados no quieren, seremos los pobladores los que construyamos nuestras propias soluciones. Cuando los pobladores construyamos nuestras propias viviendas y ejecutemos nuestras obras de urbanización dejaremos en claro que somos nosotros, y no los poderosos, los que generan las riquezas en Chile y que, por lo tanto, somos nosotras y nosotros los que debemos gobernarnos. (Comunicado N° 9, julio 2008).

Ambas instancias, EaGIS y constructora, tienen como propósito que los pobladores y pobladoras generen condiciones autónomas de producción y se constituyan en una fuerza productiva que dé solución a sus propias necesidades, construyendo con hechos los derechos que el estado no garantiza. Este proceso lo vemos como el germen del control obrero y popular sobre la producción de viviendas, que a partir de sucesivas luchas y conquistas se abre paso a un proceso que desea la progresiva administración popular de los fondos fiscales, sustituyendo sus lógicas capitalistas por nuevas relaciones sociales y de producción social.

Esta estrategia constituye una de las formas de hacer frente a las contradicciones generadas por la privatización del derecho a la vivienda instalada por Pinochet, administrada por Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, para luego ser aprovechada por la Alianza por Chile y los consorcios de la construcción. La gestión y construcción de proyectos habitacionales para los sectores más golpeados por la miseria capitalista es una tarea que debemos cumplir con una responsabilidad y eficiencia mayor. De esta forma, no tan solo derribaremos el mito de que solo los ricos saben cómo producir, sino también demostraremos nuestra capacidad de gobernar y de autogobernarnos, de reafirmar la independencia económica, política y cultural de la clase.

Hoy, en Peñalolén son 120 viviendas ya entregadas (Comunidad Las Araucarias), otras 120 con recursos autogestionados y en fase de colectivización del suelo, además de 150 nuevas familias en fase de lucha por la tierra con recursos asignados, otras 56 familias en similar situación en la comuna de San Joaquín y 30 en Santiago Centro.

Al comprender el significado de nuestro nombre, Comunidad Las Araucarias, podemos

mirar atrás y ver que somos una comunidad cargada de historia de lucha, inspirados en sueños que van más allá de la vivienda, el creer en nuestra propia fuerza y la convicción de que los que luchan ganan, logró nuestra victoria de vivir en donde nacimos y en donde hemos echado raíces de amor. (Comunicado N° 27, febrero 2012).

A este caminar se suma lo desarrollado en el año 2011 por pobladoras y pobladores del MPLFranklin que, tras ser damnificados por el terremoto y sin ninguna solución por parte de los malos gobiernos, decidieron impulsar un proceso de ocupaciónrecuperación de inmuebles estatales dentro del casco histórico. Desde allí, construyeron un sistema de vivienda transitoria, reclamando su compra para la gestión y construcción autogestionada de sus viviendas definitivas, evitando así, al igual que en Peñalolén, su expulsión hacia los extramuros de la ciudad. Así nació el 4 de mayo el primer IRA llamado Casona Esperanza y, meses después, Casona Protectora.

En los IRA existe propiedad colectiva, lo que implica que no hay propietarios, hay solo ocupantesusuarios. En los IRA hay una organización de tipo cooperativista donde cada familia conquista su derecho a habitar por cumplir con el deber de recuperar. En los IRA se practica la ayuda mutua donde cada familia contribuye con horas de trabajo en la restauración, reciclaje y habilitación del inmueble. Estamos exigiendo a gritos nuestro derecho de permanecer en la ciudad y de habitarla dignamente. De no haber respuesta por parte de los malos gobiernos y su mal desarrollo, seguiremos avanzando en este camino, con el clamor y el desacato de un pueblo consciente y organizado, en la construcción de una ciudad sin expulsados ni expulsadores. (Comunicado N° 14, mayo 2011).

Educación popular. A politizar la teoría y teorizar la lucha

La vida digna solo será posible si creamos una cultura contrahegemónica al pensamiento único dominante. Una manera diferente de comprender el mundo será la que nos enseñe nuevas formas de relacionarnos y de construir comunidad. Para sentar las bases de este largo proceso, los pobladores y pobladoras organizadas formaron su brazo educativo que hoy es el Centro de Estudios y Educación Poblara: alternativa autogestionada de educación y producción de conocimiento que se enfoca en la formación del nuevo poblador y pobladora como sujeto de cambio político y social.

Poblara es un espacio pensado para abordar dos dimensiones de nuestros

quehaceres: por un lado, para fortalecer donde haya y crear donde no, ejercicios y prácticas de construcción de autonomía en los territorios; y por otro lado, producir colectivamente saberes que guíen los nuevos caminos para la estrategia emancipatoria.

Con ese sur, el trabajo de Poblar toma dos grandes líneas políticopedagógicas. Una primera que se propone, a través del estudiar trabajando, del aprendizaje prácticoreflexivo, generar progresivamente una reconversión de las condiciones del hábitat, buscando desencadenar coyunturas de emancipación que permitan pensar nuevas maneras de habitar en la ciudad; y una segunda, enfocada en contribuir al nacimiento de una ciencia liberadora que se ponga al servicio de los procesos de transformación social, produciendo saberes de utilidad revolucionaria que apunten a romper el orden dominante. Una y otra, vinculadas dialécticamente, nos permiten politizar la teoría y teorizar la lucha.

En la práctica, y a grandes rasgos, Poblar ha desarrollado cuatro instrumentos de acción:

1. educación inicial, básica y secundaria, que tras distintos ejercicios de bachilleratos populares devino en la escuela autogestionada para jóvenes y adultos Paulo Freire en San Miguel;
2. educación preescolar con el jardín infantil popular Epuwen (Dignidad), ubicado dentro de la comunidad de pobladores Las Araucarias en Peñalolén;
3. el Taller que tiene por objetivo capacitar en oficios con una perspectiva cooperativa a jóvenes y mujeres, y que ha desarrollado a la fecha los siguientes espacios formativos: una escuela de albañilería, una de electricidad, una de diseño y otra de producción de muebles;
4. el Diplomado en Movimientos Sociales Latinoamericanos y Autogestión Comunitaria, espacio de formación teóricopolítico que ya llega a su 6.a edición en tres años, y que tiene en su haber la participación de más de 50 educadores nacionales e internacionales y más de 250 estudiantes de los cuales 150 son delegados, dirigentes o militantes de diversas organizaciones y movimientos sociales de Chile y América Latina.

El Diplomado tiene por objetivo formar sujetos, investigadores/as y educadores/as de alto nivel en ciencias sociales contrahegemónicas, centrándose en la teoría y experiencia de movimientos sociales y las prácticas de construcción de autonomía que desarrollan en diferentes campos de la vida social. El programa se orienta a la construcción colectiva de una ciencia rebelde, a la producción de conocimientos emancipatorios y a contribuir en la radicalización de las autonomías en América Latina. (Programa Diplomado 2012).

En cada uno de esos espacios se cruza esta perspectiva del aprender haciendo, pero su síntesis material se encuentra en dos esfuerzos educativos vinculados a la recuperación de tierras. Uno de ellos fue la recuperación de la Casa Poblal destinada a la creación de un centro comunitario, donde actualmente funciona el Preuniversitario Popular Sinergia, y el otro, el Centro de Autoformación Integral Ernesto Guevara. Este último corresponde a la toma de un terreno público en desuso donde se despliega el trabajo en huertas urbanas, de salud comunitaria (temazcal) y donde se ha emprendido la edificación de un aula con materiales reciclados haciendo uso de técnicas de arquitectura popular y de desarrollo de energías alternativas.

En el campo educativo, como movimiento, al igual que en materia habitacional, hemos querido superar la lógica reivindicativa y peticionista, sin quedarnos en la mera elevación de demandas al estado, por una lógica de la autonomía centrada en levantar alternativas desde los propios territorios dando respuesta nosotros mismos a las necesidades de nuestra clase. En ese sentido, apostamos por la apropiación forzosa de los roles y funciones del estado a manos de la comunidad y su sustitución por nuevas formas educativas, productivas, habitacionales, de salud libertarias, igualitarias, autónomas y anticapitalistas.

Hemos construido, desde el seno del movimiento social, un espacio para su formación, para su reflexión, para su fortalecimiento. Importante ha sido el demostrarnos que sí se puede. Que es posible la creación de un mundo otro aquí y ahora, de impulsar una política prefigurativa que dibuje en el presente el embrión de la sociedad del mañana. Que el movimiento social puede ser una alternativa, en este caso educativa, para los pueblos. Somos capaces de lograr autonomía en nuestro saber, en nuestra producción de conocimiento. [...] Por ello, ante la situación de la educación en Chile tenemos la convicción que recuperando la confianza en nuestras propias fuerzas, la autonomía educacional desde abajo es posible. A diferencia de las derechas que afirman todo al mercado y la izquierda tradicional que reivindica todo al estado, nosotros gritamos todo para la gente. Ni privatización ni estatización: autogestión. (Comunicado N° 32, agosto 2012).

Esta es una pincelada de nuestra perspectiva, un retazo de nuestra política, algunos de nuestros pasos para día a día construir ese mundo donde quepan muchos mundos.

Referencias

Movimiento de Pobladores en Lucha. Comunicado N° 1, julio 2006.

___ Comunicado N° 9, julio 2008.

___ Comunicado N° 14, mayo 2011.

___ Comunicado N° 27, febrero 2012.

___ Comunicado N° 32, agosto 2012.

___ Programa Diplomado 2012.

Poder popular, prefiguración y militancia integral en los territorios urbanos

Movimiento Popular La Dignidad

Optamos por sistematizar y reseñar brevemente algunos de los fundamentos políticos que forman parte de nuestra identidad colectiva, así como los diversos y complementarios proyectos y espacios de resistencia y prefiguración de nuevas relaciones sociales que impulsamos en los barrios y demás ámbitos donde peleamos contra toda forma de explotación y opresión. No obstante, les anticipamos que nuestra teoría corretea la práctica, por lo que más que afirmaciones contundentes, este texto constituye un humilde intento de poner en palabras lo que, a diario y no sin contradicciones, buscamos construir en cada uno de los territorios que habitamos como movimiento.

Luchamos, luego existimos

El marxista peruano José Carlos Mariátegui solía decir que era necesario corregir a René Descartes, y pasar del “pienso, luego existo” al “se lucha, luego se existe”. En nuestro caso, como parte de los movimientos piqueteros surgidos durante la segunda mitad de los años noventa en contra de las políticas neoliberales, fueron los bloqueos de calles y los cortes de ruta la acción directa que implicó el poner colectivamente el cuerpo, lo que nos parió como organización y nos dio una identidad en común. “Pan, trabajo, dignidad y cambio social” era la consigna que nos aglutinaba en aquella coyuntura de profunda desocupación y creciente pobreza que durante las primeras puebladas y piquetes se había cobrado la vida de una humilde mujer llamada Teresa Rodríguez, en la convulsionada localidad patagónica de Cutral-Có. Ese nombre sería una referencia fundamental para los movimientos que surgimos al calor de las resistencias contra el neoliberalismo en los barrios y villas de las periferias urbanas de Buenos Aires.

A partir de la influencia de las rebeliones y cortes de ruta contra los ajustes privatistas y la desocupación, lo que hoy es el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) comienza a organizarse con el nombre de Movimiento Casa del Pueblo en el año 1998, en el barrio de Villa Crespo, con la realización de un merendero,

apoyo escolar, una biblioteca y reuniones de jóvenes. Ya en 1999, empiezan a sentirse de manera aguda las consecuencias de la crisis social y política que, finalmente, desembocará en los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre de 2001. En este marco, cada vez eran más los/as compañeros/as desocupados/as que buscaban un espacio de participación y de organización. De la mano de la recuperación de un patio barrial municipal en desuso y a partir de la puesta en marcha de una colonia para los niños y las niñas del barrio, se propuso la organización de una asamblea de padres y madres, y de vecinos y vecinas de Villa Crespo. En ella se planteó la necesidad de luchar por necesidades básicas: trabajo, alimentación, vivienda y todo lo cotidianamente indispensable (zapatillas, guardapolvos, útiles escolares, entre otros). Con un petitorio que incluía estos reclamos, marchamos a nuestra primera movilización a Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ganando gran parte de lo que fuimos a buscar. Es así como se comienza a instalar la lucha y la acción directa como única metodología para obtener lo que nos corresponde y es nuestro. Luego acamparíamos veintidós días en el mismo lugar, reafirmando el crecimiento cualitativo y cuantitativo del movimiento.

En ese andar colectivo, fuimos entablando relación con otras organizaciones de lucha. La identidad y valentía piquetera se había instalado en todo el país a partir de las puebladas de Cutral-Có y Plaza Huincul (en la Patagonia), de Tartagal y General Mosconi (en el norte del país), y la necesidad de coordinación y confluencia se tornaba cada vez más imperiosa. Participamos de la Asamblea Piquetera Nacional y en ese marco comenzamos a relacionarnos con el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Nos unía la concepción marxista del mundo, la tradición de lucha y combatividad, y la caracterización del momento histórico que estábamos viviendo, a lo que se sumaba el compartir —hasta entonces— los mismos criterios de organización, que hacían foco en la democracia de base y en la dinámica asamblearia en nuestros barrios como columna vertebral del movimiento. A través de una asamblea de las/os compañeros/as que integrábamos el Movimiento Casa del Pueblo decidimos pasar a formar parte del MTR Capital, cambiando también nuestro nombre, ya que creíamos —y seguimos creyendo— que toda identidad resulta transitoria y debe reinventarse al calor de las luchas y territorios donde se libra la pelea a diario. Además, llevar el nombre de Teresa Rodríguez (compañera asesinada por la represión en Neuquén) era más consecuente con el carácter que había cobrado el movimiento para ese entonces.

Participamos activamente de las jornadas de lucha del 19 y 20 de diciembre de 2001, y en numerosos y sucesivos planes de lucha impulsados por las des-

ocupadas y los desocupados. Durante este proceso comenzamos a vivenciar diferencias en la forma de construcción cotidiana y eso nos llevó a separarnos de estos sectores del MTR, hasta constituirnos como MTR La Dignidad, con trabajo territorial en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en el camino de la construcción de poder popular para que el cambio social sea posible. No dudamos que somos muchos y muchas los que luchamos en este sentido, y somos críticos/as y autocríticos/as al momento de referirnos a las divisiones que atravesó tanto nuestro movimiento, como otras organizaciones hermanas en esa coyuntura tan compleja en el país. Por eso creemos en la articulación y la unidad de todos/as aquellos/as que tenemos como objetivo la transformación revolucionaria de la sociedad. Sin ánimo alguno de homogeneización ni de hegemonismo, entendemos que serán los propios pueblos como vanguardias de lucha quienes llevarán a cabo este proyecto, que para nosotros y nosotras se llama socialista. Un socialismo que tal como pretendía Mariátegui, no deberá ser “ni calco ni copia”, sino una creación original de los pueblos.

En todo este recorrido, fuimos asumiendo que para realizar un profundo cambio en la sociedad resulta necesario dar la lucha desde todas las esferas de la vida, y poder construir políticas desde y junto con todos los sectores del campo popular. A partir de esto, nace la idea de ampliar el horizonte de disputa política, de manera tal que nuestro movimiento sea parte de distintos frentes y territorios de lucha, ya que las luchas estudiantiles, sindicales, por la salud pública, por la vivienda digna, por la educación —entre tantas otras— las tenemos que dar entre todos y todas, para lograr un verdadero cambio integral en la sociedad. Desde ya, esto no se traduce en deshacerse de la construcción previa, ni mucho menos en apartarse del trabajo territorial. Por el contrario, apuntamos a la ampliación de la disputa desde una perspectiva de integralidad, logrando abarcar y amalgamar simultáneamente todos los frentes de lucha contra las diversas formas de opresión o explotación que padecemos como pueblo. Con este espíritu, con esta historia, y a partir de la confluencia y hermanamiento de numerosos compañeros y compañeras, nace el MPLD, con una fuerte presencia en todas las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, y con militancia territorial tanto en localidades del conurbano bonaerense (La Matanza, Avellaneda, Lanús, Moreno y Florencio Varela) y la costa atlántica (Mar del Plata, Villa Gesell y Mar Azul), como en otras provincias de la Argentina (Salta, Río Negro, Tucumán, Chubut, Chaco y Misiones).

Para nosotros, el poder popular, o poder popular revolucionario, es un camino de organización y lucha a partir del cual comenzamos a crear hoy las instancias y formas de poder donde el pueblo, los trabajadores, los oprimidos,

nos expresaremos en la sociedad futura. Estamos convencidos de que para liberarnos y emanciparnos tendremos que derrumbar todos los cimientos que sostienen el sistema de dominación actual, capitalista, patriarcal, colonial e imperial, y crear así un nuevo mundo libre y socialista.

Los espacios u organismos en los que es posible ir construyendo ese poder del pueblo son las asambleas, la acción directa, las diferentes formas de lucha callejera (cortes de ruta, de calles, ocupaciones, acampes, bloqueos, huelgas, paros, tomas, escraches y cualquier otra que podamos inventar), la construcción de espacios prefigurativos como los bachilleratos y primarias populares, los jardines comunitarios, los centros de salud popular, las casas de las mujeres luchadoras, los talleres culturales, las radios y TV comunitarias, los periódicos y las revistas contrahegemónicas, y luego, la combinación de todos estos organismos con la lucha de cada frente: sindical, estudiantil, cultural, juvenil y villero, por nombrar solo algunos. No hay que perder de vista la contextualización coyuntural, es decir, que esta construcción va teniendo diferentes matices y adquiriendo nuevos rasgos y características en relación con la intervención política general, y con sus diversas instancias de confrontación y de mutua articulación.

Desde esta perspectiva, como movimiento fuimos transitando una metamorfosis sumamente fecunda: poco a poco, la lucha por reivindicaciones inmediatas (centradas en exigirle y arrancarle al estado, por ejemplo, alimentos para nuestros comedores y merenderos comunitarios, o fondos para desarrollar emprendimientos productivos en los barrios, sin que ese reclamo implicara subordinarnos a los gobiernos de turno) fue ampliándose hacia horizontes más vastos, involucrando cada vez a más sectores y territorios del campo popular. En ese andar colectivo, sin renegar de nuestra identidad y orgullo como piqueteros y piqueteras, comenzamos a asumirnos como un movimiento de carácter popular no solo por nuestro crecimiento cuantitativo, sino sobre todo por el salto cualitativo que dimos al conformarnos como una organización social, política y cultural, de carácter anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal y anticolonial. Fue un proceso lento y consensuado en sucesivos plenarios y encuentros de discusión colectiva, a través del cual también fuimos definiendo a nuestra militancia como integral. En los territorios donde a diario peleábamos contra el desamparo, comenzamos a construir espacios y proyectos que, en conjunto, aportasen a la recomposición del tejido comunitario y fomentasen la solidaridad de clase y el rechazo a toda forma de racismo y machismo. La columna vertebral de todas las instancias era y es la recuperación, desde abajo y a la izquierda, de nuestra dignidad como pueblo. No dejamos de apelar a la acción

directa para arrancarle al estado y a los grupos dominantes recursos; ni tampoco menguaron las actividades autogestivas para financiar nuestros espacios (peñas, rifas, bingos, ferias de ropa, polladas y otras), pero sí comprendimos que debíamos reinventar nuestras modalidades de lucha y no rutinizarlas. Al piquete como metodología lo resignificamos como bloqueo de accesos a empresas (como la farmacéutica Disprofarma o los hoteles cinco estrellas) y a oficinas de ministerios estatales (Ambiente y Espacio Público, Comisión Municipal de la Vivienda, Jefatura de Gabinete y otros), o bien como acampes en la vía pública o como piquetes culturales. Pero incluso cuando lo consideramos necesario, volvimos a nuestras raíces y apelamos nuevamente al clásico piquete, como ocurrió en diciembre de 2012, cuando realizamos siete cortes simultáneos de avenidas en la ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna: "¡Contra los malos gobiernos, lucha y organización!".

Nuestra militancia integral en la prefiguración y por el poder popular

Como les comentamos, nuestro movimiento asume la militancia desde una perspectiva de integralidad. Esto implica que cada compañero debe tener una mirada globalizadora, es decir, de totalidad, más allá de los espacios y proyectos específicos en los que participe o intervenga. Desde ya, no supone que todo/a militante deba estar en todo, pero sí que pueda pensar y actuar a partir de su territorio de lucha y construcción cotidiana, aunque sin ensimismarse propiamente en él. Estas iniciativas y espacios son fines en sí mismos, y a la vez son medios para construir y potenciar un proyecto integral de poder popular que apuesta a transformar a la sociedad en su conjunto. De ahí que parte de nuestra batalla diaria sea por romper con la visión compartimentada que tenemos acerca de la realidad, y que es uno de los elementos más potentes que apunta a perpetuar la hegemonía de las clases dominantes en esta sociedad. Devenida en sentido común de los sectores populares, esta visión fragmenta a la sociedad en una serie de compartimentos o dimensiones desvinculadas entre sí: la política, distinta y separada de la economía y de la cultura; lo público diferente de lo privado; las necesidades inmediatas, desconectadas del horizonte emancipatorio por el cual luchamos; el espacio del barrio o del trabajo en el que militamos sin relación con los otros ámbitos, proyectos e iniciativas que desarrollamos como movimiento popular en el resto del país. A contramano de esta mirada parcial, la militancia integral que proponemos como parte de nuestra cultura política nos permite entender que cada una de estas dimensiones

de la realidad son momentos de una totalidad.

Pero igualmente importante es entender que a la vez que luchamos contra esa variedad de enemigos que encarnan las diversas formas de opresión y explotación que mencionamos, también peleamos contra aquello que anida en nuestras propias relaciones interpersonales, entre compañeros y compañeras, en nuestros cuerpos y maneras de pensar, desear y actuar a nivel cotidiano, que reproduce al sistema dominante. El racismo, la misoginia y la violencia de género, así como las relaciones de poder también se dan en pequeña escala (a nivel "molecular"), en los vínculos personales que entablamos a diario, y no solo en un plano más amplio que involucra al conjunto de la sociedad (es decir, a nivel "macro-social"). El desafío entonces es lograr combinar esas luchas, asumiendo que en nuestra vida cotidiana sufrimos diferentes formas de opresión, discriminación y explotación. Por eso, podemos definir a aquello contra lo que luchamos como un sistema de dominación múltiple. Esto significa que no existe una única manera a través de la cual se nos oprime o explota, sino que este proceso de sometimiento asume distintas formas y se da en diversos planos de nuestras vidas. Hablar de un sistema de dominación múltiple implica entender que las diferentes modalidades de opresión se encuentran articuladas o conectadas entre sí (por lo general reforzándose mutuamente unas a otras). Por lo tanto, si bien es importante dar cuenta de las características específicas que distinguen a cada forma de dominación (de ahí su carácter múltiple), también es preciso analizar qué vínculos o nexos existen entre cada una de ellas desde una perspectiva integral. Para nuestro movimiento, cada resquicio o dimensión de la vida cotidiana se torna así una trinchera de lucha contra esas múltiples formas de dominio, pero a la vez, una oportunidad para crear e irradiar aquellos valores y prácticas que pretendemos sean parte de la sociedad futura.

Como movimiento, al mismo tiempo que íbamos creciendo y cultivando esta vocación de militancia integral, fuimos generando proyectos y espacios donde ensayar —aquí y ahora— esas otras formas de relacionarnos que deseamos para el mañana. A esta propuesta de construcción en el presente de los vínculos y maneras de educarnos, cuidarnos, organizarnos, comunicarnos y luchar contra toda forma de injusticia, la denominamos política prefigurativa. En conjunto, estos ámbitos e iniciativas apuntan a la creación de gérmenes de autogobierno y poder popular en los diferentes territorios y trincheras que habitamos, de manera tal de ir forjando ya desde ahora esa sociedad por la que militamos, sin esperar a la tradicional conquista del poder para comenzar a transformar las relaciones sociales cotidianas. A continuación, les convidamos brevemente en qué consisten cada uno de estos proyectos y espacios que conforman la columna vertebral del MPLD.

Como células básicas de autoorganización en los barrios tenemos nuestros cabildos, que buscan recomponer y potenciar el tejido comunitario en los territorios con vistas a hacer germinar embriones de poder popular en los ámbitos donde damos pelea. Tal como expresamos en uno de nuestros documentos fundacionales como movimiento piquetero:

[...] el alma de nuestro movimiento son los cabildos (asambleas). Quienes integramos este movimiento gobernamos y deliberamos a través de nosotros mismos. No delegamos en nadie ni el gobierno ni nuestra capacidad de deliberar. Nos reunimos en cabildos y decidimos por consenso o por mayoría qué se hace o se deja de hacer. Además, elegimos entre nosotros a los compañeros que consideramos los más capaces para encabezar la ejecución —y solo la ejecución— de lo resuelto.

La mayoría de nuestros cabildos han dado vida a un sinfín de emprendimientos y proyectos autogestivos, que hoy constituyen dignos ejemplos de que la prefiguración es nuestro faro estratégico de construcción política, sin dejar de paliar las falencias y necesidades concretas que se sufren en los barrios, como es el caso de los más de sesenta comedores y merenderos comunitarios que sostenemos a diario, y donde se alimentan miles de compañeros y compañeras.

En el plano de la educación popular y comunitaria, hemos construido tres bachilleratos populares, tres primarias populares y seis jardines comunitarios, todos ellos espacios autónomos y asamblearios de construcción de nuevas concepciones político-educativas y de poder popular territorial. Asumimos la perspectiva de la educación popular, ya que entendemos a la praxis educativa como un proceso dialéctico de reflexión y acción política; y postulamos una concepción del conocimiento como herramienta colectiva para la lucha y para la edificación de una nueva sociedad en el hoy. Las personas y grupos que participamos en estos espacios educativos tratamos de llevar adelante un espacio educativo democrático y dialógico, donde todos y todas aprendamos de todos y todas. No concebimos a estos espacios educativos como ámbitos aislados, sino más bien como parte de un entramado y articulado mayor que entendemos hay que potenciar y multiplicar para cambiar radicalmente nuestras condiciones de existencia e ir prefigurando en nuestros ámbitos de construcción cotidiana la sociedad por la cual luchamos. Es por ello que intentamos llevar adelante un proyecto pedagógico-político popular, comunitario, participativo y liberador.

A su vez, a nivel gremial, conformamos la corriente sindical Latiendo en Masa. Formamos parte de ella, trabajadores de la construcción agremiados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic) —en la ciudad de Buenos Aires—, trabajadores de la educación público-estatal organizados en la Agrupación de Educadores Ni calco ni copia —que forma parte del sindicato de maestros: Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys)—, trabajadores de la salud, puesteros/as de las diferentes villas de la ciudad, la Agrupación Vendedores Libres y trabajadores cooperativistas del MPLD. Conscientes de la importancia de la articulación nacional con todos aquellos sectores que luchan por trabajo digno y en contra de la precarización laboral, nos sumamos a construir la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un organismo gremial y de base que aglutina a miles de trabajadores y trabajadoras que no son contemplados como tales por las centrales sindicales tradicionales. Bajo la consigna “somos lo que falta”, en la CTEP confluyen: cartoneros, integrantes de las cooperativas del plan Argentina Trabaja, de comunidades campesinas e indígenas, empresas recuperadas y autogestionadas, vendedores ambulantes y cuadrillas de trabajo territorial de las villas.

En cuanto a la salud, hemos creado tres centros de salud comunitarios (en las villas 31, 21 y 1-11-14), un centro de día para consumos problemáticos llamado Puentes (estamos construyendo actualmente un segundo centro de día en la Villa 20 de Lugano), así como un laboratorio popular de análisis clínico en Bajo Flores. El laboratorio popular está en el segundo piso del centro de salud comunitario que funciona en esa misma villa, y que junto a vecinos del barrio hemos puesto a andar con mucha ilusión y trabajo. Allí, al igual que en los restantes centros, todas las semanas se atienden niños, niñas, jóvenes y adultos que acceden a controles de salud y tratamiento en un espacio que los incluye y los contiene. En ese marco, realizamos también campañas de prevención en diferentes puntos de los barrios, buscando que los centros de salud salgan al encuentro de la población que los rodea, a prevenir y construir salud comunitaria con ella. Decenas de compañeros y vecinos se han formado como promotoras y promotores de salud durante todo el año pasado. Este año, en el caso del Bajo Flores, se proponen conocer cuál es la real incidencia de la tuberculosis en el barrio, diagnosticarla y tratarla. La solidaridad, el compañerismo, la prevención y el amor de hombres y mujeres, son nuestras herramientas para luchar y construir una salud en manos del pueblo.

También creemos que es central generar nuestros propios espacios de cultura popular. Por eso desde hace años dictamos numerosos talleres en dife-

rentes villas y barrios, tanto de la ciudad como del conurbano bonaerense, totalmente gratuitos y abiertos a la comunidad: de circo, danza, canto, teatro del/la oprimido/a, murga, percusión, fotografía, grabado, escultura y plástica. De ellos han surgido varios coros de niños y murgas juveniles que forman parte del MPLD, dando vida y alegría a nuestros territorios rebeldes. Como parte de esta disputa por una nueva cultura hemos creado Tumbarrati, un colectivo de muralismo y arte popular que interviene en los espacios públicos y dinamiza buena parte de estos talleres, entendiendo que el arte es una herramienta de transformación tanto personal como (especialmente) colectiva. Por eso abogamos por la generación de espacios de producciones culturales independientes y autogestivas que reflejen y reinventen la realidad de las luchas de nuestros pueblos desde la participación creativa. En este transitar, desde hace algunos meses hemos también inaugurado un teatro popular en un ex mercado municipal recuperado por el movimiento en Palermo, donde además, tenemos un comedor comunitario. Allí ensayan numerosos compañeros de los barrios que forman parte de nuestros talleres. Atentos a la necesidad de articular esta lucha por la defensa y multiplicación de la cultura popular, somos parte del Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos (Eneca), que nuclea a decenas de centros culturales y organizaciones de base que pelean por este mismo objetivo.

En el plano socioambiental, nuestra lucha en defensa del territorio y de los bienes comunes ha dado lugar al nacimiento del Colectivo en Defensa del Territorio Aymuray. El vocablo quechua que da origen al nombre de este espacio del MPLD hace referencia al sexto estadio del calendario agrícola incaico, el cual anuncia la llegada del período de cosecha, el momento en que el arduo trabajo de la siembra finalmente brinda su fruto y el maíz está listo para convertirse en alimento de toda la comunidad. De la misma manera, consideramos que de la mano de los movimientos de base, de las organizaciones populares, de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios, nuestra América está siendo protagonista de un profundo cambio de época, en donde una nueva relación entre hombres, mujeres y naturaleza está naciendo. Como movimiento ejercemos la solidaridad activa y el hermanamiento con los pueblos y comunidades que resisten al embate del extractivismo y de los agronegocios. Sin embargo, también creemos que es preciso problematizar a las ciudades donde habitamos como bienes comunes, con la certeza de que la simiente de la revolución está germinando también en las luchas urbanas contra la contaminación ambiental, la falta de agua potable y de servicios básicos o el hacinamiento en nuestros barrios y villas; y de que los frutos de la liberación están madurando

en el prolífico ensayo de alternativas a estos flagelos, tanto en el campo como en la ciudad. Por eso debemos prepararnos para el tiempo de la cosecha que se avecina en ambas territorialidades, con la convicción de que el proyecto al que aspiramos sí o sí deberá ser eco-socialista y tributario de la soberanía alimentaria y el buen vivir.

Respecto a la comunicación, hemos impulsado diversos proyectos que apuntan a una comunicación popular y comunitaria: la radio popular FM La Caterva 97.3, que funciona en un multiespacio en el barrio de Barracas, que transmite las veinticuatro horas al aire y por internet; cuenta con más de treinta programas propios generados por diversos colectivos juveniles y de vecinos de las villas;¹ un canal de televisión comunitario en Villa Soldati, llamado El Barrio TV, que produce contenidos a partir de la participación directa de las y los vecinos del barrio, así como el proyecto En Movimiento TV, que se dedica a cubrir y difundir en formato audiovisual las luchas y resistencias invisibilizadas por los grandes medios, además de producir video-documentales sobre estas temáticas; el periódico popular de noticias Negro y Blanco, con una tirada semanal de diez mil ejemplares, distribuido gratuitamente todos los viernes en las estaciones del subterráneo y de trenes de la ciudad de Buenos Aires; la revista político-cultural Nuestra Voz, que sale a la calle cada dos meses, por lo general con un eje central en cada uno de sus números (la lucha de los pueblos indígenas, la problemática del trabajo, la defensa de los bienes comunes, las culturas de la resistencia, entre otras temáticas relevantes). Además de estos proyectos, actualmente estamos embarcados en la publicación de libros y cuadernillos, a través de una editorial autogestiva propia que recién está dando sus primeros pasos. Nuestra apuesta por la comunicación popular supone una vocación constante de articulación y hermanamiento con otros colectivos y propuestas similares, y es por eso que en un plano más general formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y del Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias.

En cuanto a la lucha antipatriarcal, si bien es algo transversal en nuestro movimiento, desde hace algunos años hemos asumido el desafío de construir en nuestros territorios una política con relación a las violencias, desigualdades, el control sobre los cuerpos y la sexualidad, así como la explotación de las mujeres. Romper el silencio fue quizás la respuesta inmediata que dio paso a la necesidad de asumir lo personal como político, e ir creando —de a poco— espacios íntimos de encuentro y contención entre compañeras, que con el tiempo se transformaron en ámbitos de autoorganización de mujeres. Así nació Mujeres en Lucha, a partir de la realización de talleres colectivos en nuestros

barrios y villas. Y para cambiar de cuajo la realidad entendimos que tenemos que revolucionarlo todo, incluidas las casas y las camas. La construcción de herramientas que nos permitieran intervenir en nuestra realidad cotidiana nos fue llevando así a reconocer a nuestros propios cuerpos y deseos como una trinchera y territorio más de rebeldía.

Además de todos estos proyectos y espacios, existen muchos otros que conforman al MPLD. Para no extendernos demasiado simplemente mencionamos: el Colectivo Popular por los Derechos Humanos (Copdh), que entre otras actividades realiza talleres en los barrios contra la represión policial e institucional y forma parte del Encuentro Nacional Antirrepresivo; La Dignidad por Asalto, agrupación estudiantil que milita en facultades, instituciones terciarias y escuelas secundarias; el Espacio de juegos, que ha creado y sostiene varios ámbitos lúdico-recreativos en nuestras villas; el bar social, político y cultural La Dignidad, que funciona de manera cooperativa y asamblearia de lunes a sábados en el barrio de Villa Crespo y brinda comidas caseras a precios populares; talleres a la gorra, que son referencia para las bandas de música y los cantantes populares que no tienen cabida en los espacios comerciales para difundir su arte; la Escuela de oficios, que funciona en la Villa 1-11-14 en Bajo Flores y dicta cursos de plomería, carpintería y herrería, entre otros; y un instituto de investigación, formación y ciencia popular, que estamos construyendo junto a varios colectivos militantes y organizaciones de base.

Las periferias urbanas como trincheras de lucha y como bien común: la experiencia de la Corriente Villera Independiente

Como movimiento popular, consideramos que uno de los mayores desafíos que tenemos en el actual contexto de crisis capitalista es el de problematizar y recrear a la ciudad, y en particular a las periferias urbanas, como espacios vitales y en permanente disputa. A quienes militamos en los barrios y demás territorios de lucha nos surgen siempre las mismas interrogantes que constituyen a la vez un faro para nuestro andar colectivo: ¿Cuál es la ciudad en la que queremos vivir y cómo podemos comenzar a construirla en el presente?; ¿cómo luchar contra la gentrificación, la especulación inmobiliaria y el extractivismo urbano que asola los espacios-trinchera que habitamos, evitando que se disgreguen y desarticulen los lazos comunitarios y la solidaridad militante que aún hoy perdura en ellos?

Atendiendo a este enorme desafío, como MPLD decidimos impulsar a mediados de 2012 la conformación de la Corriente Villera Independiente (CVI) como una instancia de articulación de las vecinas y vecinos de las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires que quieran luchar contra los malos

gobiernos y en pos de una urbanización que tenga como protagonistas en todo este proceso a los habitantes de los barrios. Ya se han realizado dos congresos villeros en lo que va de nuestra corta e intensa existencia como corriente. Durante los últimos meses se han sumado a ella diversas organizaciones y colectivos territoriales hermanos con presencia en las villas. Una de nuestras primeras metas es trabajar y luchar por la urbanización con radicación. Sabemos que para ello tendremos que sentarnos a discutir con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero también estamos convencidos de que nuestro poder está en la organización y en la lucha de todas las vecinas y vecinos dispuestos a poner el cuerpo y las ideas para cambiar todo lo que deba ser cambiado.

Queremos recuperar la identidad de las villas como barrios de trabajadores/as, barrios que fueron levantados por las y los propios vecinos a través la solidaridad y el apoyo mutuo. En este proceso de autoorganización nos posicionamos como independientes de los gobiernos de turno, que solo se acercan a nuestros territorios para pedir favores, votos y comprar conciencias. Este juego macabro es una constante de los malos gobiernos: su práctica recurrente de ofrecer plata para corromper está pensada para dividirnos, por eso es muy importante nuestro trabajo de todos los días y la autonomía integral que defendemos como valor ético y militante. Así demostramos que hay otra forma de hacer política, que hay ideas y acciones transformadoras que no pueden ser compradas ni corrompidas, porque nuestra dignidad no tiene precio. Para enfrentar a los poderosos, esos que hacen negocios con nuestras necesidades, creemos que es fundamental la unidad y la organización de base. Por eso, como CVI nos organizamos de manera asamblearia, buscando la más amplia participación de todas las compañeras y los compañeros. Creemos que esta es la mejor herramienta contra los abusos de poder y el clientelismo que predomina en nuestros barrios. Al igual que en el caso del MPLD, como parte de la CVI, realizamos asambleas por barrio, respetando la autonomía de decisión y acción de cada villa, pero además, generamos una instancia de articulación colectiva donde confluyen las y los representantes elegidos en la asamblea de base de cada lugar.

La lucha por la urbanización con radicación de las villas es la columna vertebral de la CVI. Pero en el camino hacia ese objetivo, que es largo e intrincado aunque no imposible, trabajamos día a día para mejorar nuestras condiciones de vida. En este sentido, a medida que vamos discutiendo e identificando los problemas, los vamos resolviendo como comunidad organizada. Para ello, contamos con amplios saberes históricos y populares que ponen al movimiento villero y a las clases subalternas como únicos actores posibles para la recons-

trucción de nuestros barrios, nuestras vidas, nuestro pueblo, bajo la consigna: "Solo el pueblo salvará al pueblo". El tipo de urbanización con radicación que imaginamos es una propuesta integral que permite que todas las vecinas y los vecinos (niñas y niños, jóvenes, personas adultas y ancianas) puedan desarrollar al máximo sus capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a ningún lado, que en el barrio donde estamos nos quedamos a vivir dignamente. No queremos ni subsidios, ni terrenos en otras provincias ni ninguna de esas falsas "soluciones". El segundo punto es que queremos hacerlo nosotras y nosotros mismos, pelearle a los malos gobiernos esto, ya que es parte de recuperar la identidad villera solidaria. En este intrincado camino, nos animamos a pensar y llevar a la práctica proyectos e iniciativas comunitarias que involucran a las diferentes esferas de la vida cotidiana, como son la educación, la salud, la vivienda, la cultura y el trabajo, e ir luchando para construir todo esto de forma colectiva y democrática. Por eso hemos decidido impulsar durante el mes de setiembre y octubre de este año, en todas las villas y asentamientos de la ciudad, una consulta popular para instalar con fuerza nuestra demanda de urbanización con radicación.

Además, reivindicamos la solidaridad porque la practicamos día a día. Frente a este mundo capitalista, colonial y patriarcal que nos impone una vida individual y egoísta, marcada por la diferencia entre ricos y pobres, la segregación socioespacial, las múltiples formas de violencia hacia las mujeres y el racismo, nosotras y nosotros elegimos mirar a la vecina y el vecino de al lado y tender la mano. Entendemos que nada puede construirse individualmente, y por eso venimos impulsando jornadas de trabajo voluntario en nuestras villas; porque somos solidarias y solidarios y nos unimos por manzana, por pasillo, por barrio, entre todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Vamos camino a la construcción nacional, junto con asentamientos y barrios del conurbano y de las provincias de toda nuestra Argentina profunda, esa del color de la tierra, sin olvidarnos jamás de las hermanas y hermanos de los pueblos de nuestra América. Más allá de las particularidades de cada barrio, compartimos problemáticas similares y por eso nos unimos desde la diversidad para salir a pegar con un solo puño a los malos gobiernos. Esta autonomía que sostenemos a diario debe ser integral, complementando los proyectos prefigurativos con el avance político en la disputa con los punteros y los aparatos estatales, por la conducción y representatividad de las villas.

En estos dos años de existencia como corriente, construimos más de lo que los malos gobiernos hicieron en todas sus gestiones. Fuimos armando una red, una organización que lleva adelante la urbanización de nuestras villas de forma de-

mocrática, transparente, asamblearia y popular. Pavimentamos más de cincuenta calles que les permiten a los vecinos y vecinas vivir en mejores condiciones, sin tener que enterrarse hasta las rodillas de barro cada vez que llueve, y reduciendo a la mitad las inundaciones en los sectores donde se realizó el trabajo. Además, instalamos más de mil luminarias, armadas y colocadas por la CVI de forma autogestiva y autónoma, que mejoran la iluminación del barrio, y realizamos más de doscientas cloacas, obras centrales para la dignidad de nuestras familias, para que los desechos y las enfermedades no sean una costumbre en nuestros territorios. Pusimos nombre y señalización a más de doscientas manzanas de los barrios que habitamos. Para hacer efectivas todas estas iniciativas, generamos más de quinientos puestos de empleo genuino y sin explotación, ya que las obras son puestas en marcha con compañeros de los propios barrios, atacando el problema de la desocupación y fundamentalmente la corrupción de algunos malos delegados que pretendían quedarse con parte de la ganancia de los trabajadores. En paralelo, pusimos en marcha una empresa de gestión social de aguas, que lleva a nuestras casas —a mitad de precio— agua potable, elemento vital y fundamental en nuestros barrios, con el objetivo de combatir las enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua en las villas, como son las diarreas y vómitos o el nivel de plomo en sangre. A todo este trabajo, hay que sumarle las cuadrillas de limpieza que mantienen a nuestros barrios bellos, porque la belleza es un derecho para las y los de abajo también, y elimina posibles enfermedades relacionadas con la falta de respuesta del gobierno de la ciudad en el tema de la basura. En igual sentido, la desratización fue otra tarea realizada por la CVI, que nos permitió combatir a esta plaga que contagia enfermedades en la piel y en la sangre. La construcción colectiva en términos de diversidad sexual e igualdad de género es también una política propia de nuestra corriente, y por eso generamos numerosos talleres de autoformación, así como espacios de contención, reflexión y promoción de nuestros derechos como mujeres. En este plano, uno de los mayores orgullos de la CVI es la creación de la Primera Casa de la Mujer Luchadora, ubicada en la Villa 31 bis de Retiro.

Todos estos logros fueron conseguidos con luchas basadas en la acción directa: acampes, piquetes, movilizaciones, bloqueos y ocupaciones. También a través de reuniones, discusión y deliberación colectiva, y fundamentalmente con una profunda convicción de que los villeros y las villeras de la ciudad de Buenos Aires tenemos que ser escuchados, tenidos en cuenta y consultados porque somos un actor sociopolítico que está en todas las luchas y en todos los trabajos a lo largo del tiempo, y exige ser protagonista de su presente y futuro. Por eso, más allá de estos logros colectivos, consideramos que las or-

ganizaciones y movimientos populares podemos aportar a la generación de un diagnóstico global acerca de la ciudad que habitamos (y que muchas veces padecemos), pero sobre todo contribuir a la construcción de una agenda en común, que dinamice proyectos concretos que permitan democratizar la toma de decisiones en torno a los espacios públicos y comunitarios, sin dejar de construir y potenciar estos embriones de poder popular en cada territorio donde estamos presentes. Nuestro proyecto, por tanto, implica concebir a la ciudad como bien común, defender a lo público como aquello colectivo que nos pertenece a todos y todas, impulsar el ejercicio cotidiano del autogobierno en nuestros territorios, rechazar a la ciudad empresa y reivindicar la identidad barrial, así como el recuperar la praxis política como herramienta comunitaria.

Articulación y confluencia: los pueblos como vanguardia

Somos profundamente críticos de aquellas organizaciones y movimientos que se autoproclaman vanguardia de las luchas, sin participar, aportar y aprender activamente de ellas, sustituyendo a los verdaderos protagonistas de los procesos de resistencia y combate contra las diferentes formas de explotación y opresión que encarna este sistema patriarcal, capitalista y colonial. Tampoco creemos que el MPLD sea la organización que está llamada a liderar el proyecto revolucionario de autoemancipación de los sectores populares. Nos consideramos, sí, parte de los pueblos en resistencia, pero somos conscientes de que el triunfo será producto de la creciente articulación y confluencia de las diversas organizaciones y tradiciones propias de las clases subalternas. Nuestro programa político, por lo tanto, no puede preceder a los sujetos en lucha, ni estos pueden constituirse sino a partir de las disputas que damos y los territorios que habitamos y construimos en común.

Por ello el Frente Nacional Pueblo Unido surge como un espacio de coordinación que desde hace un año parimos junto a otros movimientos populares hermanos de la Argentina de a pie. Sabemos que en el andar colectivo y el aprendizaje mutuo iremos fortaleciendo nuestras construcciones y animándonos a confluir en proyectos más amplios y generosos, porque nadie libera a nadie, pero nadie se libera solo. Para ello, es preciso asumir a la osadía como aguijón y combustible de nuestro proyecto político, sin bajar la guardia ni perder jamás la alegría. En ese caminar juntos y juntas, estamos seguros que nos iremos encontrando. Mientras tanto, como solemos gritar en nuestras marchas, nos seguiremos viendo en la lucha.

Referencias

Movimiento Popular La Dignidad. Recuperado el 20 de setiembre de 2013 de -[http:// www.mpld.com.ar](http://www.mpld.com.ar)-

contrapunto



Autores

Alexandra Martínez es venezolana y está realizando su tesis en la Escuela de Sociología Universidad Central de Venezuela. Es coordinadora de Proyectos para Venezuela, Fundación Rosa Luxemburgo. Integra el Grupo Permanente de Trabajo Alternativas al Desarrollo.

Alfredo Falero es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Sociología, docente e investigador en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y en el Área de Turismo de la Facultad de Humanidades. Es co-coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Pensamiento Crítico en América Latina y sujetos colectivos del Espacio Interdisciplinario y autor de numerosos trabajos en las siguientes áreas: movimientos sociales, procesos globales, América Latina y Teoría Sociológica.

Alicia Rodríguez es psicóloga (Universidad de la República) y magister en Psicología Social (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina). Cursa un doctorado en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Es docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, donde coordina el Programa de Psicología Social Comunitaria. Sus principales desarrollos están vinculados al aporte de la Psicología Comunitaria en el abordaje de diversos campos de problema: los procesos habitacionales y residenciales, los escenarios barriales urbanos y las políticas públicas sociales.

Aline Da Fonseca es geógrafa brasileña, profesora de geografía y magíster en Educación, Cultura y Comunicación en periferias urbanas (Universidad Estadual de Rio Janeiro). Docente del Programa Integral Metropolitano y del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

Ayelén Gallego es argentina, militante del Encuentro de Organizaciones de Córdoba e integrante del colectivo de investigación El Llano en llamas.

Benjamín Nahoum es uruguayo, ingeniero civil y responsable del Departamento de Apoyo Técnico de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua desde el año 2000. Fue asesor en vivienda de la Intendencia de Montevideo entre 1990-1992 y 1996-2000 y coordinador del Sector

Vivienda del Centro Cooperativista Uruguayo (1981-1985). Docente de la Facultad de Arquitectura y ex docente de la Facultad de Ingeniería (Universidad de la República). Es autor de diversas publicaciones sobre vivienda, hábitat, cooperativismo de vivienda y los "sin tierra urbanos" y columnista del semanario Brecha sobre temas de vivienda desde 1985.

César Enrique Pineda es sociólogo mexicano, magíster en Estudios Latinoamericanos, estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y profesor universitario. Militante de jóvenes en resistencia alternativa en Ciudad de México, organización dedicada a la educación popular, proyectos editoriales y a la articulación de redes anticapitalistas.

Diego Castro es comunicador uruguayo, coordinador del Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, de la Universidad de la República. Se vincula a la extensión universitaria a través de su militancia estudiantil en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay a fines de la década del 90.

Fernando Zerboni es uruguayo, integrante de la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Vive en la cooperativa TEBELPA. Integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros hasta que fue detenido en 1973. Participó en la publicación El Hervidero de 2005 a 2010 y fue concejal del zonal 14 en los períodos 1990-1994 y 1995-1999.

Henry Renna es militante del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) y trabajador del Centro de Estudios y de Educación Poblal. Actualmente es director del Diplomado en Movimientos Sociales y Autogestión Comunitaria y se desempeña en apoyo estudiantil en la Escuela Autogestionada para jóvenes y adultos Paulo Freire.

Marilena de Souza Chaui es una destacada filósofa brasileña. Es profesora titular de Filosofía Política e Historia de la Filosofía Moderna de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo. Militante del Partido de los Trabajadores (PT).

María Mercedes Ferrero es argentina, militante del Encuentro de Organizaciones de Córdoba e integrante del colectivo de investigación El Llano en llamas. En la actualidad cursa el Doctorado de Estudios Sociales de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba

Marcelo Lopes de Souza es profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es fundador y coordinador de un grupo de investigación Núcleo de Pesquisas Sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial cuyo foco principal son los vínculos entre relaciones sociales y espacio y muy particularmente, la espacialidad de los cambios sociales.

Marcelo Pérez es politólogo uruguayo y magíster en estudios en políticas aplicadas (España), maestrando en estudios contemporáneos de América Latina (Universidad de la República y Universidad Complutense de Madrid). Docente del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República. Dentro de sus principales desarrollos están vinculados a las ciencias sociales interdisciplinarias, las políticas sociales, la producción social del hábitat y la participación popular. Fue militante estudiantil a nivel de secundaria y universidad, actualmente integra la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.

María Noel Sosa es uruguaya y licenciada en psicología. Se encuentra realizando su tesis de Maestría en Psicología Social de la Universidad de la República. Se vincula a extensión universitaria en el marco de su militancia estudiantil entre 2006 y 2010. Actualmente es docente del Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo.

Mariana Menéndez es uruguaya, estudió psicología y psicología social, en la actualidad cursa el Doctorado de Estudios Sociales de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente del Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, de la Universidad de la República. Participó en la Federación de Estudiantes y en la radio comunitaria La Voz fm.

Maurico Ceroni es geógrafo por la Universidad de la República, magíster en Ciencias Ambientales. Docente del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Las principales líneas de investigación transitan en las áreas de la Ciencias Geográficas enfocado en las transformaciones territoriales que ocurren en el espacio geográfico del Uruguay, tanto desde la dimensión biofísica como socioeconómica, mediante la utilización de teledetección y sistemas de información geográfica.

Movimiento Popular La Dignidad es un movimiento social y político de Argentina que se declara anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal y anticolonialista.

nial, en defensa de los bienes comunes y por la construcción de poder popular. Está presente en diversos barrios y villas de las periferias urbanas de ese país e impulsa numerosos proyectos prefigurativos en materia de salud, educación, cultura, trabajo y comunicación popular.

Pablo Caballero es uruguayo, integrante del Consejo Directivo de la cooperativa COVIGU. En el año 2005, participó en las radios comunitarias Alternativa e Iniciativa. Militante de Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua desde el año 2001 a nivel de los zonales 13 y barrio Peñarol. En 2009 integró la Comisión de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo y desde diciembre de 2010 es parte de la Dirección Nacional de la federación.

Raúl Zibechi es escritor y periodista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina. Es autor de varios libros y artículos sobre temas vinculados a las luchas sociales en el continente. Escribe en el semanario Brecha y colabora con el Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo.

